

# ATLAS HISTÓRICO DE LA ARGENTINA

Mirta Lobato-Juan Suriano

Editorial Sudamericana- Buenos Aires (2000)

# 1- El progreso, la modernización y sus límites, 1880 – 1916

## La Política

Al comenzar la década de 1880 se iniciaba una etapa en la cual se consolidaron tres rasgos importantes de la sociedad argentina: a) la instauración de un orden político conocido como el orden conservador, que aseguraba el control de la sucesión presidencial al grupo gobernante, en un proceso cruzado por tensiones y conflictos; b) económicamente se afianzó una modalidad de producción, circulación y acumulación de capital bajo el sistema capitalista, al integrarse al orden económico mundial como productor de bienes primarios de exportación; c) socialmente, se complejizó el cuadro social, caracterizado por un marcado cosmopolitismo debido al impacto demográfico y cultural de la inmigración extranjera. La Nación Argentina extendió su poder y autoridad hacia zonas que habían estado bajo el dominio indígena, como los territorios patagónicos y la región chaqueña.

El período se inició con la subordinación de la Provincia de Buenos Aires, cuya principal manifestación fue la federalización de la ciudad porteña. El proceso inaugurado con la crisis del orden colonial se cerraba con el reconocimiento por parte de todas las provincias de la autoridad del Estado nacional. El advenimiento del general Roca al poder, se caracterizó por una etapa de tranquilidad y prosperidad hasta entonces desconocida. Las luchas civiles quedaron en Buenos Aires.

Julio Argentino Roca era un hombre pragmático y su base política fue el Partido Autonomista Nacional (PAN). Ese partido se desempeñó también como canal de reclutamiento de los dirigentes notables y fue un medio de comunicación política entre las figuras claves del interior. La Liga de Gobernadores fue el otro sustento de su poder, que se apoyaba en la burocracia administrativa y en la incipiente burocracia militar de las provincias.

Uno de los soportes del funcionamiento del sistema electoral era el establecimiento de una representación basada en la denominada lista completa, que aseguraba al PAN tanto la unanimidad en el Congreso como la exclusión de las minorías. El resorte constitucional de la intervención federal permitía al presidente, como cabeza del Poder Ejecutivo, intervenir en las provincias para mantener o reponer correligionarios en el gobierno y robustecer la Liga de Gobernadores.

Aunque las normas constitucionales establecían los mecanismos de elección en los niveles provincial y nacional con base en el pueblo elector y en colegio electoral como espacio de la negociación política para la elección del presidente, en este período se producía un complicado andamiaje donde el presidente, los gobernadores y los senadores eran los actores que efectivamente garantizaban la sucesión presidencial.

En este período se dictaron numerosas leyes. La Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital, la Ley de Organización de los Territorios Nacionales y la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Capital que estableció una forma de gobierno para la comuna. Se creó el Consejo Nacional de Educación Primaria con atribuciones autónomas y se sancionó la Ley de Educación Común, N° 1420, que establecía la escolaridad primaria, obligatoria y laica.

En la Ciudad de Buenos Aires prosiguieron algunas obras de salubridad, se celebró el contrato para la construcción del Puerto de Buenos Aires, se organizó la policía de la Capital y

se fundó la Ciudad de La Plata como capital de la Provincia de Buenos Aires. Se dictaron los códigos de Justicia Militar, de Comercio y de Procedimientos en Materia Civil y Comercial. El ordenamiento jurídico era fundamental para garantizar tanto el desenvolvimiento económico como la administración de justicia.

Desde el punto de vista territorial, la disputa sobre límites se mantuvo latente en la región patagónica, donde se negoció la firma de un acuerdo de límites con Chile. La creación de la Gobernación de Misiones, impulsó las negociaciones con Brasil para definir los límites, mientras que con Bolivia hubo conversaciones sobre la frontera en el Chaco.

El proceso de secularización y el conflicto resultante con la Iglesia se inició en 1880, haciéndose muy visible con la sanción de la Ley de Educación Común conocida como Ley 1.420. Este proceso generó la oposición católica y la consecuente ruptura de relaciones con el Vaticano. En este sentido, podría decirse que una de las primeras manifestaciones opositoras tuvo lugar dentro de las filas del partido oficialista y la iniciaron los católicos, alarmados por la tendencia liberal del presidente Roca y de su sucesor, Juárez Celman. Los católicos procuraban restablecer la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Hacia el final del período había varios candidatos para suceder a Roca, que aún dominaba la República. Miguel Juárez Celman era apoyado por el Presidente, aunque su candidatura provenía de la Provincia de Buenos Aires, donde el Gobernador Dardo Rocha aparecía como el mayor oponente. Roca impuso la candidatura de su yerno.

Juárez Celman inició su gobierno con un optimismo generalizado, obtenido gracias a que las consignas de orden, paz y progreso le habían ganado terreno a las tumultuosas décadas anteriores. Durante su gobierno, se inauguró la primera sección del puerto de Buenos Aires y poco después los puertos de Rosario y La Plata. Se realizaron importantes obras públicas en la Capital del país, como la Casa de Gobierno, el Palacio de Salubridad y el Departamento Central de Policía. La ciudad fue remodelada con la apertura de la Avenida de Mayo. La ola secularizadora continuó con el establecimiento de la Ley de Matrimonio Civil y del Registro Nacional de las Personas.

Una vez que Juárez Celman se hubo convertido en Presidente, asumió el liderazgo del PAN como jefe único (lo que se dio en llamar “el unicato”). Esto produjo una mayor clausura en el régimen político y generó problemas con algunas provincias y en el seno de la coalición gobernante. Desde el punto de vista económico, aunque el crecimiento se hizo visible, se dio paso a la especulación y a los negociados. La crítica opositora al gobierno se concentró alrededor de la política ferroviaria y de bancos garantidos, que estuvieron en el centro de la crisis económica de 1890. Un año antes, se había organizado una fuerte oposición al presidente, se hablaba de abdicación de las virtudes cívicas, de indiferencia por parte del gobierno y de apatía.

El polo opositor se nutría con quienes fueron quedando marginados de la toma de decisiones del gobierno. Ellos dieron forma a la Unión Cívica y al movimiento político de 1890, que logró la renuncia del entonces presidente Juárez Celman. Se abrió así un proceso que culminaría con la reforma de la ley electoral en 1912. Desde el punto de vista político, esta fue la primera manifestación de oposición al presidente y culminaría con la Revolución de 1890. Fue organizada por el Comité de la Unión Cívica de la Juventud, con un acto público en el

Jardín Florida, que recibió la adhesión de personalidades prestigiosas como Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen y Leandro Alem. Un poco más tarde, ese Comité se transformó en Unión Cívica y buscó nuevas adhesiones con la apertura de los comités en la ciudad.

La Unión Cívica fue un movimiento heterogéneo, agrupaba católicos, nacionalistas, autonomistas, militares y civiles. El objetivo era colocar a la opinión pública contra el gobierno y preparar una revolución para derrocar al presidente. Demandaban la libertad de sufragio, el respeto de las autonomías provinciales y el establecimiento de una moral administrativa.

La Revolución de 1890 estalló el 26 de Julio a partir del arresto de los principales efectivos del ejército involucrado. Si bien se extendió hacia otras provincias, es la Capital su centro principal, escenario de los enfrentamientos durante 4 días, al cabo de los cuales los rebeldes fueron derrotados. Sin embargo, y a pesar del triunfo, Juárez Celman se vio obligado a renunciar y el gobierno quedó en manos de Carlos Pellegrini, el vicepresidente.

Este conflicto dejó al descubierto la inadecuada disciplina del Ejército y la falta de capacidad del presidente para entender la naturaleza de la oposición y sus planes. Se abrió un período de incertidumbre en el panorama político pues el PAN no podía imponerse tan fácilmente como en el pasado y se fragmentaba la escena política. Se manifestaba en el PAN la imposibilidad de Roca para restablecer su autoridad, tanto dentro de la coalición como en el interior del país.

Al asumir, Carlos Pellegrini trató de restablecer el orden en la administración y las finanzas, pues la revolución se produjo en los marcos de una severa crisis económica.

Mientras tanto, y luego del fracaso revolucionario, la Unión Cívica buscaba reorganizarse. Reunió la Convención Nacional y votó una fórmula para 1891: Bartolomé Mitre - Bernardo de Irigoyen. Pero Mitre ya había pactado con Roca y juntos decidirían sobre quiénes serían los candidatos. Ninguno se sentía con fuerzas para imponerse.

Debido a este acuerdo, se produjo una división en la Unión Cívica: por un lado los anti acuerdistas, la Unión Cívica Radical y por otro lado los acuerdistas, la Unión Cívica Nacional. Los primeros, liderados por Leandro Alem e Hipólito Irigoyen, organizaron su propia convención partidaria y eligieron su propia fórmula para presentar en las elecciones nacionales. El segundo grupo también estaba dividido: había algunos modernistas como Roque Sáenz Peña, Paul Groussac, Miguel Cané y Lucio López, con mayoría en el Colegio Electoral, querían garantizar el triunfo de la fórmula encabezada por Sáenz Peña. Pero Mitre y Roca reaccionaron, neutralizaron la candidatura de Roque Sáenz Peña, y propusieron la de Luis Sáenz Peña, padre de Roque, quien finalmente declina su candidatura.

La Presidencia de Luis Sáenz Peña estuvo marcada por una fuerte oposición y numerosos disturbios. En 1895 presenta su renuncia y lo reemplaza el vicepresidente José Evaristo Uriburu, manteniéndose de alguna manera el predominio del acuerdo entre las fuerzas que acaudillaban Bartolomé Mitre, Julio A. Roca y Carlos Pellegrini. Sin embargo, era difícil y complicada la gestión económica, fruto de la crisis del 90.

Para las elecciones de 1898, la candidatura de Roca fue sostenida por el PAN con el apoyo de Carlos Pellegrini. Fueron los conflictos entre el capital y el trabajo el elemento clave en el diseño de políticas sociales de gobierno. En 1902 se sancionó la Ley de Residencia, o ley de expulsión de extranjeros, que buscaba eliminar a quienes eran considerados agentes de

perturbación social, extranjeros y anarquistas. Sin embargo, junto con esta política represiva se promovieron otras medidas que dieron cuenta de la importancia que adquiriría la cuestión laboral como un aspecto de la cuestión social. En 1904 se envió a las Cámaras un proyecto de legislación del trabajo que, aunque no fue sancionado, contenía un conjunto de medidas que luego formarían parte de la incipiente legislación social de la época.

En 1904 se puso en vigencia una reforma a la ley de elecciones estableciendo un sistema electoral por circunscripciones. En virtud de esta reforma, resultó electo el diputado nacional por la circunscripción de La Boca el candidato socialista Alfredo Palacios, primer legislador de esa tendencia que llegó al Parlamento argentino.

El arbitrario manejo de los comicios y el control que el oficialista Partido Autonomista Nacional mantenía sobre todas las cuestiones políticas fomentaba el descreimiento política. Frente al nuevo llamado a elecciones, la Unión Cívica Radical se abstuvo de concurrir por falta de garantías. El oficialismo, por su parte, después de reunir lo que se daba en llamar “convención de notables”, designó candidatos a Manuel Quintana y a José Figueroa Alcorta para presidente y vicepresidente respectivamente. Sin oposiciones a la vista, el camino quedó allanado para los candidatos oficialistas, quienes asumieron el gobierno en octubre de 1904.

El gabinete de Alcorta no fue un modelo de funcionamiento estable. Las crisis ministeriales eran síntoma de la fragilidad en la que se movía la coalición que lo llevó al gobierno. En el Congreso también se manifestaba la crisis. Sin embargo, el gobierno de Alcorta estuvo signado por la prosperidad, que se expresaba en las cifras del comercio exterior y en el crecimiento paralelo de las rentas de la Nación. Pero los gastos también aumentaron, tanto por los recursos destinados a reforzar la marina como por las reparticiones para la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo. Además las obras públicas tuvieron un auge importante: canales, caminos, obras de riego y puertos se construyeron en las provincias y en los territorios nacionales. En esta época se inauguró el Palacio del Congreso Nacional, en cuyo recinto se realizaron las sesiones legislativas del año 1906. Y durante esta etapa, la red ferroviaria aumentó aproximadamente 7000 km en cuatro años.

El Centenario de la Revolución de Mayo fue motivo para celebrar fastuosamente lo que era visto o imaginado por algunos como la entrada definitiva de la Nación al grupo de los países prósperos del mundo. Sin embargo, el Centenario fue también escenario de protestas. Las agitaciones obreras aumentaron, siendo parte de un síntoma que evidenciaba las desigualdades que el nuevo orden capitalista generaba.

Entre los conflictos de la época cabe recordar la huelga general de la primera semana de mayo de 1909, llamada “semana roja” justamente porque fue severamente reprimida. Una consecuencia dramática fue el asesinato, poco tiempo después, del Jefe de la Policía, Ramón L. Falcón, por un joven anarquista llamado Simón Radowitzky. La actitud represiva del Estado se hizo aún más visible con la sanción de la Ley de Defensa Social en 1910, que estableció que quedaba prohibida la entrada al país de “los anarquistas y demás personas que profesen o preconizan el ataque por cualquier medio de fuerza o violencia contra los funcionarios públicos o los gobiernos en general o contra las instituciones de la sociedad”.

Las ideas anarquistas cumplieron un papel central en este período a partir del apoyo brindado a los movimientos obreros. El año 1902 coincidió con la primera huelga general y con

la creación de la Federación Obrera Argentina. El gobierno adoptó una postura que osciló entre la represión y el intento de asimilar el anarquismo al movimiento sindical regulando sus actividades. Uno de estos intentos se plasmó en el proyecto de Código de trabajo a cargo de Joaquín V. González en 1904. Los grupos activistas anarquistas fueron identificados con la inmigración europea y se plantearon medidas represivas en contra de sus medios de acción directa, como fueron las leyes de residencia y de defensa social.

El Centenario, entonces, representó un momento de ascenso del pensamiento político, que erosionaba las viejas convicciones de la oligarquía tanto como agudizaba los conflictos y las divisiones en su seno. Su optimismo corría peligro por el estallido de numerosas huelgas parciales y generales, que llevó a decretar en cinco oportunidades el estado de sitio. Entonces, el Centenario fue también una ocasión para la reflexión crítica, que se hizo visible en el plano filosófico, en el pensamiento económico y sociológico, en el ensayo histórico y literario, etc.

Al finalizar la presidencia de Figueroa Alcorta, surgieron dos candidaturas: la de Roque Sáenz Peña, sostenido por la Unión Nacional, antiguo PAN y por la mayoría de los partidos provinciales y la de Guillermo Udaondo, sostenido por el Partido Republicano. El primero, modernista y opositor a la facción roquista resultó elegido junto a Victorino de la Plaza, en una elección donde los radicales volvieron a proclamar la abstención.

La libertad en los comicios fue una consigna que se materializó en el proyecto de reforma de la ley electoral. En él se establecía el voto universal, masculino, secreto y obligatorio y la representación de las minorías mediante el sistema de lista incompleta. El Partido Socialista planteó la importancia de la extensión de la ciudadanía política a las mujeres, pero su exclusión se mantuvo hasta 1951. La política de Roque Sáenz Peña tenía un punto de coincidencia con el radicalismo en la necesidad de establecer el ordenamiento electoral. Luego de la ley electoral, el radicalismo modificó su actitud y se aprestó a participar de los comicios.

La reforma de 1912, conocida como “ley Sáenz Peña” cerraba un ciclo y abría otro. Entre 1880 y 1912, la sociedad había cambiado en tamaño y complejidad. Aun así, el orden político había demostrado poca flexibilidad y muchos ciudadanos permanecían marginados. De esta contradicción, surgiría para algunos miembros de la elite, la necesidad de reformas para crear las condiciones de nuevos ciudadanos, más racionales y menos sujetos a las presiones y a las manipulaciones. Cobra importancia en todo este proceso el partido político, como actor organizado que condensará necesidades colectivas por encima de las personalistas.

En abril de 1912 se realizaron las primeras elecciones legislativas en las que se aplicó la nueva ley, con la participación de tres partidos: la UCR, el Partido Socialista y la Liga del Sur. En esos comicios votaron los varones argentinos mayores de 18 años. En la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe triunfaron los radicales, en el resto de las provincias se mantuvo el dominio de las fuerzas políticas tradicionales. Las elecciones de 1914 acentuaron esta tendencia, que cristalizaría en 1916. El partido radical llegará al gobierno de la mano de Hipólito Yrigoyen, inaugurando la novedosa ley Sáenz Peña y plasmando el primer ensayo de participación democrática.

## La Economía

La Argentina se integró al mercado internacional durante la segunda mitad del siglo XIX, mediante la producción de bienes primarios exportables. La base del crecimiento económico fue la incorporación de nuevas tierras a la producción. La zona pampeana fue la región donde tuvo lugar la mayor expansión tanto de la ganadería como de los cultivos de granos. Tierra y trabajo fueron los requisitos para la explotación de la ganadería refinada y del cereal. El pasaje de la tierra pública a manos privadas continuó durante ese período, pero a medida que se incorporaban al proceso productivo se registró una creciente valorización que fue limitando también las posibilidades de acceder a la tierra.

Durante este período se consolidaron los criadores de ganado refinado y hubo un vertiginoso crecimiento de los saldos exportables de la producción agrícola. La estancia mixta se conformó como una unidad productiva que facilitaba la alternancia de actividades económicas de acuerdo con los precios internacionales, lo que favoreció el incremento rápido de los beneficios.

Dentro de la ganadería se produjo una división y una especialización entre los criadores de animales y los invernadores que los engordaban, aunque algunos individuos realizaban ambas tareas. Los invernadores tenían una actividad de tipo comercial, pues compraban el ganado, lo engordaban y lo vendían a los frigoríficos. Esta actividad hacía fluctuar los precios del ganadero criador, siendo una fuente de tensión que llegaba a debates parlamentarios y se expresaba a través de diferentes posturas dentro de la Sociedad Rural Argentina (asociación patronal fundada en 1866, que representaba al sector más tradicional de propietarios de tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería).

La transformación agrícola colocó a la Argentina entre los primeros puestos de exportadores de trigo, maíz y otros granos. En 1880 se habían exportado las primeras bolsas de cereales. Diez años después, miles de toneladas de trigo salían de los puertos argentinos hacia Europa. Y en los primeros años del siglo XX, esa cifra se elevaba a millones de toneladas. Esta revolución cerealera produjo cambios cruciales en las exportaciones argentinas. Los productos agrícolas (trigo, maíz y lino) aumentaron su participación en el total de las exportaciones entre 1876 y 1895. Después, otros productos (avena y centeno) se incorporaron a los bienes agrícolas exportables. Los principales compradores fueron Inglaterra, Alemania, Bélgica y Holanda, quienes para esa época, establecieron algunas firmas exportadoras en el país y sus filiales y organizaron el comercio y el crédito por medio de agentes, intermediarios, molinos y comerciantes locales.

El ganado tuvo un desarrollo similar. Con la importación de animales de cría, el ganado criollo dio paso a un tipo de ganado más refinado, apto para la exportación de carnes. El envío de ganado en pie y, en los primeros años del nuevo siglo, de carne congelada y luego enfriada, ubicó a la Argentina entre los primeros países exportadores de productos pecuarios. La industria de la carne no estaba totalmente en manos argentinas, el capital británico primero y luego el norteamericano, levantaron grandes frigoríficos y se apropiaron de los beneficios generados por este producto de exportación de primer orden.

La expansión de actividades agroindustriales se generó a partir de tres elementos fundamentales: la extensión de las líneas ferroviarias, la protección estatal y el incremento de

la demanda por el aumento de la población. El crecimiento de las actividades azucareras y vitivinícolas dependía del abaratamiento del costo del transporte, que se logra con el ferrocarril. Este elemento es crucial para pensar la unidad política porque habrá de contribuir a una mayor integración económica. El Estado nacional tuvo una activa participación en el desarrollo de las agroindustrias pues intervino con medidas de protección, como por ejemplo la implementación de tarifas aduaneras o regulando el mercado.

El aumento de la demanda se debió al incremento de la inmigración que tenía entre sus hábitos de consumo a estos productos.

El descubrimiento de petróleo en 1907 en Comodoro Rivadavia, introdujo un elemento nuevo en el plano de las actividades económicas. El crecimiento de este sector, unido en esos años a una fuerte presencia estatal, provocó una fuerte atracción de capitales y de mano de obra inmigrante de los más diversos orígenes. El comercio era activo y sostenido particularmente con Chile.

El ferrocarril, como ya señalamos, es una de las claves del proceso de transformación económica en general y de la producción agropecuaria en particular. La red ferroviaria se distribuyó en cuatro grandes sistemas, red central, red del oeste, red del pacífico y red del sud. Trasladaba los productos del campo y del interior hacia las grandes ciudades para su consumo y hacia el puerto para su exportación. A la vez, permitía la distribución de los productos importados en distintos lugares del país.

La red ferroviaria progresó año tras año. Si se toma en cuenta la escasa población del país, podemos observar que este sistema fue uno de los más destacados en todo el mundo. El sector ferroviario fue un negocio de los capitalistas externos, que representaban a más de un tercio del capital extranjero invertido en la Argentina hasta la primera década del siglo XX.

La instalación de líneas ferroviarias favoreció las exportaciones de lana hasta que la explotación del bovino la desplazó hacia el sudoeste y crecieron los envíos de carne de oveja congelada, vacunos (congelados y enfriados), cereales como trigo, maíz, avena, cebada y centeno, así como el tanino y la madera de quebracho. También fue importante en el plano interno, pues impulsó las relaciones comerciales entre las zonas que comunicaba y el traslado de personas. El transporte de carga y pasajeros se expandió notablemente y el volumen del movimiento de pasajeros es asimismo un indicador de la gran movilidad espacial de la población.

La industria creció lo suficiente como para satisfacer la demanda interna de consumo. El censo de 1895 señaló la existencia de 22.204 establecimientos industriales que empleaban 145.650 personas, de las cuales un 63% eran extranjeras. En 1914 existían ya 47.779 establecimientos que empleaban a 410.201 personas, 50% de extranjeros.

Hacia fines del siglo XIX, la rama industrial más importante era la alimentación, que agrupaba molinos harineros, saladeros, ingenios azucareros, elaboración de cerveza, aceites, fideos, chocolate, yerba, manteca y almidón e incluía panaderías y confiterías. A esta rama industrial le seguían las de vestido y tocador, fábricas de alpargatas, de tejidos y sastrerías. Completaban el cuadro, los aserraderos, las fábricas de cal, ladrillos, tejas y pequeños talleres mecánicos, herrerías, fundiciones, broncerías y plomerías. En su mayoría, se trataba de pequeños establecimientos con escaso personal y exigua calificación. Hacia 1914, se produjeron



algunos cambios importantes por la alta concentración de capital y mano de obra.

Por un largo período, los frigoríficos fueron la expresión del crecimiento industrial argentino, que adquirió forma en los primeros años de la década del 80, pero su expansión se verificó recién en los primeros años del siglo XX. Inicialmente, las compañías inglesas y argentinas se repartieron el negocio, pero con la llegada de capitales norteamericanos, se alteró el ordenamiento y las tensiones crecieron, aunque finalmente culminaron con acuerdos comerciales entre los británicos y los norteamericanos. Esos acuerdos significaban el reparto de cuotas de exportación con la correlativa disminución de la participación de los capitales de origen argentino en la actividad.

Los ingenios azucareros fueron la expresión de la industria del interior y lentamente fueron incorporando maquinarias más modernas. También se expandieron las refinerías y otros sectores dinámicos como el metalúrgico, donde coexistieron los pequeños talleres junto con las fábricas más grandes.

La evolución del comercio exterior constituye la manifestación más importante del crecimiento de la economía argentina entre 1880 y 1914. El extraordinario crecimiento de las exportaciones, tanto en valor como en volumen, se apoyó en el sector agropecuario. Pero esa dependencia argentina de los movimientos de la economía mundial, colocó al país a merced de los precios internacionales y de los niveles de sus importaciones y exportaciones, lo cual generaría conflictos de todo tipo.

El período que se extiende entre 1880 y 1916, aunque en el largo plazo puede caracterizarse como de prosperidad, estuvo marcado por violentas subas y bajas. La expansión iniciada en los años 80 culminó con la crisis de 1890, que duró unos 4 años, a partir del cual comenzó un período de recuperación que se sostuvo hasta finalizar el siglo, cuando comenzaron a manifestarse nuevas dificultades económicas. Hacia 1903 se inició una nueva etapa de expansión que se prolongó por unos 10 años. Entre 1911 y 1912, la combinación de varios factores precipitó un proceso que solo el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1919) lo hizo aparecer menos dramático.

En cuanto al régimen financiero, a partir de 1880 se dio una constante desvalorización del papel moneda en relación con el oro, que incrementó su valor cuando el gobierno estableció la inconvertibilidad del peso papel. Esa desvalorización del peso comenzó a revertirse con el alza de los precios de las exportaciones. Los mecanismos de financiamiento se basaban en la prenda hipotecaria, de modo que la tierra fue la llave de acceso al crédito que estaba difundido por los bancos. La economía argentina funcionaba con dos monedas de manera paralela: el peso papel (moneda nacional) y el peso oro, que cambiaba su valor de acuerdo con las pautas internacionales. Los pesos moneda nacional eran emitidos por el Estado o por sus bancos, según las necesidades del gobierno, y ello provocaba una constante inflación que hacía disminuir su valor. La relación inestable de la moneda favorecía a los exportadores, que obtenían sus ingresos en moneda valorizada y sus costos eran cubiertos en pesos papel depreciado.

La crisis económica de 1890 fue una de las más importantes en el período y sus orígenes son objeto de discusión. Unos acentúan el marco internacional y la fragilidad de la economía argentina, derivada de la necesidad de capitales y la crisis en el balance de pagos.

Otros señalan la crisis como producto de la irresponsabilidad de la política nacional en materia monetaria, por generar inflación y desorden en el crédito.

### **La Sociedad**

El período que va del año 1880 a 1916 constituye una época clave en la historia argentina. La transformación del país se hizo visible en el plano poblacional. Entre 1881 y 1890, unas 650 mil personas llegaron a la Argentina, pero en los años siguientes, más de 1 millón y medio de personas cruzaron el mar rumbo al Río de la Plata. Los inmigrantes constituyeron la masa de trabajadores de los sectores primarios y secundarios, sembraron las tierras y levantaron las cosechas, trabajaron en los talleres y fábricas de las ciudades y dieron vida al comercio y al transporte.

El arribo de miles de personas produjo variaciones en el número total de habitantes, en las relaciones entre hombres y mujeres, en las edades y en la distribución regional de la población.

La importancia de la inmigración de origen europeo como componente del crecimiento poblacional del país se advierte en la relación que surge de los censos entre la población argentina y la población extranjera. En 1875, el 74,5 % de la población era nativa. En 1914, había disminuido al 69,3 %. La mayor parte de los inmigrantes eran varones adultos, lo que modificó la relación entre sexos al elevar el índice de masculinidad. Esto era más evidente en las grandes ciudades. También se incrementaron las franjas etarias correspondientes a los 20 y 30 años.

En cuanto al origen de los inmigrantes, predominaron los italianos y españoles. El flujo de italianos fue siempre mayoritario, el 40% hacia 1914. Inicialmente tuvieron más peso las regiones del norte de Italia pero a partir de 1895 se revierte esa tendencia y el mayor número de personas proviene del sur. Del total de inmigrantes ingresados al país, el 53,2% se quedó. Ese dato da cuenta del alto número de personas que retornó a su país o se redirigió a otro.

El importante número de personas que llegó a la Argentina fue acompañado por un rápido proceso de urbanización. Las ciudades crecieron y se multiplicaron a lo largo del territorio. El Censo Nacional de 1869 indicaba que el 33% de la población vivía en pueblos y ciudades; en 1895 ese porcentaje llegaba al 42% y, en el tercer Censo Nacional de 1914, se estimaba que un 58% de los habitantes se hallaba en conglomerados urbanos.

La densidad de población en el territorio se fue modificando a lo largo de los años, y entre 1895 y 1914, comienzan a desarrollarse tendencias que se mantendrán a largo plazo: las provincias patagónicas constituyen las zonas menos densamente pobladas del país; las provincias pampeanas aumentaron la densidad de población como producto de la transformación económica vinculada a la expansión agrícola - ganadera, al comercio y al transporte, así como por el desarrollo de industrias y manufacturas que les permitían a su vez, integrarse en el mercado internacional.

Las migraciones internas también fueron importantes para el desarrollo de las ciudades y de nuevas zonas productoras que movilizaban a las poblaciones. Entre 1869 y 1895, las provincias norteañas de Jujuy y Salta recibían población, así como también Tucumán y

Mendoza, que atraían trabajadores por sus incipientes industrias. Lo mismo ocurría con las colonias santafecinas y Buenos Aires, que alternaba recepción y expulsión. Como ya dijimos, la movilidad espacial se vio favorecida por la expansión de la red ferroviaria.

Gracias a estos movimientos inmigratorios y al crecimiento vegetativo, no solo se multiplicaron las ciudades grandes sino que además aumentó el número de pueblos medianos y pequeños, que surgían en la región pampeana y en los centros neurálgicos del camino hacia el sur gracias a la llegada del tren. Nuevos asentamientos urbanos se organizaban alrededor de las vías ferroviarias y las colonias agrícolas. Estos asentamientos necesitaban obras de infraestructura: escuelas y edificios públicos, paseos, clubes y periódicos, códigos municipales y policía. Todos estos cambios contribuyeron para generar nuevas formas de vida, que entremezclaban las tradiciones de las familias fundadoras y las de las recién llegadas. La mezcla cultural fue resultado de esta transformación en la población.

Un vehículo importante que acompañó dicha transformación estuvo constituido por la ampliación de los campos de lectura como producto de la alfabetización, que se produjo a partir del aumento de la matrícula escolar y el número de maestros. La disminución del analfabetismo abrió un campo para la lectura de diarios, revistas y libros baratos en vastas zonas del litoral urbano. Los diarios se modernizaron con la introducción de nuevas maquinarias y se independizaron de las fracciones políticas.

Todos estos cambios modificaban tanto los espacios públicos como los privados. Si las viviendas eran objeto de la introducción de elementos sofisticados representados por el mobiliario y sus ornamentos, los espacios públicos transformaban también sus estructuras, dimensiones y funciones, dando paso a nuevas formas de sociabilidad. Los planes de reforma cambiaron a las ciudades. Los paseos recreativos, las plazas y los parques conformaban no solo modos de sanear, oxigenar y embellecer a la ciudad sino que además se convirtieron en los lugares de la ostentación o el establecimiento de nuevas relaciones.

El súbito crecimiento demográfico trajo aparejados también algunos problemas. El desajuste entre el número de pobladores y la oferta habitacional planteó cuestiones relacionadas con la oferta de vivienda. La falta de adecuación entre ambas derivó en el hacinamiento, la precariedad y la difusión de enfermedades que caracterizaron buena parte de la vida en las ciudades grandes y medianas.

En las ciudades como Buenos Aires y Rosario se difundió un tipo de vivienda colectiva, el conventillo, y en Buenos Aires la vivienda propia se asoció a la extensión de la red tranviaria y el abaratamiento del transporte urbano. El aumento de los alquileres dio paso a una huelga de inquilinos en 1907. Los pobladores de los conventillos se negaron a pagar los altos precios de los alquileres, provocando la movilización de hombres, mujeres y niños, así como la participación de organizaciones socialistas y anarquistas y de fracciones del Estado.

La precariedad de las viviendas y el hacinamiento fueron las causas de las enfermedades y de epidemias que se convirtieron en una amenaza y demandaron de manera creciente la intervención de los profesionales médicos y de la creciente intervención estatal. Vivienda y salud fueron dos ejes fundamentales sobre los cuales intelectuales, políticos y profesionales delinearon sus áreas de intervención y buscaron las soluciones necesarias.

Lo que venimos diciendo, entonces, es que el crecimiento de la población, los cambios

en las ocupaciones y la mayor diversificación económica dieron paso a la aparición de nuevos actores. La situación de los trabajadores variaba de acuerdo con la actividad y la región. Algunos iniciaron una rápida carrera de ascenso social y la clase media se amplió y consolidó. Del conjunto de la población trabajadora, fueron muchos más los que sufrieron las alternativas de los períodos de bonanza y de privaciones pues, si bien es cierto que la demanda de brazos era creciente, la inestabilidad fue una de las características de la época.

La demanda de mano de obra era amplia para el sector de los jornaleros o peones sin ocupación permanente, que combinaban las tareas urbanas en la construcción y en las obras públicas con la recolección de las cosechas. Esa demanda no exigía ninguna especialidad ni calificación específica. Aún así, también hubo trabajadores que pudieron instalarse por cuenta propia porque conocían algún oficio o estaban más calificados. Estos atributos les permitieron obtener empleos más permanentes y mejores ingresos, lo que marcaba diferencias entre los trabajadores.

La escasez de mano de obra había sido un rasgo de la oferta de brazos en el Siglo XIX, más allá de los ajustes estacionales. Pero la situación comenzó a cambiar hacia fines del siglo y la escasez se tradujo en exceso de trabajadores, al tiempo que comenzaron a aparecer ciertas tensiones sociales que se acentuaban en tiempos de crisis. En 1890, la crisis económica provocó una ola de desempleo y el aumento de precios de los artículos de primera necesidad, motivó un descontento generalizado y la organización de las primeras huelgas. Con la recuperación económica, mejoraban de alguna manera las condiciones de vida, aunque persistieron las protestas. Todo esto llevó a la reflexión de grupos ligados a la elite dominante sobre el sistema de huelga y la cuestión social.

El aumento y la diversificación de las actividades económicas incrementaron el número de trabajadores, de organizaciones y agrupaciones que los representaban. En 1890, el porcentaje de los participantes en las organizaciones era todavía pequeño, pero hacia el final del período su proporción había aumentado con la consecuente conformación de numerosos gremios.

Las primeras federaciones obreras creadas tenían el propósito de obtener para sus afiliados mejores condiciones de trabajo, un trato más justo y la protección de mujeres y niños. Estas organizaciones eran principalmente anarquistas y socialistas, las cuales tenían notorias diferencias entre ambas. Mientras los socialistas tenían tendencias gradualistas y contrarias a la huelga general, los anarquistas impulsaban esta táctica como su herramienta de lucha más importante puesto que negaban la legitimidad de la lucha parlamentaria y ponían en duda el sistema democrático.

La capacidad de lucha de las organizaciones obreras se complicaría con las diferencias entre los socialistas y los anarquistas, que se diferenciaban por la importancia que le otorgaban al sindicato como herramienta de transformación de la sociedad por sobre la acción política. Esta tendencia, sería dominante durante la segunda década del siglo. Los trabajadores utilizaron diferentes herramientas para lograr sus objetivos. Las huelgas generales y parciales fueron los medios más empleados.

Los gobernantes fueron particularmente sensibles a dos tipos de conflictos. Por un lado, reaccionaron frente a todas las huelgas y conflictos vinculados a la circulación del

transporte y el trabajo portuario, que afectaban el área vital de la economía agroexportadora, lo cual aumentaba el poder negociador de los trabajadores. También intervinieron en todas aquellas manifestaciones anarquistas que alteraban el orden y la paz públicos. La reacción estatal frente al conflicto social osciló entre la represión y la integración. La movilización policial o militar, la aplicación del estado de sitio o la Ley de Residencia fueron las respuestas represivas habituales. A veces, el Estado fue lo suficientemente indiferente como para favorecer con esa actitud la acción de los patrones. Hacia el final del período, sin embargo, buscaron una mayor injerencia en la resolución de los problemas, apelando a la integración. Lentamente, se fueron diseñando mecanismos de intervención estatal para regular los conflictos y controlar a las organizaciones. Se trató de tener un conocimiento de la situación de las clases trabajadoras y el gobierno solicitó un estudio de la condición de los trabajadores a Juan Bialet Masse y a Pablo Storni, que fueron importantes para el diseño de una propuesta codificadora.

Sobre la base del informe de Bialet Masse se proyectó en 1904 un Código Nacional del Trabajo que en un primer momento fracasó por la oposición empresarial y obrera. Sin embargo, se logró crear el Departamento Nacional del Trabajo, cuyo objetivo era el estudio de la situación de los asalariados y la intervención en los conflictos, así como la formulación de propuestas. También se sancionaron leyes como la de regulación de trabajo de mujeres o niños o la que establecía el descanso dominical.

La cuestión social tenía por supuesto su costado político. La cantidad de inmigrantes, la presencia de la multitud, generaban temor en los grupos gobernantes. Se planteaba el problema de la gobernabilidad frente esas nuevas condiciones sociales. Porque además, la inmigración planteaba también el problema de la identidad nacionalidad: cómo construir una identidad nacional frente al cosmopolitismo planteado por la presencia de una población heterogénea, con alta participación en escenarios productivos. La educación fue uno de los elementos fundamentales para generar esa conciencia de pertenencia a una comunidad nacional. También lo fue el servicio militar obligatorio, proceso que también facilitaba la creación de esa identidad patriótica.

Las ideas sobre la inmigración fueron cambiando. Si algunos años atrás, había sido un proceso portador de un cambio positivo, ahora se había transformado en la causa de los males sociales. Por muchos espacios se gestaba una corriente xenófoba que comenzaba a delinearse.

El pensamiento político, social y literario de ese tiempo, da cuenta de estas transformaciones. Se dio el caso de una superposición de teorías donde convivían concepciones católicas junto a las novedades del socialismo y anarquismo. El positivismo y el modernismo conformaban los cánones interpretativos de la nueva sociedad, que compartían la fe en la ciencia para producir un saber sólido y objetivo, necesario para fundar un orden adecuado.

El pensamiento positivista generó también su opuesto: la reacción anti positivista en clave espiritualista, en donde la esencia reside en el desplazamiento de la ciencia como centro y, consecuentemente, de la figura del intelectual científico, para colocar la belleza como valor supremo, la intuición estética como llave para entender la realidad y al escritor como la figura predominante.

## 2- La Argentina de entreguerras, 1916-1943

### a) La ampliación de la democracia. Los gobiernos radicales (1916-1930)

#### La Política

El 12 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen asumía la presidencia de la Nación, convirtiéndose en el primer mandatario surgido del voto universal masculino. El nuevo presidente intentó conformar un gabinete equilibrado, que no irritara al sector exportador. Buena parte de los ministros pertenecían a la burguesía terrateniente e incluso habían mantenido muy buenas relaciones con los políticos conservadores.

Con la llegada de Yrigoyen al poder se produjo un cambio fundamental en la forma de hacer política. El nuevo presidente era un líder popular que utilizaba novedosos métodos de conducción, a partir de la influencia ejercida sobre los nuevos grupos medios y los sectores populares urbanos quienes, hasta aquí, habían estado en su mayoría al margen de la participación política.

La estrategia política utilizada por el gobierno para influir masivamente sobre esos grupos se basó en la instrumentación de técnicas de patronazgo político, lo cual desembocó en la creación de numerosos cargos burocráticos y profesionales. La entrega de puestos se usaba con el objetivo de vincular al gobierno con los comités de la UCR y sus respectivos caudillos e, indirectamente, estimular al electorado. La excesiva cantidad de cargos creados durante estos años parece haber incidido negativamente en el gasto público. Simultáneamente, se produjo una transformación de los partidos políticos, que se convirtieron en organizaciones de masas de carácter nacional, dado que la actividad electoral se había irradiado a todo el país.

El comienzo de la experiencia radical en el poder fue difícil. Debió enfrentar a una oposición compuesta por un amplio espectro de fuerzas políticas: desde el conservadurismo, irritado por el peso y las actitudes populares de la UCR, hasta el Partido Socialista, que competía con el gobierno por la representación de los trabajadores e intuía, al igual que el Partido Demócrata Progresista, actitudes demagógicas en el presidente.

Aunque la oposición fue descarnada, no presentó un frente unificado. Los conservadores eran fuertes en numerosas provincias, especialmente en Buenos Aires y también tenían sus propias divisiones internas. El socialismo limitaba su influencia a la Capital Federal y se va a dividir en 1918. Los demócratas progresistas solo tenían peso en Santa Fe.

Era más efectiva la crítica periodística ejercida desde grandes diarios como La Prensa y La Nación o el periódico socialista La Vanguardia, quienes centraban su ataque en la figura de Yrigoyen. Desde sus columnas se lo acusaba de ignorante y demagogo por su peculiar relación con los sectores populares, se criticaba la política de intervenciones provinciales y la falta de consulta al Parlamento. Los conflictos con el Parlamento fue uno de los principales problemas del nuevo gobierno, porque la oposición conservadora controlaba la Cámara de Senadores y trababa los proyectos del Poder Ejecutivo.

Otro aspecto controvertido del gobierno radical fue su política externa, especialmente

su postura ante la Primera Guerra Mundial. Se continuó en cierta forma la neutralidad benévola inaugurada por su antecesor, Victorino de la Plaza, y se mantuvo la neutralidad argentina hasta el final del conflicto, haciendo caso omiso de la oposición y de la prensa, que presionaban al gobierno para que rompa las relaciones diplomáticas con Alemania.

A pesar de cierta ambigüedad, el gobierno persistió en su política de independencia diplomática, particularmente frente a los Estados Unidos, y aunque fracasó en su intento por organizar una conferencia latinoamericana de naciones neutrales, tuvo mayor impacto la decisión de apoyar el principio de la igualdad de los Estados en la conformación de la Sociedad de las Naciones y no avalar la distinción entre países beligerantes y neutrales.

La política de Yrigoyen debió enfrentar el desfavorable contexto de la guerra y la crisis de la primera posguerra. El contexto estuvo signado por la inflación, el deterioro del salario real, la desocupación y por ende las numerosas huelgas sucedidas entre 1917 y 1919. No obstante, y más allá de ambigüedades, la política del gobierno fue esencialmente distinta de la de los anteriores conservadores, pues aspiraba a arribar a una cierta justicia distributiva e integrar políticamente a los trabajadores en el sistema.

Esta concepción marcó un nuevo tipo de relación entre el Estado y los trabajadores, no tanto porque hubiera una legislación protectora y reguladora, que avanzó lentamente gracias al impedimento de los conservadores, como por la existencia incipiente de un estilo de intervención directa para resolver los conflictos entre el capital y el trabajo.

Por su propia convicción y por la oposición parlamentaria a sancionar proyectos de ley sobre el salario mínimo, duración de la jornada laboral y seguro del trabajo, el presidente Yrigoyen apeló a su participación personal y al arbitraje para resolver huelgas y otro tipo de enfrentamientos gremiales. El gobierno intervino a favor de los obreros en varias ocasiones y en otras tuvo una actitud dual, reprimiendo a los huelguistas como son los casos de la denominada “semana trágica” de 1919 o la “patagonia trágica” de 1921. Ambos sucesos finalizaron con una masacre perpetrada por el Ejército contra los peones en huelga. En estos dos casos, el gobierno radical mostró una peligrosa tendencia a la vacilación política ante las presiones de las corporaciones empresariales, los grupos de extrema derecha y el Ejército.

Dentro del gobierno y del radicalismo, aparecieron a poco de andar, confrontaciones internas. El sector más aristocrático, Grupo Azul, criticaba con dureza el personalismo de Yrigoyen, la constante superposición del Estado con el partido y los comités y las técnicas de patronazgo político de la que estaban excluidos. También cuestionaban las intervenciones provinciales y la política internacional.

Hacia 1922, el presidente Yrigoyen, superó obstáculos internos y eligió como candidato del partido al elegante y culto Marcelo Torcuato de Alvear, que parecía el reverso de la imagen del caudillo y que, sin embargo, tenía una larga militancia en el radicalismo, aunque alejado de los conflictos partidarios internos. Esa característica parecía garantizar la continuidad política.

Los conservadores concurren separados, la mayoría presentaba solo candidatos provinciales, los socialistas y demócratas progresistas, también presentaron candidatos, aunque no lograban llegar a toda la nación. A pesar de la oposición y los problemas derivados de la recesión económica, el radicalismo triunfó con el 48% de los votos emitidos.

La presidencia de Marcelo T. de Alvear se caracterizó por un período de paz social debido a la notable recuperación económica, aunque su gobierno estuvo signado políticamente por el distanciamiento de Yrigoyen y por el fuerte conflicto entre personalistas y anti personalistas. Desde un primer momento, el nuevo presidente decidió gobernar de manera independiente del partido y de Yrigoyen.

Alvear gobernó de manera diferente a su antecesor. Las intervenciones provinciales por decreto fueron menores y colocó el gasto público bajo el control del Parlamento, aunque solo consiguió limitarlo relativamente. De esta forma intentaba quitarle a Yrigoyen una de sus principales herramientas de control partidario.

La lucha entre yrigoyenistas personalistas y alvearistas anti personalistas se tornó encarnizada. Se manifestaba tanto en los conflictos entre el presidente y el vice, como en el Congreso, donde cada tema era motivo de disputa y polémica. Los anti personalistas pretendían controlar el aparato partidario del yrigoyenismo. Desde el diario yrigoyenista *La Época*, se criticaba con dureza al presidente y al gobierno. La división entre ambos permitió en la Capital Federal el triunfo del socialismo en 1924, seguidos por los anti personalistas.

Las diferencias se fueron profundizando de tal forma que los personalistas acusaron a sus rivales de complot con los enemigos de la causa radical, las tensiones crecieron ante la imposibilidad de los anti personalistas de controlar el aparato partidario.

Pero las tensiones internas también afectaron al Partido Socialista a partir de la alianza en la Cámara de Diputados con los anti personalistas. Esta situación derivó en la ruptura del partido y en la formación del Partido Socialista Independiente.

La política de Alvear manifestó cambios en varios aspectos respecto de la de Yrigoyen. En principio, no compartía la falta de alineamiento internacional. También sostenía un criterio menos estatista respecto del problema del petróleo. Aunque Yrigoyen no se había opuesto a la participación de las empresas privadas extranjeras en la industria petrolera. En 1922, se había creado la Dirección Nacional de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para supervisar y orientar la producción nacional.

Más allá de estas diferencias, el gobierno de Alvear tuvo un manejo ordenado de las finanzas, respeto por las libertades individuales y cierta preocupación social, expresada en varias leyes aprobadas durante su mandato, como la del contrato del trabajo de menores y la prohibición del trabajo nocturno en las panaderías, la jubilación de los maestros primarios, la regulación de la forma de pago del salario y el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas.

Hacia el fin del gobierno de Alvear, los anti personalistas se sentían muy seguros de obtener el triunfo en las elecciones de 1928. El clima político parecía favorable, pues los grandes diarios como *Crítica*, *La Nación* o *La Prensa*, realizaban desde sus páginas una furibunda campaña contra la figura de Yrigoyen. A estas críticas se sumaban los despiadados ataques de una derecha antidemocrática, cuyo único fin era impedir el triunfo del viejo caudillo radical. Estos diarios se apoyaban en publicaciones de tendencia nacionalista, cuyo nexos se hallaba en la exaltación del patriotismo, el militarismo, el catolicismo, el nativismo y la completa impugnación de la democracia. Sin embargo, Hipólito Yrigoyen gozaba de una enorme popularidad, tal vez mayor que durante su presidencia. Esto dio lugar al triunfo en los comicios, con un gran nivel de participación popular.



A pesar del caudal de votos recibidos, el nuevo gobierno fue débil y mostró un rumbo errático. El partido no prestaba gran ayuda al presidente, pues por un lado estaba inmerso en una lucha de facciones por la sucesión de Yrigoyen. Por otra parte, se encontró con una oposición más despiadada que la anterior, desde la prensa hasta desde los partidos políticos rivales. Además, seguían sin controlar el Senado, que vetaba sistemáticamente los proyectos importantes del gobierno, como la Ley del Petróleo.

La política laboral tampoco manifestaba el dinamismo de la primera presidencia, aunque Yrigoyen conservó buena relación con los sindicatos ferroviarios y navales. Pero era evidente que los primeros efectos de la crisis económica desatada en el año anterior (reducción del gasto público, inflación, atraso en el pago de sueldos, aumento del desempleo), habían contribuido a deteriorar la base de sustentación de Yrigoyen.

Otro factor de inestabilidad provenía del Ejército. Se había opuesto al regreso del caudillo radical al gobierno en 1928 y comenzó a conspirar abiertamente, no solo contra el gobierno sino contra la democracia. El estilo plebeyo de los gobernantes, la intensificación de los conflictos sociales, la política mediadora y conciliadora del gobierno o el neutralismo en la política exterior eran aspectos revulsivos para el Ejército.

La tendencia golpista estaba encabezada por José Félix Uriburu, un general de tendencia nacionalista y corporativista, apoyado por un grupo de intelectuales, fervientes defensores de la jerarquía y del orden, que hacían gala de una retórica impugnatoria de la bolchevización de la sociedad, a la que vinculaban con el sufragio universal y por supuesto, con Yrigoyen y con el radicalismo.

Otra línea de apoyo al golpe estaba encabezada por militares liberales, como Agustín P. Justo, quienes recibían el apoyo de varios partidos (radicales anti personalistas, socialistas independientes, conservadores). Este grupo no impugnaba en teoría, al sistema democrático en su conjunto, sino al personalismo y al populismo de Yrigoyen.

De una u otra forma, el cruce de estas dos tendencias, (nacionalistas y liberales) con la evidente pérdida de consenso del gobierno legítimo, permitieron que los militares derrocaran al presidente Hipólito Yrigoyen, dando comienzo a una larga etapa de interrupciones institucionales y de gobiernos de facto antidemocráticos que se sucederían durante muchos años.

### **La Economía**

Durante los años de gobierno radical no se produjeron grandes cambios. La economía siguió orientada a la exportación de productos primarios, aunque hubo una desaceleración del crecimiento. La Primera Guerra Mundial tornó evidentes los puntos más débiles de la economía nacional, como su extrema dependencia del flujo de capitales extranjeros y de las exportaciones.

Los gobiernos radicales no modificaron esta situación, aunque se matizó un poco con la aparición de una nueva potencia comercial, Estados Unidos, que aprovechó los vacíos dejados por los europeos después de la guerra, y se convirtió en uno de los principales proveedores de bienes de consumo. Este proceso se produjo sin dejar de depender de la relación comercial con Gran Bretaña.

Dentro del marco de continuidad de la economía exportadora, al finalizar la depresión de 1917, se desarrolló un proceso de recuperación económica hasta que llegó la crisis del petróleo, en 1929. El régimen de la propiedad de la tierra en la zona cerealera no se modificó y el predominio de la gran propiedad se mantuvo inalterable. El gobierno radical estaba bastante vinculado a los grupos tradicionales como para intentar modificar el sistema de propiedad.

En la ganadería, mientras se asistía a la inexorable decadencia del ovino, se avanzó en el refinamiento del ganado bovino y aumentó el stock como consecuencia de la demanda creciente de los frigoríficos con destino a la exportación. En esta etapa se generalizó en la producción frigorífica el cambio de la carne congelada a la enfriada y, simultáneamente, hubo un importante crecimiento de las exportaciones de carnes enfriadas. Este proceso exigía carnes de mayor calidad y entregas regulares de los estancieros a los frigoríficos y produjo un desplazamiento de los criadores por los invernadores. Estos últimos tenían sus campos de pastoreo cultivados de forrajeras y destinados al engorde de los animales en las zonas más favorables de la pampa húmeda cercana a los frigoríficos.

Mientras la rentabilidad de los invernadores, vinculados a los frigoríficos y al mercado exterior aumentaba, la rentabilidad de los criadores, dependientes de las compras del mercado interno y de los invernadores, disminuía. Esta situación provocó un largo conflicto entre los dos sectores. El gobierno no pudo o no quiso poner límites a los intereses de los frigoríficos. En cierta forma, los gobiernos radicales no modificaron la actitud tradicional de "comprar a quien nos compra", situación que favorecía a los intereses comerciales británicos.

La industria creció relativamente durante este período, en especial en los rubros textiles y alimentación y en menor medida en la química y la metalmecánica. Este pequeño crecimiento se generó sin que el gobierno de Yrigoyen adoptara ninguna medida proteccionista con respecto a la manufactura local.

La Primera Guerra Mundial permitió avanzar en un leve proceso de sustitución de importaciones. El porcentaje de la producción manufacturera nacional con respecto a la importada ascendió del 42% entre 1910 y 1914 al 53% entre 1915 y 1920. Este crecimiento se debió, sin duda, a los efectos de la guerra. Finalizada la contienda, la producción nacional bajó al 51% hasta 1924 y al 49% hacia 1930. La guerra mundial también impactó favorablemente sobre los frigoríficos, una de las actividades industriales tradicionales. La producción de carnes enlatadas para abastecer a los ejércitos beligerantes entró en franco ascenso. Sin embargo, los beneficios obtenidos por los frigoríficos no fueron acompañados por el aumento de la rentas de los ganaderos.

Una característica interesante del período es el crecimiento de empresas modernas y más grandes, inversamente proporcional al achicamiento de la pequeña y mediana industria de tipo manual. Este hecho estaría preanunciando la modernización industrial desarrollada a partir de mediados de los años 30. En este sentido, fue significativa la inversión de capitales norteamericanos en la industria local. Éstos se orientaron hacia ramas industriales no tradicionales, diferentes de las inversiones británicas, destinadas al servicio público, las finanzas, el comercio y la industria tradicional.

Las principales radicaciones industriales durante estos años fueron en el rubro

metalmecánico (Burroughs, Chrysler y General Motors), en maquinarias y artefactos eléctricos (IBM, Sylvania, RCA Victor, GoodYears), en la industria farmacéutica (Farmasa, Atkinson, Colgate Palmolive) en la industria alimenticia (Toddy). El capital norteamericano tomaba claramente la delantera de las inversiones extranjeras en la industria. Los europeos solo habían instalado Cinzano, FIAT, Celulosa Argentina, Nestlé y Pirelli.

### **La Sociedad**

La ausencia de censos durante este período impide tener un panorama claro de su evolución. No obstante, es posible sostener que se mantuvo la tendencia anterior, aunque en forma atenuada. La guerra detuvo casi totalmente la llegada de inmigrantes. Entre 1914 y 1919 es cuando se produjo un saldo negativo. El flujo europeo positivo recién se recuperó a principios de los años 20 hasta fines de la década. Consecuentemente, y como resultado de un incipiente proceso de sustitución de importaciones de productos industriales, aumentó la migración interna. La tasa de crecimiento de la población descendió bruscamente durante la guerra y se recuperó a partir de 1920.

En estos años se percibe un crecimiento del sector terciario, tanto en los servicios como en el comercio, que determinó un notable aumento porcentual de los sectores medios, compuestos por una multitud de cuentapropistas, pequeños, medianos y grandes patrones industriales y comerciales, profesionales, rentistas, empleados administrativos y docentes. En el marco de un proceso bastante dinámico de movilidad social, estos sectores ascendieron gracias a las oportunidades brindadas por la expansión agropecuaria iniciada en 1880 y por un sistema educativo que alfabetizó y especializó rápidamente a una parte de la población.

En este último sentido, la influencia de la reforma universitaria realizada por el gobierno de Yrigoyen en 1918 fue fundamental. El movimiento de reforma se concentró en la tradicional y conservadora Universidad de Córdoba. Frente al autoritarismo y el dogmatismo imperantes en la enseñanza, los estudiantes exigían participación en el gobierno universitario y mayor libertad de cátedra. La movilización estudiantil, que tenía un ligero tono antiimperialista, coincidió temporalmente con la protesta sindical y la democratización política. El contexto internacional es el de la Revolución Rusa, que había causado un profundo impacto entre los sectores progresistas y reformistas.

La reforma universitaria fue, además, una clara expresión de los cambios producidos en la sociedad argentina, especialmente la emergencia de los sectores medios en cuanto a participación. El gobierno radical apoyó a los reformistas, que lograron algunos cambios importantes pues un número de estudiantes se integró al gobierno universitario. Se modificaron algunos contenidos así como prácticas pedagógicas autoritarias. El verdadero éxito de la reforma se halla en su proyección hacia el futuro porque con el transcurrir de los años sería una contribución legal fundamental para democratizar la vida universitaria y profundizar la libertad de expresión y enriquecer la actividad académica.

Estos cambios formaron parte de una honda transformación de la sociedad de entreguerras. Se notó una tendencia hacia una mayor nivelación social, que implicó un relativa homogenización de la cultura debido, entre otros motivos, a la importancia adquirida por los medios de comunicación masiva, que tuvieron un indudable peso sobre los valores y las

formas de vida de los lectores, tanto por el estilo de propagar las noticias como por los cambios introducidos en los dispositivos publicitarios. En estos procesos, no fue menor la contribución de los cambios tecnológicos. La popularización del cinematógrafo, por ejemplo, hizo que se multiplicaran salas de cine y se extendieran hacia barrios periféricos. La gran transformación electrónica permitió la aparición de la radio que, desde 1920, se convertiría en un medio de fundamental importancia por democratizar la información y, en consecuencia, la capacidad de reflexión, análisis y participación ciudadana en la vida pública.

En el mundo del trabajo se vivieron alternativas difíciles mientras duraron las condiciones impuestas por la guerra. La conflictividad social fue elevada desde 1917, el peor momento de la crisis, hasta 1921, cuando comienza una paulatina recuperación. Pero en los años difíciles, la conflictividad del movimiento obrero fue constante. Disminuyó a partir de la recuperación económica y la capacidad negociadora del gobierno junto con una menor combatividad de la dirigencia gremial. Los huelguistas (marítimos, ferroviarios, municipales, obreros de la carne, metalúrgicos, entre otros) se movilizaron en demanda de la reducción de la jornada laboral, aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo.

Las causas de la conflictividad social fueron variadas. Aunque el empleo había crecido, se había producido un marcado deterioro del nivel de vida a causa del descenso del salario real, el clima enrarecido introducido por la guerra y la influencia de la Revolución Rusa de 1917. Se combinaban los síntomas de la crisis del liberalismo con el surgimiento de ideas autoritarias.

Todos estos fueron factores que incidieron en el desarrollo de las jornadas de enero de 1919, cuando a raíz de la reducción de salarios en los talleres metalúrgicos de Vasena e Hijos, se desató una huelga que trajo aparejada la muerte de muchos obreros. La represión fue violenta y participaron de ella no solo la policía y el Ejército, sino también fuerzas paramilitares toleradas por el gobierno.

El aumento del empleo hacia el fin de la guerra repercutió favorablemente en el nivel de sindicalización. La ideología predominante en el movimiento obrero era el sindicalismo, que como ya se ha dicho, era una tendencia más moderada comparada con el anarquismo. La corriente sindical se había consolidado desde el Centenario, cuando desplazó a los anarquistas de la conducción de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Continuó creciendo durante el gobierno de Yrigoyen, con quien mantenían una fluida relación.

Si bien las huelgas y los enfrentamientos no desaparecieron, durante la presidencia de Alvear la conflictividad se redujo. La instauración del 1º de mayo como feriado nacional fue un hecho simbólico importante. Pero lo más relevante para que dicha conflictividad disminuyera fue el crecimiento de la economía, que repercutió favorablemente en el salario real y en las condiciones de vida de los trabajadores.

Estas mejoras implicaron una elevación de la calidad de vida, especialmente a partir de la generalización del descanso dominical y la orientación del uso del tiempo libre hacia espectáculos populares como el cine o el fútbol. La importancia de la sociabilidad barrial, claro reflejo de las transformaciones urbanas producidas durante esos años, fueron desarrollando formas nuevas de movilización, no clasistas, como las realizadas por sociedades vecinales y bibliotecas populares. Allí se cruzaban actividades de tipo fomentista, políticas y culturales,

reorientaron las manifestaciones más conflictivas existentes en el seno de la sociedad y le otorgaron un carácter más cultural, artístico y deportivo a la participación popular.

Otros factores que contribuyeron a aminorar el conflicto social se relacionan con la decadencia del clima revolucionario europeo, ahora involucrado en un proceso más extremo a partir del ascenso del fascismo. El rol conciliador y poco proclive al enfrentamiento de la conducción sindicalista del movimiento obrero también fue influyente para que se dieran estos cambios. Un modelo de sindicalismo centralizado, fuerte y verticalista, que apelaba al diálogo y a la negociación.

## **b) Dictadura militar y democracia fraudulenta (1930 - 1943)**

### **La Política**

El gobierno del general Uriburu fue breve. El golpe fue producto de una conspiración cívico – militar: además del Ejército, hubo apoyo de personalidades civiles y de partidos políticos, como el socialismo independiente, la Unión Cívica Radical anti personalista y los conservadores. La conspiración contó a su favor con la actitud pasiva de la población, con la activa campaña de los diarios y con la Federación Universitaria Argentina. Sin embargo, a pesar del amplio consenso reunido, el gobierno era débil, el presidente representaba a la tendencia minoritaria de la conspiración que lo había llevado al poder.

Tanto Uriburu como el sector nacionalista que lo apoyaba no solo eran anti yrigoyenistas sino profundamente antidemocráticos. Pretendían instaurar una sociedad jerárquica e imponer un gobierno de tipo corporativo orientado desde el Estado. Querían reformar la Constitución Nacional, derogar la Ley Sáenz Peña e instituir un sistema de voto calificado. Su discurso ponía énfasis en el combate al comunismo, al liberalismo y a la comunidad judía. Se persiguió a los activistas anarquistas y comunistas, se aplicó la vieja ley de residencia con los extranjeros militantes e incluso se fusiló a varios obreros anarquistas.

A los pocos meses, comenzó la reorganización de la oposición, con una parte del radicalismo debilitado, con algunos dirigentes populares en el exilio y con otros presos. A comienzos de 1931, el radicalismo se reorganizaba y se convertía en el principal opositor al gobierno de facto, con la dirección de Alvear, quien había apoyado el golpe pero se acercaba a Yrigoyen. Los otros partidos políticos y los diarios como *Crítica* y *La Nación*, que habían apoyado y alentado la conspiración militar, pronto se manifestaron en favor de las instituciones democráticas y de la Constitución Nacional.

Uriburu llamó a elecciones provinciales sin proscribir al radicalismo, en una táctica destinada a legitimar al gobierno surgido del golpe y que se sustentaba en la creencia acerca de la falta de popularidad y debilidad del radicalismo. La UCR ganó en la Provincia de Buenos Aires, lo cual derivó en la anulación de las elecciones y marcó el comienzo del fin del gobierno de facto. Y más importante aún, fue el comienzo de una larga década marcada por el fraude electoral.

Más allá de la retórica ultranacionalista y la utilización generalizada de la represión, el presidente no encontraba el rumbo y se quedaba sin apoyo. Así, sin mayores alternativas,

convocó a elecciones generales.

Los grupos conservadores se unieron en el Partido Demócrata Nacional y junto con el socialismo independiente y el radicalismo anti personalista se gestó la Concordancia. Esta coalición, que controlaría la vida política del país hasta 1943, eligió como candidato presidencial al general Agustín P. Justo, que contaba con el apoyo del Ejército, los grandes exportadores y los medios de prensa más importantes.

Junto a la Concordancia se conformó la Alianza Civil, que reunía a los partidos Socialista y Demócrata Progresista. Al radicalismo se le impidió la presentación de la fórmula que lo llevó a recurrir a la abstención electoral. Los comicios inauguraron la práctica fraudulenta que duraría más de una década y en medio de la cual triunfó la Concordancia con unos 600 mil votos frente a los casi 500 mil de la Alianza Civil.

El general Justo contó con el aval y el apoyo permanente del Ejército, que se fue convirtiendo en un actor político central durante varias décadas. El nuevo gobierno guardaba las formas institucionales en tanto mantenía en funcionamiento al Parlamento con bloques oficialistas y opositores. No controlaba a la Cámara de Diputados, aunque mantuvo un férreo control del Senado. Además de con factores de poder como la prensa, el Ejército y los grandes exportadores, el nuevo gobierno contaba con el sólido respaldo de los partidos unidos en la Concordancia.

El gobierno de Justo limitó la democracia dentro de fronteras relativamente estrechas. Por un lado, intentó restringir la actividad de la izquierda con una ley de represión al comunismo aprobada solo en el Senado. Por otro, utilizó sistemáticamente la represión política a cargo de la Sección Especial de la Policía Federal. Así, el maltrato a los presos y la tortura eran situaciones frecuentes.

El gran problema político de Justo se vinculaba a la corrupción reinante en algunos estamentos de poder y, especialmente, al fraude aplicado sistemáticamente durante su gobierno. Antes de apelar al fraude, se había utilizado frecuentemente la herramienta de la intervención a aquellas provincias que fueran opositoras al gobierno. Para justificar estas acciones ilegales e ilegítimas, que fueron denominadas como "fraude patriótico", recibió apoyo no solo de ministros relevantes como Federico Pinedo, sino también de algunos intelectuales, quienes no solo impugnaban el voto universal y secreto, sino que se expedían por un tipo de voto calificado.

A partir de 1935, con el retorno de los radicales a los comicios, el fraude se profundizó y se volvió más escandaloso. Comenzó a conformarse así un fuerte clima de oposición. La movilización sindical entre 1935 y 1937, contribuyó a incrementar ese clima de malestar social. La revitalización de la oposición política desencadenó en el triunfo de 1936 de la UCR. Había comenzado a gestarse un frente opositor integrado por radicales, socialistas y demócratas progresistas.

Los inconvenientes del gobierno de Justo no se limitaban al fraude. En 1935 una comisión investigadora de la industria de la carne, creada por el Senado para investigar las irregularidades cometidas por las grandes empresas exportadoras de carne, demostró el monopolio y la evasión impositiva por parte de algunas empresas. Además acusaba al gobierno y específicamente al ministro de Hacienda Federico Pinedo, de encubrir y proteger estas

maniobras delictivas. En medio de este debate, se produjo un atentado dirigido a Lisandro de la Torre, que terminó hiriendo mortalmente al senador por Santa Fe Enzo Bordabehere. Este trágico suceso, al que se agregaba la acusación de favorecer a la compañía británica Anglo relegando a las empresas nacionales de transporte, aumentó el descrédito del gobierno y el descontento de amplios sectores del arco político-ideológico local.

La insatisfacción no involucraba sólo a la oposición política y sindical sino también a sectores militares e intelectuales que atacaban al gobierno por la corrupción y por la dependencia con Gran Bretaña. Autores revisionistas se situaban fuera del campo político y practicaban un nacionalismo antiimperialista, guiado por una crítica cultural y filosófica al liberalismo, en la que se percibía una fuerte decepción e incredulidad acerca de las supuestas bondades de una democracia conservadora.

En 1935 se conformó la Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina (FORJA), que nucleó a algunos intelectuales de la época como Arturo Jauretche, Gabriel del Mazo y Homero Manzi, entre otros. El grupo se manifestaba heredero de Yrigoyen y de los principios de intransigencia radical y en desacuerdo con la política del radicalismo durante los años 30. Acusaban a Alvear de haber mantenido silencio frente a una política gubernamental que era considerada contraria a los principios de la Nación.

Hacia mediados de 1937, el presidente Justo preparó su sucesión teniendo activa participación en la elección de la fórmula de la Concordancia y eligiendo a Roberto M. Ortiz para presidente, ex ministro de Alvear y de Justo y Ramón S. Castillo. Esta fórmula resultó victoriosa en elecciones arregladas, frente a los candidatos del radicalismo y del socialismo.

El nuevo presidente estaba destinado a ser una mera continuación de su antecesor. Sin embargo, en cierta forma se manejó con independencia de criterios, tanto de Justo como de aquellos conservadores de la Concordancia. Su mandato estuvo signado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y, a pesar de sus simpatías por Gran Bretaña, siguiendo la tradición inaugurada por el radicalismo, mantuvo la neutralidad argentina. El nuevo mandatario se mostró más cerca de Alvear que de Justo e intentó limpiar la imagen de corrupción y de fraude. Para esto, puso las elecciones bajo el control militar y, finalmente, se impuso el radicalismo. Sin embargo, el impulso democratizador finalizó pronto ya que debido a una grave enfermedad debió renunciar a mediados de 1940. Su sucesor era el vicepresidente Castillo y con él, retornaría plenamente la venal maquinaria conservadora.

El presidente Castillo pronto reinstauró las prácticas electorales fraudulentas y las intervenciones provinciales, facilitando el acceso de los candidatos conservadores al poder y trabando el avance de los radicales. Se profundizó la represión hacia los opositores, se clausuró el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y se aplicó el estado de sitio, que impedía la propaganda política de los partidos.

Si bien, la presencia de algunos ministros hacía prever una política favorable a los aliados, Castillo mantuvo la neutralidad argentina frente a la guerra, una neutralidad pasiva y vacilante que se convirtió en activa. La presión se incrementó con la entrada de los Estados Unidos a la guerra, en 1941. Esta postura neutralista, reforzada con la reactivación de la flota mercante nacional y la nacionalización del puerto de Rosario, le brindó el apoyo de los sectores nacionalistas a los que se sumaban los conservadores provinciales.

La muerte del general Justo, modificó el panorama político de la Argentina. Castillo comenzó a maniobrar para imponer a su sucesor como candidato del conservadurismo, inclinándose por un hombre de confianza, el senador conservador y magnate azucarero salteño Robustiano Patrón Costas. Este proceso electoral se trunca por el golpe militar del 43, en medio de una realidad que indicaba una creciente debilidad del sistema político y la pérdida de consenso ante la ciudadanía, debido tanto al fraude electoral como a la corrupción reinante.

El Ejército, mayoritariamente neutralista, albergaba bolsones de fuerte simpatía hacia los regímenes fascistas y no aceptaba un futuro mandatario favorable a los aliados y con fuertes contactos con los Estados Unidos. Los militares habían desarrollado una conciencia nacionalista que desembocó en la idea de independencia económica tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos. Asimismo, se mostraban favorables al desarrollo industrial y armamentista autónomo. Las inquietudes estratégicas del Ejército se vinculaban con lo político, a partir de la necesidad de alcanzar un Estado fuerte y eficaz.

### **La Economía**

En el período comprendido entre 1930 y 1943, se produjeron una serie de clivajes fundamentales en la economía argentina que significaron cambios en la relación entre el agro y la industria, en el rol del Estado y en el comercio exterior. En este sentido, la etapa comenzó y finalizó con dos acontecimientos que contribuyeron en forma esencial a estimular esos clivajes: la crisis económica desatada tras el quiebre de Wall Street en 1929 y la guerra mundial entre 1939 y 1945.

La crisis de 1929 afectó relativamente rápido a nuestro país y abarcó la última etapa del gobierno de Yrigoyen, la dictadura de Uriburu y la primera parte del gobierno de Justo.

En 1930, la administración radical entraba en cesación de pagos como consecuencia del desajuste entre recursos disponibles y gastos del Estado. La Argentina dependía de las exportaciones de bienes primarios y demostró escasa capacidad para superar rápidamente la crisis, que produjo una reducción sustancial del movimiento internacional de capitales. Esta reducción desembocó en la quiebra del sistema multilateral y la adopción, por parte de las naciones industrializadas, de políticas dirigistas y proteccionistas con un rol fundamental por parte del Estado en el diseño de las nuevas estrategias. Esto fue: el reemplazo del multilateralismo por el bilateralismo, el abandono del patrón oro, la devaluación de las monedas y los consecuentes controles cambiarios, el establecimiento de cuotas de importación y las múltiples trabas a las exportaciones de los países periféricos a Europa y Estados Unidos.

Era obvio que en una circunstancia como ésta los efectos de la crisis habrían de repercutir desfavorablemente en la economía argentina. Por un lado, porque cesó la llegada de capitales, y por el otro, debido a la decisión gubernamental de seguir pagando el servicio de la deuda externa en un contexto de déficit estatal. Estos hechos derivaron en un profundo desequilibrio presupuestario que afectó gravemente a todos los sectores de la economía. La depresión tuvo serias consecuencias en la sociedad con su secuela de desocupación y miseria.

Yrigoyen casi no tuvo tiempo de reaccionar ante la crisis, como en gobierno de Uriburu y en el primer año de Justo, se tomaron medidas ortodoxas sin lograr grandes resultados para superar la recesión. Recién en 1933, con la conducción de Federico Pinedo y el apoyo de Raúl



Prebish, el gobierno adoptó una serie de medidas que implicaron la participación directa del Estado en la resolución de la crisis. Se siguieron algunos lineamientos económicos de John M. Keynes, partidario de una economía dirigida en donde el Estado debía desarrollar un papel central en la regulación y búsqueda de equilibrio entre la oferta y la demanda. En este esquema, lograr la plena ocupación y la generación de empleo desde el Estado, eran una tarea básica.

Tanto el presidente Justo como su ministro Pinedo, tenían convicciones radicalmente opuestas a Keynes. Sin embargo, debieron adecuarse a los nuevos tiempos y adoptar medidas dirigistas para sanear la economía. Se tomaron más aquellas ideas que ayudaran más a resolver los problemas relacionados con los grupos exportadores que a buscar el bienestar general de los consumidores. Pensaban en esta política como algo transitorio, a los efectos de superar la crisis, aunque el rumbo seguido fue completamente diferente.

El principal problema de la economía argentina radicaba en la debilidad de la tradicional estructura agroexportadora frente a la tendencia proteccionista de los países industrializados y la emergencia de las relaciones comerciales de tipo bilateral. Nuestro país mantenía fuertes lazos comerciales con Estados Unidos y Gran Bretaña; como consecuencia de las políticas de resolución de la crisis se privilegió la relación bilateral con el país europeo. Estados Unidos no permitió en ningún momento la entrada de granos y carnes argentinas. Ahora bien, la adopción de una política bilateral por parte de Argentina fue más una necesidad que una elección.

En 1932, Gran Bretaña determinó dar prioridad al comercio de carnes con países de la comunidad británica, principalmente Canadá y Australia, decisión que supuso reducir paulatinamente las compras de carnes argentinas.

En 1933, se firmó el Pacto Roca-Runciman, un acuerdo que favoreció ampliamente al mercado inglés. A partir de la firma de esos acuerdos, las exportaciones de carnes argentinas comenzaron a decaer. Se consolidó el monopolio del frigorífico en manos de ingleses y norteamericanos.

El gobierno de Justo dispuso la creación de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa de la Anglo, la más importante compañía británica de tranvías, con el objeto de conformar un monopolio de transportes que frenara la competencia de las nuevas y prácticas empresas de colectivos, que tuvieron un proceso de franco crecimiento.

Una de las consecuencias más interesantes de la crisis desatada en 1929, fue el crecimiento de la industria argentina. Esto se relaciona, por un lado, con el ensanchamiento del mercado de consumidores y con la existencia de suficiente mano de obra, y por otro, con los efectos de la crisis, que había cerrado la economía de tal manera que se tornó necesario encarar un proceso de sustitución de importaciones.

La caída de las exportaciones argentinas provocó una disminución en las divisas disponibles para importar productos manufacturados, hecho que se agravó por la devaluación del peso. Además, el gobierno comenzó a regular la importación mediante la elevación de tarifas aduaneras para adaptarla al consumo local. La consecuencia más visible fue el reemplazo de una importante cantidad de productos importados por manufacturas locales.

De todas maneras, no deben exagerarse los alcances del proceso industrializador en este período, que fueron limitados en varios aspectos, tanto por el escaso interés del gobierno como por la falta de capitales nacionales decididos a invertir en la industria. Por otra parte, la industrialización se dio en pocas ramas: textiles, algunas industrias alimenticias y, en menor medida, la química y la metalurgia. De todas formas, se dio gracias a este proceso, un crecimiento cualitativo y cuantitativo en lo referente a mano de obra trabajadora y a establecimientos industriales.

El proceso de industrialización se concentró esencialmente en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires (60%), Córdoba (15%) y Santa Fe (12%). El resto (13%) se distribuyó de manera más desconcertada, lo que habla de una fuerte dependencia del sector primario sin desarrollarse industrialmente. Pero a pesar de estos desequilibrios regionales, la industria argentina creció a partir de 1935. Como consecuencia de los cambios descritos.

Aun así, hacia 1943, la economía argentina seguía dependiendo en gran medida del agro y de las exportaciones de sus productos. En todo caso, el gran cambio radicaba en la gran cantidad de industrias autosuficientes que se multiplicaron, ya sea en la alimentación, el área textil, la industria del vestido y derivados del cuero, artefactos eléctricos, medicamentos, etc.

### **La Sociedad**

Durante estos años disminuye la mortalidad junto con un proceso de estancamiento de la natalidad. Lo que sumado a la disminución de la inmigración, trae como consecuencia una baja en la tasa de crecimiento de la población.

Hay un cambio sustancial en la composición sexual de la población urbana, comprobándose un aumento en la proporción de mujeres. De esta forma, durante este período deja de percibirse a la Ciudad de Buenos Aires como un lugar de hombres solos, lo que incide sobre las formas de sociabilidad.

Por otro lado, comienzan a hacerse evidentes las mejoras sanitarias y en materia de salud de los últimos años. La expectativa de vida mejoró notablemente: de 48 años promedio de vida en 1914 a 59 años de promedio en 1936.

En este período se produjeron cambios notables en la sociedad argentina. La crisis mundial y dos de sus consecuencias, la detención de las corrientes inmigratorias ultramarinas y el proceso de industrialización, contribuyeron en forma determinante al cambio en su fisonomía. El flujo ultramarino fue reemplazado por las migraciones internas.

La aceleración del proceso de industrialización requería mano de obra abundante y se nutrió de miles de migrantes que se trasladaban desde diversos lugares del interior del país hacia los centros urbanos. El éxodo desde las provincias adquirió connotaciones inusitadas y es un proceso comparable al producido por la inmigración extranjera de comienzos de siglo.

Agotada la capacidad de crecimiento poblacional del centro y sus alrededores, Buenos Aires creció y se expandió hacia la periferia, impulsando el desarrollo de un cinturón de barrios de un lado y otro de la avenida General Paz y del Riachuelo. Signo de los nuevos tiempos, de la crisis y del flujo de migrantes internos, en 1932 se levantó, la primera villa miseria, la contracara exacta de un proceso de urbanización que incluía la remodelación del centro de la ciudad de Buenos Aires pero que dejaba al margen a miles de personas.

El proceso de urbanización incluyó al barrio como factor de arraigo y adhesión para los vecinos, que frecuentaban clubes, bares, plazas y sociedades de fomento.

Durante este período, aumentó la tasa de alfabetización. El desarrollo del empleo público y administrativo, del comercio y de ciertos oficios incentivaba una tendencia que evidenciaba la importancia de saber leer y escribir. Se produjo una avidez por la lectura de diarios, revistas y publicaciones. Por eso, paralelamente a las escuelas públicas y privadas, surgieron una multitud de universidades populares, academias e institutos de artes y oficios de enseñanza práctica que complementaban la educación formal y ampliaban las posibilidades de desarrollo laboral, profesional y de socialización de la ciudadanía.

Este fenómeno se extendía a los sindicatos, sociedades de fomento, bibliotecas barriales y clubes, que ofrecían una amplia gama de cursos. Toda esta actividad en su conjunto incentivaba aún más los hábitos de lectura, lo que a la vez, fomentó el crecimiento de importantes editoriales.

Como vemos, la cultura y los modos de sociabilidad experimentaban transformaciones. La radio marcó el signo de los tiempos y adquirió pleno desarrollo durante estos años, vinculando a las poblaciones más alejadas del interior del país con la urbe porteña. Con su manera de emitir publicidad, los entretenimientos, las radionovelas y los informativos de noticias, la radio comenzó a modelar conductas y actitudes en la población, de maneras mucho más efectivas que los grandes diarios. A partir de este hecho novedoso, fue posible pasar parte del tiempo libre reunidos en familia en torno a la radio y a su repertorio: desde audiciones de música a radioteatros.

En el mundo del trabajo, la clase obrera aumentó a la luz del desarrollo industrial que había crecido en forma notable. Como consecuencia de las migraciones internas, la sociedad se argentinizó, y fue reduciéndose el porcentaje de extranjeros entre los trabajadores industriales. Una vez finalizados los efectos de la crisis, el nivel de desocupación alcanzó sus índices más bajos. El costo de vida se mantuvo estable hasta 1935 y a partir de allí creció más rápidamente que el salario nominal, afectando al salario real. El promedio de horas semanales del obrero industrial se estabilizó en 1945, hecho que generalizó la jornada laboral del 8 horas como un derecho finalmente adquirido.

En materia de regulación social, el Estado va adoptando mecanismos de negociación colectiva desde 1935, lo que preanuncia el alcance y la extensión de su capacidad regulatoria en los años siguientes. Pero la falta de generalización de una política laboral y las mismas resistencias patronales, minimizaban la eficacia de los mecanismos de negociación en estos primeros años del período. El estancamiento del salario real, las deficientes condiciones de trabajo y el problema habitacional, contribuían a generar un clima de descontento social potencialmente conflictivo.

La organización de los trabajadores fue relativamente débil durante los primeros años de la década del 30, cuyo mayor hito había sido la creación de la Confederación General del Trabajo (CGT) como resultado de la confluencia entre viejas organizaciones obreras de tendencias sindicalistas y socialistas.

Esta nueva organización sustentaba su representatividad en algunos pocos gremios importantes. Se manifestaba prescindente políticamente y su actuación fue discreta al

principio, alejada del perfil combativo que había caracterizado a otras agrupaciones durante los conflictos sindicales. Gran parte de los trabajadores no estaban integrados en la CGT, cuya estructura interna estaba signada por el enfrentamiento entre socialistas y comunistas. Esa situación se modificó una vez que la Unión Soviética ingresó a la guerra. A partir de allí, ambas corrientes unieron sus tácticas frente a los fascismos. Sin embargo, las posturas entre beligerantes y neutralistas dividían a las organizaciones obreras que, al producirse el golpe de junio de 1943, se hallaban divididas y debilitadas.

### **3- El peronismo. Del Golpe de Estado de 1943 al derrocamiento de Perón, 1943-1955**

#### **La Política**

##### **1943-1946**

Los generales Rawson, Ramírez y Farrell, aprovechando la apatía y el descontento de la ciudadanía, así como el desprestigio del gobierno de Castillo, protagonizaron en junio de 1943 el segundo golpe de Estado de la historia argentina. El golpe fue encabezado por Rawson, quién no llegó a jurar al ser desplazado por Ramírez. Este, a su vez fue destituido por Farrell, quien finalmente asumió el gobierno entre 1944 y 1946.

Las diferencias e internas en el seno del arco militar eran evidentes. El corto gobierno de Ramírez entre 1943 y 1944, estuvo signado por un nacionalismo católico de derecha y una visión autoritaria de la sociedad. Se disolvieron los partidos políticos, se implementó la enseñanza religiosa en las escuelas y se intervino la Universidad. La oposición equiparó al gobierno con el fascismo, que se arraigaba ante la persistente y militante neutralidad gubernamental frente a la guerra. Los Estados Unidos consideraron esta posición como una tácita adhesión al eje Berlín-Roma-Tokio. Las presiones norteamericanas dieron sus frutos y Ramírez renunció.

El general Farrell era neutralista pero debió avanzar en el camino contrario a sus convicciones. Presionado por EEUU debe declarar la guerra a Alemania como condición imprescindible para ingresar en las Naciones Unidas.

Durante el gobierno de Farrell se produjo el ascenso de Juan Domingo Perón a las instancias más alta del poder. Perón era uno de los ideólogos del G.O.U., una logia militar que tuvo gran influencia en el golpe del '43. La sigla fue interpretada de distintas formas: "Grupo de Oficiales Unidos", "Grupo Obra de Unificación", "Grupo Organizador y Unificador". Lo cierto es que en poco tiempo, Perón desarrolló una rápida carrera política. En junio de 1943 es nombrado jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, un cargo modesto pero influyente dentro de la estructura militar. Meses después, es puesto al frente del Departamento Nacional de Trabajo, que rápidamente se convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión: con esto empezó realmente su ascenso, que lo llevó a la presidencia de la Nación en 1946.

Desde la Secretaría, Perón le dio un fuerte impulso al moderno Estado interventor que se convirtió en árbitro de las relaciones entre obreros y patronales. Desde allí desarrolló una dinámica político social, área donde había mucho para construir. Se rodeó de algunos oficiales amigos y convocó a los dirigentes sindicales no comunistas para colaborar. Una buena parte de ellos participó activamente de la nueva política laboral.

El impulso de esta amplia cantidad de medidas sociales se tradujeron en sustanciales mejoras para los trabajadores: indemnización por accidentes laborales, un sistema de vacaciones pagas, jubilaciones y pensiones son solo algunas de las medidas implementadas, como la sanción del Estatuto del Peón para regular las relaciones laborales entre los propietarios y trabajadores rurales. Esta política de seguridad social requería del apoyo de militares y empresarios. El pleno empleo y los altos salarios eran condiciones indispensables

para llevar adelante una política de este tipo.

Una parte del Ejército veía con simpatía el trabajo de Perón, aunque varios sectores lo veían con desagrado. Muchos empresarios, aunque colaboraron activamente, no se mostraban muy conformes con sus políticas, debido a la creciente identificación los trabajadores con Perón. Las cámaras de Industria y Comercio emitieron un manifiesto que atacaba duramente la política social. Algunos partidos (socialistas, radicales, comunistas, demócratas progresistas y algunos conservadores) exigían la entrega del gobierno de facto a la Corte Suprema. Estos partidos plasmaron su unidad en la Unión Democrática que realizará una importante manifestación opositora en septiembre de 1945, la marcha por la Libertad y la Constitución. Así, entre la presión política y los desencuentros militares, el 8 de octubre Perón renunció. Los sectores opuestos lograron un triunfo provisorio cuando impusieron su renuncia a los cargos que ocupaba y también su detención.

El 15 de octubre, la Federación Obrera declara en Tucumán una huelga general, lo mismo hacen varios sindicatos en Rosario, exigiendo la libertad de Perón. Los obreros de la carne de Berisso se movilizan, lo mismo que en Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda y otros lugares del sur del Gran Buenos Aires.

En la noche del miércoles 16 de octubre, se reúne el Comité de la Confederación General del Trabajo y se declara una huelga general para el 18. El motivo del paro se expresaba en una serie de puntos que incluía el llamado a elecciones y el mantenimiento de las conquistas obreras pero no mencionaban a Perón. La declaración sirvió como impulsor para que varios sindicatos y los trabajadores se sintieran avalados para emprender acciones. Perón, alegando problemas de salud, consiguió que lo trasladen al Hospital Militar en Palermo, donde llegaría en la madrugada del 17.

En esa madrugada del día 17, comenzó una movilización de los trabajadores de La Boca, Barracas, Parque Patricios y otros barrios populares y zonas industriales de los alrededores del Gran Buenos Aires. Fue muy importante el número de trabajadores que salieron de Berisso, donde había importantes frigoríficos. Los obreros no ingresaban a trabajar en las fábricas y talleres e iban recorriendo los establecimientos incitando a abandonarlos para luego marchar hacia el centro de la Capital Federal. La acción estaba poco coordinada por dirigentes gremiales y la fuerza principal de impulso provenía de esas mismas columnas que mientras marchaban, retroalimentaban el movimiento.

Inicialmente se levantaron los puentes sobre el Riachuelo, paso obligado hacia la Capital para quienes provenían de la zona sur, muchos cruzaron a nado o en balsa hasta que, más tarde, los puentes fueron bajados. La policía no obstaculizó la marcha. El gobierno no actuó, se negaron a movilizar a las tropas desde Campo de Mayo, pensaron que la manifestación se disolvería por sí sola, pero al comprobar que era cada vez más numerosa, se entrevistaron con Perón en el Hospital Militar y pactaron las condiciones: Perón hablaría a los manifestantes para tranquilizarlos y para que se retiren y no haría referencia a su detención.

A partir de esa fecha, se abre una nueva etapa política, con nuevos actores sociales. Desde entonces, el movimiento obrero intervendrá permanentemente en el proceso político nacional.

## 1946-1955

Luego de un corto descanso y de casarse con Eva Duarte el 23 de octubre, Perón comienza su campaña política. El sector de la Unión Cívica Radical que lo apoyaba, formó la UCR Junta Renovadora, a la cual se sumaron el Partido Laborista y el Partido Independiente, en tanto que FORJA se disolvió para sumarse al movimiento peronista. Domingo Mercante es designado al frente de la Secretaría de Trabajo que, junto a muchos sindicatos, fue de gran apoyo para su campaña.

La oposición estaba formada por una parte del partido radical, socialista, comunista, demócrata progresista y conservador, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Sociedad Rural (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio y los sindicatos opositores. Todos ellos armaron la Unión Democrática, que apoyaría en los comicios a la fórmula presidencial designada por la Unión Cívica Radical.

El 26 de febrero de 1946 la coalición peronista triunfó con el 52.8% de los votos contra el 42.9% de la Unión Democrática. La diferencia no era abismal, aunque la brecha entre los sectores opositores y el peronismo, se ampliaría durante el decenio que duró su gobierno. Juan Domingo Perón gobernó durante dos períodos presidenciales consecutivos, lo cual fue posible gracias a la reforma constitucional de 1949.

La novedad en este momento inicial del peronismo fue la conformación del Partido Laborista. En su declaración de principios apoya a las ideas de democratización política y económica, a la participación obrera en las ganancias, la extensión del sistema jubilatorio a todos los trabajadores y la nacionalización de los servicios públicos y de los recursos minerales. El Partido Laborista fue una herramienta importante en la movilización obrera y en la canalización del apoyo a Perón, pero su existencia fue breve, poco después de las elecciones del 46 fue disuelto por orden del presidente.

Una vez elegido por la mayoría del electorado masculino, Perón designa un gabinete que refleja a los sectores que lo habían apoyado: pequeños industriales, sindicalistas, miembros de las Fuerzas Armadas, radicales renovadores entre otros.

Desde el punto de vista político, Perón quería colocar al Estado por encima de los diversos factores sociales de poder y transformarlo en un mediador. Así es que se perfeccionan en este período las estructuras de dominación burocrática estatal y se resuelven algunos de los problemas económicos y sociales que se venían arrastrando. El Estado fomenta la organización de sectores socioeconómicos que no contaban aún con organismos encargados de defender sus intereses.

A partir de la aplicación de una política redistributiva, los salarios se incrementaron y se aplicó una política social que completó la protección al trabajador en caso de enfermedad, accidente, embarazo o despido. Se mejoró en forma permanente la asistencia a la ancianidad, se crearon organismos asistenciales y culturales destinados a los estratos más bajos y se multiplicaron los centros de esparcimiento y descanso, así como el número de sindicatos.

Las instituciones y grupos sociales opositores fueron desplazados, el gobierno limitó las competencias del Congreso, privó a la Justicia de su autonomía y trató de reducir en toda forma su influencia, haciéndose cargo de casi todas las radioemisoras y periódicos y estableciendo un estricto control sobre las universidades.

Junto con la presencia del Líder, creció la importancia y la influencia de Eva Duarte de Perón, quien desempeñó un rol fundamental durante esa primera presidencia de Perón.

Desde 1947, el diario Democracia se convirtió en un órgano de propaganda casi personal. Un área importante de su acción fue el trabajo articulado alrededor de la asistencia social. Se creó la Fundación Eva Perón, cuyos fondos se integraban con la ayuda estatal y las contribuciones de la CGT y desde donde se impulsaba la construcción de hospitales, se subsidiaban medicamentos para los sectores más pobres y se organizaba la ayuda en alimentos, vestidos, y otros elementos de primera necesidad.

También en 1947, se produjo un acontecimiento fundamental en el plano del reconocimiento de los derechos políticos: se sanciona la Ley 13.100 de Voto Femenino, por la cual se le reconocen a las mujeres argentinas los mismos derechos políticos que a los varones. La movilización política de las mujeres dio sus frutos en las elecciones del '51, cuando el Partido Peronista obtuvo el 63,9% de los votos femeninos. Las mujeres cubrieron los cargos en las mesas receptoras de votos, fueron presidentas de mesa, autoridades y fiscales. Ingresaron al Congreso de la Nación 23 diputadas y 6 senadoras, no todas peronistas.

Otro aspecto fundamental de esta etapa fueron las reformas a la Constitución Nacional en 1949 y luego en 1953. El Preámbulo de la Constitución del '49 incluye el lema del movimiento político del gobierno: el establecimiento de una "nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana". Se incorpora el Decálogo del Trabajador, que establece la plena vigencia de los derechos fundamentales e incluye la declaración de la propiedad inalienable de la Nación sobre los recursos naturales, la nacionalización de los servicios públicos y la regulación del comercio externo. Se reconoce la propiedad privada como un derecho natural pero limitado por su función social, reconocimiento que implicaba que el Estado podía expropiar negocios y tierras para asegurar el uso productivo y beneficiar a la comunidad.

Las reformas del '53 fueron muchas, pero uno de los cambios fundamentales tiene que ver con el establecimiento de la elección directa del presidente de la Nación, suprimiéndose los colegios electorales y la posibilidad de la reelección presidencial inmediata.

Con la desaparición de la prosperidad y con el agotamiento de las reservas acumuladas durante la guerra, el gobierno se vio obligado a limitar la actividad económica estatal y a suprimir parte de las subvenciones que se otorgaban. Las elecciones nacionales de 1951 cambiaron el mapa electoral del país como consecuencia de las novedades introducidas por el gobierno. Por una parte, el padrón electoral se incrementó con la incorporación de las mujeres a la ciudadanía y la geografía electoral se amplió con la provincialización de los antiguos territorios de Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El peronismo ganó en todas las provincias.

En 1952, Perón asume la segunda presidencia. El nuevo período presidencial comenzaba también con la muerte de Eva Perón, ocurrida en julio de 1952. Para muchos, con ella desaparecía la figura que mejor encarnaba al peronismo y con su muerte entraría definitivamente en la mitología política argentina.

Las dificultades económicas derivadas de las tendencias de los precios internacionales y del comportamiento del sector agropecuario obligaron al gobierno a una mayor cautela frente



a las exigencias de los diversos sectores. Las demandas y las acciones de la oposición fueron acompañadas de una mayor represión, que incluía el incendio de sedes partidarias como la detención de varios opositores.

Durante los 10 años que gobernó el Partido Peronista, la discusión con la oposición se articuló alrededor de la antinomia "libertades públicas" por un lado y "justicia social" por otro. Esa antinomia se expresaba a través de realizaciones sociales que el gobierno llevaba adelante, junto con una política autoritaria. Las relaciones entre el gobierno y la oposición fueron tensas durante todo el período. De alguna manera, todos los partidos políticos se vieron afectados por el proceso que se inició con la llegada de Perón al poder, la Unión Cívica Radical fue el principal partido opositor. Con Perón en el gobierno, un grupo parlamentario radical intransigente orientó la política del partido, al mando de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi.

Las relaciones entre el gobierno de Perón y la Iglesia también fueron conflictivas. Si bien es cierto que inicialmente rigió una ley que establecía la enseñanza religiosa en las escuelas y que buena parte de la acción social del gobierno se hacía bajo el signo del catolicismo, pronto se harían visibles las divergencias.

Las tensiones con la Iglesia reconocían orígenes diversos. La creciente politización del aparato asistencial estaba en la raíz de las controversias, tanto como las reformas que apoyaban el establecimiento del divorcio, la equiparación de hijos legítimos e ilegítimos, la legalización de los prostíbulos, la eliminación de las subvenciones a la enseñanza confesional.

Al final de este período, van a darse algunos conflictos que pondrán en escena muchos de los problemas. La concentración multitudinaria el día de Corpus Christi en junio del '55 fue una manifestación de la oposición frente a la Catedral, que fue apedreada días después por grupos peronistas.

El 16 de junio, la marina de guerra, apoyada por aviones de la fuerza aérea bombardea la Casa Rosada con la intención de matar al presidente, que ya no se encontraba allí sino en el Ministerio de Guerra, detrás de la Casa de Gobierno. El bombardeo sobre la Plaza de Mayo deja un saldo de 300 muertos y más de 1000 heridos.

Esa misma tarde, grupos peronistas incendian la Curia Metropolitana y varios templos e iglesias del centro de la ciudad.

Los vínculos del gobierno con las Fuerzas Armadas tampoco eran fáciles. Ya en 1951 habían comenzado los levantamientos que sirvieron para depurar mandos militares de opositores y sospechosos. La evolución de las tensiones entre el gobierno y la oposición abría brechas crecientes entre Perón y las Fuerzas Armadas.

El levantamiento del '55 había fracasado. Pero en septiembre, un nuevo alzamiento en Córdoba, encabezado por el general Lonardi, no pudo ser sofocado. El 19 de septiembre Perón renuncia a la presidencia. Al día siguiente se refugia en la embajada de Paraguay iniciando un prolongado exilio.

Las resistencias al golpe fueron violentamente reprimidas y el general Lonardi asume el mando presidencial, iniciándose así una nueva etapa en la Argentina.

## **La Economía**

El peronismo se caracterizó por la importancia asignada a la participación del Estado

en la dirección y regulación de la economía. Se podría afirmar que la intervención estatal adquirió proporciones no conocidas hasta entonces. Se impulsó una industrialización basada en el incremento de la demanda de bienes de consumo masivo dentro del mercado interno, la cual era generada a través del aumento del salario real. El modelo requería medidas redistributivas del ingreso que impulsaran la demanda interna y la ocupación industrial. El principal mecanismo para lograr este objetivo fue la reasignación de recursos para la producción a través de la acción estatal.

Los planes quinquenales expresaron el interés del gobierno por industrializar el país. El primero, de 1946, tenía proyectos sobre salud pública, inmigración y capacidad de transporte, previsiones sobre industrialización y su costo iba a ser cubierto mediante préstamos. El principal instrumento para materializar la política y regular el comercio exterior fue el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio (IAPI), que ejercía el monopolio virtual de las exportaciones. Mediante el control de cambios y la fijación de los precios de las exportaciones para los productos primarios, el IAPI obtuvo los beneficios destinados a financiar el Plan Quinquenal.

La política del IAPI se basaba en una redistribución del ingreso del sector agrícola hacia el sector industrial. Los precios que se pagaban a los agricultores cubrían los costos y se hizo poco para mejorar la productividad mediante la mecanización, debido al alto costo de las maquinarias importadas. La agricultura sufrió también el deterioro del sistema de transporte y la falta de almacenamiento adecuado. La reorientación de los ingresos de la agricultura a la industria tuvo como consecuencia una disminución del área sembrada, desalentada por la imposición de los precios fijos para las cosechas. El IAPI obtuvo buenos beneficios en sus primeros años, cuando los precios internacionales fueron altos, pero esa tendencia cambió después de 1950.

En Segundo Plan Quinquenal buscó corregir las dificultades. Propició aumentar la producción y fomentó del ahorro. Se buscaba controlar a los trabajadores para maximizar su rendimiento, acrecentar el volumen de los saldos exportables, reducir las importaciones y frenar el gasto.

Durante los 10 años en que gobernó Perón, la industria se desarrolló rápidamente. El aumento del mercado interno por la imposibilidad de importar mercaderías del extranjero, así como las políticas proteccionistas del gobierno, jugaron a favor. La composición de la producción industrial se modificó de 1946 a 1952. La industria de alimentos y bebidas declinó, creció la textil y la metalúrgica. Este crecimiento industrial fue acompañado de una redistribución del poder en las empresas, cuya base estaba en la capacidad de negociación de los sindicatos y las comisiones de fábrica.

La industria recibió además, créditos del Banco Industrial y protección aduanera, divisas adquiridas a tipos preferenciales para equipamiento así como para la expansión del consumo. En este período el sector industrial cumplió un rol significativo en la creación del empleo urbano mediante la absorción de los trabajadores provenientes del sector agropecuario. Se manifestó también un fenómeno que se acentuaría en el futuro: la rápida expansión en el área de la construcción y del sector terciario como mecanismo fundamental de creación de empleo en las áreas urbanas.

Durante todo el período también crecieron las empresas estatales entre las que se encontraban aquellas compradas por el Estado y otras creadas con un fin determinado. La compra de ferrocarriles, teléfonos, puertos y otras empresas de servicios no estaba definida previamente en el programa del peronismo y hubo mucho de improvisación, lo que se hizo visible cuando se plantearon problemas operativos.

Durante toda la etapa peronista las modificaciones económicas no alteraron sustancialmente las desigualdades entre las diversas regiones del país, quedando en evidencia paradojas en regiones cuya economía generó riquezas que no se tradujeron en beneficios perdurables para la zona. La razón para esto es que los beneficios no se reinvertían, o porque los excedentes de las empresas quedaban en las casas matrices o porque sus propietarios trasladaban inversiones y consumos a otros lugares. Las dificultades de la estructuración económica se hicieron visibles en muchas provincias, donde la población no encontraba oportunidades de empleo.

Las relaciones del gobierno argentino con los Estados Unidos siguieron siendo conflictivas durante toda la etapa. El boicot norteamericano establecía la prohibición de vender materiales estratégicos, afectando el desenvolvimiento nacional. La política de los Estados Unidos obligó al país a producir en las peores condiciones, pues faltaban insumos básicos, equipos modernos y energía.

### **La Sociedad**

La población del país, de acuerdo con el Censo Nacional de 1947, tenía 15.893.827 habitantes. El aumento de la población denota una desaceleración ya marcada en los años 30. Esto se debió tanto a la estabilidad de la tasa de natalidad como al escaso aporte de la inmigración ultramarina más el descenso leve de la tasa de mortalidad.

Las migraciones internacionales europeas disminuyeron notablemente, aunque después de la Segunda Guerra Mundial se reactivaron. Paralelamente, se verificó un aumento de población proveniente de los países limítrofes: bolivianos y paraguayos en el norte argentino y chilenos en el sur patagónico. Esta población se radicó inicialmente en las provincias vecinas a sus países de origen pero luego, y por circunstancias similares a los nativos, se fueron trasladando hacia el Gran Buenos Aires y otros centros urbanos.

Durante esta etapa, los niveles de vida de los obreros mejoraron debido al aumento de los salarios reales y a la estructura de precios que estimuló el consumo. La intervención estatal, a través de las medidas de control del precio de los alquileres y alimentos, fue la causa principal de las mejoras.

A partir de 1946, se difundió un modelo de organización sindical cuyas raíces fueron introducidas en el período anterior. Los sindicatos se habían organizado en varias ramas industriales (vestido, carne, construcción) durante la década del 30 y no constituían una novedad. Sin embargo, nuevos elementos aparecieron en este período y tuvieron que ver con el rol del Estado que dio apoyo político y legal a la organización sindical.

Su intervención fue decisiva en la implementación del sindicato único por actividad, lo cual garantizaba el monopolio de la representación a un solo sindicato por sector, bloqueando de esta manera la formación de sindicatos rivales y con ello la competencia entre las

organizaciones.

El alto grado de centralización fue anulando la autonomía de las secciones locales. La intervención de las organizaciones obreras fue una práctica corriente, pues se buscaba colocarlas en el marco de las políticas gubernamentales. Las funciones de control no estaban ejercidas directamente por el Estado sino por la central obrera (CGT) y por las organizaciones intermedias que actuaron como agentes del Estado.

La constitución de la Confederación General del Trabajo como la única organización representativa de los trabajadores implicó también un proceso complejo pues, si bien se había logrado la unificación del movimiento obrero, el proceso convergió en una creciente pérdida de autonomía de los sindicatos. El rol de la CGT fue cambiando durante la etapa peronista, de coordinación de las políticas de sus miembros a las de mediación entre los sindicatos y el Estado para, finalmente, ejecutar las políticas gubernamentales en el movimiento sindical.

En materia de educación, el peronismo aspiraba a una mayor centralización. De este modo, fueron mayores los esfuerzos que se realizaron para vincular los valores peronistas con los valores de la religión y con el nacionalismo, al tiempo que comenzaron a formularse políticas abiertas de adoctrinamiento para maestros y alumnos. Estos cambios constituían un intento de desplazar al catolicismo como religión de Estado y monopolizar el espacio simbólico y social, situación que favoreció el estallido del conflicto con la Iglesia Católica y otros sectores opuestos al movimiento.

También tuvieron particular interés en privilegiar la educación técnica. No solo porque fue considerada bastión principal en un contexto de industrialización ya que aportaría mano de obra calificada que se iba a necesitar sino también porque se comprendía que las escuelas técnicas serían un elemento fundamental para alejar el peligro social y la atracción a teorías extranjeras como el comunismo.

En el plano cultural, se planteó un claro antagonismo entre la cultura popular peronista y la cultura de elite, que se asociaba a las tradiciones liberales. En la cultura popular se distinguían expresiones y formas diversas. Las transformaciones de las expresiones urbanas fue una de ellas, donde se destacaron la movilización y participación política y sindical así como la organización de las mujeres y los jóvenes.

Las mejoras salariales impulsaron el consumo, las actividades al aire libre como los espectáculos deportivos, los bailes con orquestas y los carnavales, que alcanzaban recaudaciones importantes. Miles de personas se trasladaban de un lugar a otro, no solo para buscar trabajo sino para disfrutar de la naturaleza y del tiempo libre. El turismo social promovido por el gobierno y los sindicatos amplió las fronteras para del disfrute. Fue una época de cambios profundos, donde comenzaron a reestructurarse las relaciones personales más íntimas y se alteraron algunas las jerarquías sociales.

El consumo popular se amplió y los medios de comunicación masivos como diarios y revistas, la radio, el cine y el teatro ayudaban a integrar al proletariado recién llegado a las ciudades y a incorporarlos al proyecto político del peronismo, aun sin proponérselo. Los intermediarios entre los productos culturales del pasado y las nuevas necesidades encontraron una base material inesperada de consumo.

En el plano musical, por ejemplo, ritmos y tonadas de las diversas regiones del país se

difundieron en los centros urbanos. El radioteatro reivindicó y actualizó alguno de los viejos moldes de la gauchesca y la utilización de ciertas tramas que facilitaban la identificación del auditorio así como de sus significados, que muchas veces, reivindicaba la causa de los débiles y abnegados frente a los poderosos.

El Estado fue un gran facilitador del acceso a estos bienes materiales y simbólicos y un promotor y protector de actividades culturales. Aunque también hubo marginados a este proceso de inclusión que, por voluntad o por la acción oficial quedaron excluidos y encontraron refugio en instituciones y propuestas culturales alternativas a las del Estado.

La llegada de miles de personas del interior no solo cambió el aspecto de la ciudad sino que configuró la imagen de un nuevo tipo social. Los llamados "cabecitas negras" o "descamisados": personas que circulaban por espacios nunca antes transitados, que habían estado reservados a las clases más poderosas y cuya presencia abría el terreno para las expresiones de desprecio y prejuicio, sumándose así, a las divisiones sociales y políticas, los conflictos culturales.

## 4- Del derrocamiento de Perón al golpe de Onganía, 1955 – 1966

### La Política

El golpe militar de septiembre de 1955 fue encabezado por el general Eduardo Lonardi y contó con el apoyo de todos los sectores de la oposición. Sin embargo, su breve gobierno provisional sólo concitaba la adhesión de los militares nacionalistas y de los grupos católicos, que no rechazaban los objetivos generales del justicialismo sino el personalismo de Perón y la corrupción en los diversos estamentos del poder. En realidad, querían practicar “un peronismo sin Perón”. Consecuentemente, Lonardi ubicó a nacionalistas católicos en áreas claves del gobierno y estableció contactos con algunos peronistas, buscando captar a los sindicatos.

Pero Lonardi representaba el ala minoritaria y no tenía el apoyo suficiente para llevar adelante un proyecto de corte populista. Las Fuerzas Armadas, así como la mayoría de los partidos políticos opositores, deseaban impulsar una orientación liberal y de restitución de la actividad política, pero a costa de desperonizar totalmente el país. Lonardi tuvo que renunciar y fue reemplazado por Pedro Eugenio Aramburu.

El nuevo presidente se deshizo rápidamente de los funcionarios nacionalistas y populistas. Se adoptaron duras medidas contra el peronismo y sus partidarios, a quienes se persiguió al punto de prohibir cualquier mención vinculada al régimen anterior. Si el peronismo en el gobierno había contribuido a conformar una sociedad políticamente dual, los opositores devenidos en gobierno, profundizaron esa línea.

El peronismo fue proscripto, condenado al ostracismo y a transitar la ilegalidad y la clandestinidad. Se intervino la CGT y se encarceló a sus dirigentes y se prohibió mencionar en la prensa a Evita o Perón o cualquiera de sus símbolos. A fines del '55, Perón decidió, desde el exilio, convocar a los peronistas a resistir a la dictadura con todos los medios a su alcance. De esta manera, comenzaba formalmente un movimiento que se denominó “la resistencia” y que, ante la imposibilidad de la práctica política formal, apelaría durante algún tiempo, a formas de autodefensa violenta.

Con algunos fusilamientos y la ola de represión, la lucha clandestina se fue desintegrando. Su acción fue casi espontánea al comienzo y más orgánica, cuando se creó el Comando Sindical Peronista con el fin de recuperar el control de los sindicatos. Los sectores combativos se lanzaron a conquistar las comisiones internas, aunque muchos obreros fueron despedidos por eso. En el congreso de la CGT los 32 gremios pro gubernamentales se retiraron y los que permanecieron se autodenominaron las 62 Organizaciones y se convirtieron en la conducción político - gremial del peronismo.

El posicionamiento frente el peronismo teñía toda la escena política y provocaba polémicas. El ala de la UCR Intransigente, que adhería al Programa de Avellaneda y era encabezado por Frondizi, se mostraba partidario de dialogar con el peronismo y asumía algunas de sus banderas, especialmente las vinculadas con la independencia económica. Otros se oponían frontalmente a esa estrategia y eran los enemigos más encarnizados del peronismo.

El principal rival de Frondizi era Ricardo Balbín. Ambos luchaban por el control del

partido y por la candidatura presidencial. Ambos aceptaron someterse a un referéndum donde ganó Frondizi.

En vista de las elecciones presidenciales del '58, Frondizi estrechó sus contactos con Perón a través de su delegado personal John William Cooke y logró su adhesión para la candidatura presidencial. Perón decidió apoyar a Frondizi por varias razones: por un lado, desconfiaba de un triunfo del voto en blanco. Por el otro, una victoria de Balbín obligaría al peronismo a endurecer su postura. De esta forma, con los votos peronistas, Frondizi logró un amplio triunfo, impensado en otras circunstancias, con el 49% frente al 29% de la UCR del Pueblo.

El gobierno de Frondizi contaba con una amplia mayoría parlamentaria y controlaba la mayor parte de los gobiernos provinciales pero su base de poder era endeble, la mayoría de los votos eran peronistas y los militares desconfiaban abiertamente del presidente. Además, la oposición practicaba una política esencialmente antiperonista y no parecía demasiado preocupada por la continuidad institucional. La UCR del Pueblo, consideraba ilegítimo a un gobierno que había triunfado con votos prestados y apelaban de forma peligrosa a la intervención de sectores militares.

El gobierno buscó cumplir alguna de las promesas efectuadas al electorado peronista: amnistió a los presos políticos y a los perseguidos por el gobierno de Aramburu, intentó volver a implementar acuerdos entre obreros y patronales, aumentó los salarios y sancionó una nueva Ley de Asociaciones Profesionales.

Influenciado por su asesor Rogelio Frigerio, desde el punto de vista económico, el presidente puso énfasis en la integración política de todos los argentinos y en el desarrollo económico impulsado por el capital extranjero, aunque el discurso frondicista atacaba el imperialismo inglés. Esta nueva orientación implicaba un alejamiento del Programa de Avellaneda, cuyo fundamento básico proponía la reforma agraria, la nacionalización de los servicios públicos, la energía, el transporte y el combustible.

El exceso de confianza puesto en la eficiencia llevó a Frondizi a privilegiar la negociación con las grandes corporaciones por sobre una búsqueda de consenso entre los partidos políticos. La llegada de Álvaro Alsogaray al Ministerio de Economía y la adopción de una política económica liberal ortodoxa agudizaron el enfrentamiento con el movimiento obrero. El gobierno adoptó una política represiva que consistió en la intervención de los sindicatos y la puesta en marcha el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). Este proceso desembocó en la derrota de los sectores combativos del sindicalismo y el surgimiento de una dirección dialoguista y negociadora orientada por el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor.

La estrategia externa practicada por Frondizi también le acarreó problemas. A la vez que manifestaba su apoyo a la Alianza para el Progreso impulsada por John F Kennedy en EEUU, se negó a condenar al gobierno revolucionario cubano de Fidel Castro. El Ejército asumía cada vez más la idea de la lucha antisubversiva. Finalmente, el gobierno cedió a las presiones militares y rompió relaciones diplomáticas con Cuba.

En 1960 los comicios de renovación parlamentaria se habían desarrollado sin provocar demasiadas turbulencias, pero en 1962, la elección de gobernadores planteaban serios

interrogantes y jugaba el destino del gobierno. Frondizi dio por finalizado el plan estabilizador de Alsogaray y retomó las políticas sociales del comienzo de su gestión.

Ante el insoluble problema de la proscripción electoral del peronismo, el gobierno optó por permitir su participación a través de algunos partidos provinciales neoperonistas. En marzo de 1962 se realizaron las elecciones y los peronistas se alzaron con la primera minoría. Frente al amplio triunfo, Frondizi intentó dar marcha atrás interviniendo algunas provincias para evitar el acceso de los ganadores al gobierno. Los partidos políticos no lo apoyaron y la UCR del Pueblo pidió la anulación de las intervenciones militares y la renuncia del presidente. A fines de marzo, los comandantes de las Fuerzas Armadas le pidieron la renuncia.

Los militares que derrocaron a Frondizi en 1962, no tenían una solución clara para resolver el problema del nuevo gobierno y carecían de apoyos suficientes. Primó la idea de erigir al frente del gobierno al presidente del Senado, José María Guido. El nuevo mandatario contó con el apoyo de varios sectores, incluida la UCR Intransigente, que avaló esta salida como un mal menor. El gobierno era débil y carecía de autoridad y autonomía. Las presiones militares lo obligaron a intervenir las provincias donde había ganado el peronismo.

Este clima incierto se daba en un contexto de retracción económica y se agravaba por los conflictos internos en el seno del Ejército. Los legalistas (azules) y los antiperonistas (colorados) se enfrentaron en un breve combate donde ganaron los primeros. Estos, encabezados por el general Juan Carlos Onganía, pretendían seguir poniendo en práctica un proyecto de carácter industrial y desarrollista. Contaban con el apoyo de sectores nacionalistas y se planteaban respetar las instituciones y llegar las elecciones integrando el denominado “peronismo sin Perón”.

En julio de 1963 se realizaron las elecciones presidenciales en un marco de extrema debilidad institucional debido a la proscripción del peronismo y al malestar social generalizado. El triunfo correspondió al candidato de la UCR del Pueblo, Arturo Humberto Illia con el 26% de los sufragios. El 21% fueron votos en blanco, el 17% lo obtuvo Oscar Allende de la UCR Intransigente y el general Aramburu por la Unión del Pueblo Argentino obtuvo un 7%.

El nuevo mandatario contaba con poco respaldo en la sociedad y en el Congreso. Su gobierno se debatía ante dos problemas: el peronismo proscripto y las Fuerzas Armadas en estado deliberativo y de conspiración. Sin la resolución de estas cuestiones, el país se tornaba ingobernable.

El nuevo gobierno era partidario de la participación activa del Estado en materia económica y reguló la actividad en algunas áreas sosteniendo una política de control de precios. Illia, que asumió una política económica cuyo modelo lo proporcionaban técnicos de la CEPAL, era partidario de una moderada independencia económica y, en ese sentido, se anularon los contratos petroleros del gobierno de Frondizi. El primer año de gobierno encontró una coyuntura económica relativamente favorable, cuando ascendió el Producto Bruto Industrial y se incrementaron las exportaciones, se aumentaron los salarios y se sancionó una Ley de Salario Mínimo que, sumada a una moderada política social, habría de encontrar una fuerte y persistente resistencia entre los empresarios y perfilaría un nuevo enemigo para el gobierno.



En 1964 el gobierno comenzó a soportar la oposición frontal del sindicalismo. La figura relevante del gremialismo era Augusto Timoteo Vandor, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. Este sindicato se había convertido en uno de los más poderosos, en consonancia con el crecimiento de su industria. Desde allí, construyó una base de poder que pretendía controlar al peronismo y limitar la influencia de Perón.

Desde los sindicatos se controlaban las finanzas, verdadero factor de poder proveniente de las cuotas sindicales y asistenciales de los afiliados y de los aportes patronales. A estos dirigentes les interesaba más la gestión que la lucha reivindicativa, para ello eran fundamentales las buenas relaciones con la patronal y la apelación al método de negociación directa con los empresarios. Como producto de esta política, los beneficios materiales como las obras sociales, que brindaban servicios de salud, o los hoteles en zonas veraniegas de los principales sindicatos, crecieron en forma notable y acrecentaron el poder de la burocracia gremial.

Este poder se extendió al terreno político a través del control del aparato partidario del peronismo, conduciendo la reorganización partidaria, al tiempo que con la CGT se organizaba un plan de lucha consistente en paros y ocupación de fábricas que resultaron verdaderos desafíos para el gobierno constitucional. Algunos dirigentes marcaban con claridad sus intenciones y las de la burocracia sindical, al reclamar directamente la intervención militar y el fin del gobierno de Illia.

Los referentes más poderosos como los banqueros, los empresarios industriales y los grandes productores rurales desconfiaban del gobierno, tanto por la tibia orientación nacionalista de la economía como por el discurso democrático. El gobierno resultaba un estorbo para efectuar negocios así como para la entrada de capitales extranjeros. Illia se había opuesto al ingreso indiscriminado de capitales foráneos. La anulación de los contratos petroleros, el control de precios, la expansión monetaria, el salario mínimo, vital y móvil y la sanción de algunas leyes sociales eran percibidas como verdaderos ataques a la libertad de mercado por las grandes corporaciones, como la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural, que arremetían sistemáticamente contra el gobierno.

De esta forma, a pesar del crecimiento económico producido, se generó una imagen de gobierno lento e ineficaz, incapaz de frenar el proceso inflacionario y de contener las demandas sindicales. Con el peronismo proscripto, el gobierno no tenía legitimidad. La labor conspirativa de los partidos políticos opositores junto con las incertidumbres e irresoluciones del propio radicalismo, sumado al permanente malestar militar y al rol de los medios de comunicación concebían la idea de que el golpe militar era la única salida a la crisis que atravesaba el país. Finalmente, el 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía encabezó el golpe militar que desplazó al presidente Illia.

## **La Economía**

El período comprendido entre la caída del gobierno de Perón y el ascenso de Onganía se caracterizó por una serie de crisis que afectaron la economía. A cada crisis, le correspondió un plan de estabilización, según las normas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo objetivo central era detener los procesos inflacionarios.

Estas crisis (1956, 1959, 1962 y 1966) se relacionaron con una serie de factores encadenados entre sí: la disminución de divisas derivadas de las exportaciones agropecuarias por el estancamiento productivo o por la baja de los precios internacionales; el crecimiento del sector interno, vinculado al aumento de las importaciones y un desequilibrio en la balanza de pagos con la consecuencia de un mayor endeudamiento externo.

Con el objetivo de equilibrar la balanza de pagos y eliminar los desequilibrios, los sucesivos gobiernos aplicaron planes de estabilización con las recetas del FMI que implicaron políticas devaluatorias y recesivas. Estos planes apuntaban a reducir los gastos gubernamentales y elevar los ingresos fiscales; devaluar el peso con vistas a aumentar las exportaciones y bajar las importaciones; por último, limitar la emisión monetaria a los efectos de impedir una demanda excesiva.

La participación argentina en el comercio mundial de productos agrícolas disminuyó durante este período. Si bien es cierto que particularmente en la agricultura se produjo una relativa modernización a partir de la difusión de maquinaria agrícola, en términos generales la producción agropecuaria se caracterizó por un relativo estancamiento.

En cuanto a la industria, durante estos años se produjo una retracción de la industria textil, el estancamiento de la producción de electrodomésticos y un leve aumento de los rubros de alimentación, tabaco, bebidas, papel, maderas y muebles. La industria química aumentó en forma notable, la producción siderúrgica y la automotriz lo hicieron de modo espectacular. El avance de empresas dinámicas fue acompañado con el retiro de otras antiguas, pues muchas estaban en malas condiciones técnicas, poco equipadas y con instalaciones vetustas. Ingenios azucareros, establecimientos alimenticios y textiles fueron algunos de ellos. También se produjo un proceso de descentralización geográfica de la industria.

Avanzaron sustancialmente las obras públicas, en especial en la extensión de la red nacional vial pavimentada. Los desarrollos más notables se produjeron en el interior del país. Los caminos acompañaban generalmente la red ferroviaria que, en un proceso inverso a la red vial, comenzó a cerrar ramales y a disminuir su extensión desde el gobierno de Frondizi.

Durante el gobierno de Aramburu, la política económica se reorientó hacia una menor participación e intervención estatal y, por el contrario, se privilegió una economía de libre mercado. En este sentido, las primeras medidas del nuevo gobierno fueron la disolución del IAPI y la desnacionalización de los depósitos bancarios. Devaluó el peso, se integró al FMI y al Banco Mundial y abandonó la tradicional relación comercial bilateral con países europeos. Pero falló en su intento por lograr la estabilidad económica y no pudo controlar adecuadamente el deterioro de la balanza comercial ni el proceso inflacionario. La consecuencia más directa del aumento de la inflación una redistribución de ingresos desfavorable a los trabajadores.

Frondizi inició su política económica otorgando los aumentos salariales prometidos durante la campaña electoral. Se adoptó una estrategia de flexibilidad monetaria y fiscal que derivó en un aumento de la oferta monetaria y, consecuentemente, se produjo una crisis inflacionaria agravada por el déficit de la balanza comercial. A partir de esa crisis, se varió el rumbo económico y aplicó una política de ajuste liberal ortodoxa, que logró detener la inflación pero produjo un marcado deterioro de los salarios. Continuó el deterioro de la participación de

los trabajadores en la distribución del ingreso.

La política económica de esta época se basaba en el desarrollo industrial básico (acero, celulosa, maquinarias y químicos), en el impulso de las economías regionales para integrar la economía nacional y la explotación a fondo de los recursos naturales. Debía estimularse también la tecnificación del agro. Para poder concretar este buscado desarrollo, era necesario lograr la atracción de una enorme masa de capital extranjero.

El gobierno impulsó una serie de leyes que estimularon la radicación de esos capitales y que fueron muy generosas con las inversiones extranjeras, ya que quienes invirtieran, podían remitir libremente sus ganancias a los países de origen. Se adoptaron regímenes especiales en áreas clave como la industria automotriz, energética, siderúrgica y petrolera. Esta política despertaba duras críticas desde los partidarios de un desarrollo industrial autónomo. Hacia finales de 1961, la Argentina entró en un nuevo ciclo de recesión. El crecimiento de la deuda externa y la falta de pagos llevaron al FMI a declarar al país en incumplimiento con los acuerdos y a imponer una serie de condicionamientos de carácter financiero. La consecuencia fue la caída de reservas y de las inversiones extranjeras, situación que se complicó con una importante fuga de capitales. Las políticas para resolver la crisis, tuvo consecuencias se manifestaron en el aumento del desempleo, la caída del producto bruto interno y una fuerte retracción del consumo, especialmente entre los sectores populares.

La política económica del gobierno de Illia apuntó a resolver algunas de estas cuestiones. Las estrategias apuntaban, por un lado, a evitar el crecimiento de la deuda externa y por el otro, a tratar de eliminar el desequilibrio de la balanza de pagos que redundó en un discreto éxito de la política cambiaria. La política económica tenía un leve tinte nacionalista y estatista que generó una dura y despiadada oposición de los grupos empresariales a partir de la anulación de los contratos petroleros, la polémica con el Banco Mundial por su injerencia en la política económica, la ruptura con el FMI por un acuerdo del gobierno anterior y la política de controles cambiarios.

Se produjo un sostenido crecimiento de las exportaciones favorecidas por los buenos precios internacionales y un relativo aumento en la productividad.

### **La Sociedad**

En 1960, la Argentina tenía poco más de 20 millones de habitantes. La tasa de crecimiento anual desde el censo anterior (1947) era la menor de un período intercensal desde 1869 y continuaría bajando durante los 60's. Uno de los motivos de la tasa decreciente se debió al freno del flujo inmigratorio en 1960, y a partir de entonces, la inmigración se compondría mayoritariamente de migrantes provenientes de países limítrofes. El otro motivo de la tasa de crecimiento descendente se relacionaba con la escasa tasa de natalidad, sin embargo, esta caída se atenuaba por el bajo índice de mortalidad. Durante esos años comenzó a perfilarse un fenómeno de características inverso al tradicional: la emigración hacia el exterior de sectores profesionales y especializados.

La cantidad de varones se emparejó con la de las mujeres después de varias décadas de predominio masculino. Ese desequilibrio favorable a los hombres se había debido esencialmente al aporte migratorio, ahora en total decadencia.

En este período continuaron los procesos de urbanización y de despoblamiento de las áreas rurales, que acentuaron las desigualdades entre las regiones. El desarrollo industrial de estos años y el aumento de la tecnificación agrícola (tractores, sembradoras y cosechadoras) contribuyeron al notable crecimiento urbano que contribuía a despoblar el ámbito rural. La concentración urbana mostraba en ese momento una de sus tendencias dominantes, el sobredimensionamiento del Gran Buenos Aires que creció en forma notable.

El nivel de vida en las grandes ciudades sufrió un proceso de leve deterioro como consecuencia del empeoramiento de la situación habitacional. Hubo un notable aumento de villas de emergencia y cayó el nivel de acceso a la propiedad. La crisis del denominado Estado de Bienestar trajo como resultado del estancamiento de la inversión en gasto social, lo que repercutió en las áreas de educación, salud y vivienda.

En el mundo del trabajo, el período comenzó un proceso de cambios en la composición de la fuerza de trabajo que se profundizaría más adelante. La clase obrera asalariada se mantuvo estable en términos de volumen, pero su peso relativo se retrajo en forma notable sobre la estructura social. Los asalariados eran los mismos, pero ahora eran menos en relación con las otras categorías sociales. Estos cambios se produjeron en el marco de un proceso de concentración industrial que implicó una mayor ocupación y un mayor valor agregado en los grandes establecimientos. Por otra parte, en términos generales hubo un estancamiento del empleo industrial y, como contraparte, un aumento en el sector servicios y en la construcción, particularmente en obras públicas.

Una característica de esos años fue el crecimiento del cuentapropismo, compuesto en su mayoría de comerciantes, electricistas, mecánicos, plomeros, tintoreros, peluqueros, transportistas, albañiles, pintores y martilleros para nombrar solo algunos de los rubros más importantes. Aunque en parte fue un bolsón de trabajo improductivo, el cuentapropismo fue también un camino importante para el ascenso social de los obreros en tanto podía brindar mayor remuneración que el empleo asalariado.

Simultáneamente tuvieron lugar transformaciones en la ocupación de los sectores medios. Como resultado del proceso de concentración industrial, se redujo notablemente el número de pequeños empresarios industriales. En cambio, hubo un marcado aumento del empleo urbano que redundó en el crecimiento de la clase media asalariada profesional y técnica. Este proceso incrementó la importancia y la jerarquización de la enseñanza media y universitaria. Sin embargo, el aumento exagerado de la titulación universitaria produjo un desfase que de aquí en más sería crónico, con el nivel de demanda de empleo.

Durante este período el salario real tendió a estancarse y no sufrió grandes variaciones. Después de la caída de Perón, aumentaron la producción, el empleo y la productividad, pero la distribución del ingreso se modificó de manera negativa para los trabajadores. Solo durante el gobierno de Illia se revertiría levemente esta situación.

Con respecto a la educación y la cultura, podemos señalar que la tasa de escolaridad primaria bajó levemente en el período. Como contrapartida, de acuerdo con la mayor demanda de personal capacitado y con un alto nivel de instrucción, se produjo un impresionante crecimiento de la tasa de instrucción secundaria y aunque a un ritmo menor, también fue importante el aumento de la población universitaria.

Siguió habiendo notables modificaciones en los hábitos de vida, especialmente en las grandes áreas urbanas pero también en las rurales. Estos cambios están vinculados con la notable difusión alcanzada por los medios de comunicación, especialmente la televisión, que comenzaba a imponer modas y valores y a jugar un rol preponderante en los gustos de las personas. Pero pese a su importancia, la televisión no era el único medio de difusión relevante, la industria editorial, a través de libros, diarios y revistas, el cine y la radio, jugaban un rol determinante al brindar pautas de consumo para sectores sociales diferentes.

Bienes de uso doméstico se hallaron al alcance de amplias capas de la población. Aunque la magnitud del esfuerzo y el costo para acceder a los mismos no eran tan visibles ni iguales para los distintos sectores de la población. Estos cambios culturales se dieron con mayor intensidad entre los sectores medios. La Universidad fue un importante punto de renovación a partir de la restauración de la autonomía universitaria y el gobierno tripartito, (alumnos, docentes y graduados). En su seno, se desarrolló un amplio abanico de tendencias político-ideológicas progresistas y de izquierda, algunas influenciadas por la revolución cubana de 1959, que tendrían un importante rol en los movimientos políticos sociales de los años siguientes.

## **5- Del derrocamiento de Illia al golpe de Videla, 1966 – 1976**

### **La Política**

#### **El Estado autoritario**

En junio de 1966, el Ejército derrocó al presidente Illia y una junta militar, se arrogó la suma del poder público y convocó para el cargo de presidente de facto al general retirado Juan Carlos Onganía. El nuevo presidente denominó el proceso como "revolución argentina" y dijo "no tener plazos sino objetivos", lo que mostraba la intención de postergar por mucho tiempo la actividad electoral y el sistema representativo de gobierno.

Contó con el apoyo de amplios sectores de la sociedad como la prensa, que durante los últimos años había operado a favor del golpe y se había convertido en un eficaz colaborador para generar el consenso civil. Otro gran apoyo lo dio el empresariado nucleado alrededor de diversas corporaciones, como la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General Económica. Sin embargo, el respaldo más sorprendente provino desde ciertas fuerzas políticas. Con pocas excepciones, varias agrupaciones simpatizaron con el golpe. La postura del peronismo y del sindicalismo peronista fue importante. Perón se mostró cauto y recomendó prudencia a sus simpatizantes, para abrir un camino de expectativas y de relativo consenso hacia el golpe. El sindicalismo suspendió sus planes de lucha durante un tiempo iniciándose así una tregua con el gobierno militar.

La expectativa y el consenso generados por el golpe militar y la figura de su conductor no disimularon las diferencias existentes entre los sectores que lo respaldaban. El mismo presidente lideraba una corriente de carácter nacionalista, anticomunista, neo corporativista y de rasgos paternalistas donde se nucleaban muchos militares y empresarios provenientes del catolicismo. Otros militares, Lanusse entre ellos y la mayoría de los empresarios, se mostraban en cambio, favorables a una política económica liberal y ortodoxa.

Esas tendencias convivieron en el gobierno de manera tensa, hasta que a fines del '66 el sector liberal terminaría hegemonizando y desplazando a los paternalistas de la conducción del Ejército y de áreas económicas y laborales, incluyendo a Adalberto Krieger Vasena, un economista vinculado estrechamente a los centros financieros internacionales y a las grandes empresas locales quien, después de haber debilitado la resistencia sindical, lanzó su plan económico, donde se pretendía racionalizar la economía y privilegiar a las empresas más eficientes en detrimento de las menos productivas. El nuevo ministro defendió la estabilidad bancaria y alentó los créditos desde el exterior así como también impulsó al Estado a invertir en grandes obras públicas como las centrales de Atucha y El Nihuil y la represa El Chocón, al tiempo que atacó la inflación recurriendo a un estricto congelamiento salarial y de las tarifas públicas.

Si bien es cierto que existían disensos en áreas claves como la economía y la educación, parecía haber acuerdo entre los grupos de poder en torno a la idea de disciplinar a una sociedad vista por ellos como permisiva y amenazada por ideas comunistas. El nuevo régimen manifestaba con claridad el carácter autoritario con la disolución del Parlamento, la

prohibición a los partidos políticos y la persecución ideológica a los opositores.

No solo se reprimieron y persiguieron manifestaciones políticas e ideológicas, sino también culturales. Fue particularmente importante la intervención a la Universidad de Buenos Aires mediante la ley 16.192, que pretendía poner fin a la autonomía universitaria. Así, la Universidad pasó a depender del Ministerio del Interior. Este suceso generó la resistencia de autoridades, profesores y alumnos en los claustros universitarios y trajo como consecuencia una violenta represión por parte de la policía, que irrumpió en la Universidad. Ante semejante avasallamiento y los recortes de la libertad, que incluían la persecución de profesores y la limitación de la libertad de cátedra, centenares de profesores e investigadores decidieron renunciar a sus cargos e iniciar un importante éxodo que continuaría durante varios años.

La censura, la búsqueda de “orden” y la vocación autoritaria del gobierno de Onganía era alentada por la Iglesia y se propagó hacia todos los ámbitos de la sociedad: la universidad, el teatro, la prensa, el cine, la radio y la televisión, aunque se manifestó con particular dureza hacia el movimiento obrero y los trabajadores en general, con el cierre de establecimientos industriales (entre los cuales los ingenios azucareros fueron la cara más visible), la racionalización de personal, la persecución de dirigentes más combativos, y el debilitamiento general, producto de una situación de empobrecimiento.

Para el peronismo, tanto desde el punto de vista sindical como político, se había tornado evidente que la política implementada por Onganía no respondía a sus expectativas. En consecuencia, Perón y los sindicalistas endurecieron sus posturas, confrontando con el gobierno militar a partir de ese momento.

A partir de 1968 la CGT se volvió a dividir: la CGT de los Argentinos rechazaba las posiciones de diálogo y en cuyo seno se destacaron los gremios enrolados en el “peronismo duro” (telefónicos y sanidad) y otros influenciados por el radicalismo y los socialistas democráticos (ferroviarios y viajantes de comercio). Raimundo Ongaro, del gremio de los gráficos, fue elegido como Secretario General. Los gremios vandomistas que adoptaron una posición de colaboración con la dictadura se agruparon en la CGT Azopardo. Quedaban de ese lado los metalúrgicos, los textiles y Luz y Fuerza.

En torno a la CGTA se ubicaron corrientes combativas del movimiento estudiantil y los Sacerdotes para el Tercer Mundo, que difundían doctrinas evangélicas donde se ponía el énfasis en el compromiso que la Iglesia debía tener con los pobres.

El contexto internacional influía en el clima revolucionario de la época y recorría diversas partes del mundo. Una revolución cultural en China, la resistencia vietnamita al Ejército de los Estados Unidos (el más poderoso del mundo), la revolución cubana, el movimiento estudiantil mexicano, las grandes movilizaciones pacifistas en Norteamérica junto con la radicalización de los afroamericanos, las rebeliones del Mayo Francés y, particularmente, la figura emblemática de Ernesto Che Guevara, cuya dimensión había crecido notablemente desde su muerte en Bolivia.

Al descontento popular, se sumó un resquebrajamiento del frente interno porque las organizaciones del campo se sentían perjudicadas por la orientación económica del ministro Krieger Vasena.

Si bien la inflación había bajado sensiblemente y el PBI había crecido, los salarios reales siguieron el camino inverso. A comienzos de 1969, el malestar obrero era evidente y más visible era la oleada de protestas universitarias que, en Corrientes y Rosario, durante terminaron con una violenta represión policial que provocó la muerte de dos estudiantes. El clima de protesta se extendió a Córdoba, donde se conjugaron el malestar obrero y el estudiantil en una salida masiva a las calles de cientos de estudiantes y obreros que ocuparon los barrios céntricos, periféricos y del cinturón industrial. El Ejército intervino y retomó el control, no sin esfuerzo, y con un costo de casi treinta muertos, cientos de heridos y detenidos.

El “Cordobazo” fue una manifestación social casi sin precedentes. Este hecho se proyectó hacia delante con otra magnitud, violencia y alcance, ya que de allí habría de surgir un movimiento sindical clasista y combativo, que no solo se enfrentaría a la dirigencia empresarial y al gobierno sino a las propias dirigencias sindicales. Las movilizaciones se reprodujeron en los años siguientes no solo en Córdoba, sino también en otras partes del país.

La consecuencia más profunda del gran movimiento del 69 fue el derrumbe del orden impuesto por el presidente. Se tornó evidente que el régimen había perdido el apoyo y la confianza de los principales agentes económicos. Los males atribuidos a las políticas económicas anteriores (mercado negro, fuga de capitales, caída de reservas) se hacían presentes en el Estado autoritario y la inestabilidad económica implicó, también, su desmoronamiento.

Onganía trató de establecer un diálogo con los sectores participacionistas de la CGT pero se hallaba débil para negociar y los sindicatos tomaron una distancia prudentes. El clima de descontento fue creciendo, radicalizándose en algunas protestas y organizaciones, llamadas “la guerrilla”. Esta profusión de grupos, algunos armados efectuó al comienzo operaciones menores, con la excepción del asesinato de Vandor, ejecutado por la organización Descamisados en junio de 1969.

El clima de violencia crecía. El gobierno instrumentó una dura política de represión que incluyó desde el cierre de medios de prensa hasta la sistematización del uso de la tortura con los presos políticos y una represión paralela e ilegal. En mayo de 1970, Montoneros secuestra, ajusticia y asesina al general Aramburu “por traidor a la patria y al pueblo”.

### **La caída del Estado autoritario**

Una Junta de Comandantes desplazó a Onganía de la presidencia. Los comandantes de las Fuerzas Armadas, orientadas por el general Lanusse, no se animaron a ocupar directamente el gobierno. Tras designar al gabinete y tomar decisiones claves como continuar la política económica, designaron como presidente al general Marcelo Roberto Levingston, un general absolutamente desconocido para la mayoría. El nuevo presidente se encontró con un gobierno fuertemente condicionado y sin apoyo propio, ni en el Ejército ni entre los políticos. Por otro lado, los sectores populares mostraban hostilidad y los grupos de poder tomaban distancia.

Levingston intentó continuar con la "revolución argentina" cambiando de rumbo y ensayando una política económica de carácter nacionalista. Para ello, nombró como nuevo ministro de Economía a Aldo Ferrer, un técnico de la CEPAL, ex funcionario de Frondizi, que



basó su gestión en una política salarial distribucionista, en el estímulo a la inversión de capital, el control de precios por parte del Estado y en la expansión del crédito. La política económica no generó entusiasmo ni entre los grupos de poder ni entre los sindicalistas, quienes le realizaron varios paros generales. La estrategia de Levingston no generó apoyos importantes.

La gran mayoría del espectro político manifestó su oposición a la estrategia presidencial. Los sectores de izquierda se nucleaban en el Encuentro Nacional de los Argentinos, la porción más importante de los partidos políticos (socialistas, justicialistas, radicales, demócratas progresistas y conservadores) que elaboró un documento denominado La Hora del Pueblo, liderados por el delegado de Perón Daniel Paladino y por Ricardo Balbín. Ahí se exigía al gobierno comenzar a transitar el camino de la normalización institucional y objetivo final debía ser llamar a elecciones sin proscripciones.

En esos momentos, se produce una intensificación de la acción de los grupos armados y de la oposición contestaria. Montoneros ocupa el pueblo cordobés de La Calera, las FAR hacían lo mismo en Garín. Descamisados asesinaba al sindicalista José Alonso. Estas organizaciones armadas crecían rápidamente al incorporarse cientos de jóvenes que veían en la violencia revolucionaria una salida para sus aspiraciones de cambio social. "La violencia de abajo para responder a la violencia de arriba" era el lema. Estas posturas eran abonadas por un contexto de falta real de libertades, debilidad de los partidos políticos, un clima de ideas revolucionarias que recorría el mundo, por el autoritarismo militar y por la represión policial. Las denuncias sobre aplicación de torturas se multiplicaban y el avance de la represión ilegal era cada vez mayor.

Por otro lado, desde el Cordobazo, se intensificó su actividad y creció de manera notable el movimiento gremial clasista y combativo, que no solo enfrentaba frontalmente a la política económica del gobierno y a los empresarios sino también a la burocracia sindical. El núcleo de esta oposición se hallaba en Córdoba y era orientada por Agustín Tosco y René Salamanca, dos dirigentes sindicales.

Si bien era cierto que a nivel nacional la vieja dirigencia sindical seguía controlando al movimiento obrero, el núcleo cordobés, manifiestamente clasista y de izquierda, demostraba una dinámica de movilización singular así como una influencia notable en el movimiento estudiantil. El débil gobierno de Levingston, incapaz de resolver la crisis, las movilizaciones permanentes y sin apoyo militar, se derrumbaba.

En marzo de 1971 el general Alejandro Agustín Lanusse asumía la presidencia y retenía el cargo de comandante en jefe del Ejército. El nuevo presidente tenía un solo camino y planteó desde un primer momento su intención de abrir el juego político, permitiendo la actividad partidaria y estableciendo el llamado a elecciones generales sin proscripción.

Desde el punto de vista económico y social, el gobierno no parecía tener rumbo: se profundizaron el desempleo, la caída del salario y el aumento de los productos básicos de la canasta familiar, situación que no hacía más que multiplicar los reclamos de trabajadores urbanos y rurales, así como de movimientos de carácter territorial como los movimientos denominados "villeros": ciudadanos agrupados en zonas muy precarizadas que también se manifestaban.

La espiral de violencia se hacía incontenible y la guerrilla golpeaba duramente al gobierno. El ERP secuestró al director general de la FIAT que murió en un tiroteo al ser hallado por la policía en el refugio donde estaba secuestrado. Asesinaron al jefe del II Cuerpo del Ejército, entre otros. Los militares no tenían claro cómo resolver el problema de la guerrilla aunque, cada vez más, se alejaba de la legalidad y apelaban a métodos ilegales y violatorios de los más elementales derechos humanos. En 1972 y después de un intento de fuga del penal de Rawson, un grupo de 19 guerrilleros fue capturado y sus 16 de sus miembros ejecutados. Los tres sobrevivientes relataron y reconstruyeron lo que fue la masacre de Trelew.

Era evidente que el gobierno carecía de consenso y credibilidad y necesitaba elaborar una salida política. El presidente junto con Arturo Mor Roig, un político radical, elaboraron el retorno a la democracia pero intentaron plasmar una retirada ordenada de los militares y poner límites al futuro político a través del Gran Acuerdo Nacional (GAN), donde se condicionaba al futuro gobierno tanto en el área económica (resguardando los intereses de los grupos dominantes) como de seguridad (donde los militares controlarían la represión a la guerrilla). También se trataba de erigir a Lanusse como el candidato de transición procurando neutralizar la lógica candidatura de Perón.

Perón, respaldado por la movilización popular, se convirtió en el actor principal de la transición y fue responsable del fracaso del GAN. Nombró como delegado personal a Héctor J. Cámpora, decisión que implicaba no solo el endurecimiento de Perón sino también el control directo de las negociaciones. Por eso estimuló las movilizaciones como elemento de presión y, en una de sus clásicas maniobras pendulares, desplazó relativamente a la dirigencia sindical e incentivó el rol de la juventud radicalizada durante este proceso. En este sentido apoyó la elección del joven Juan Manuel Abal Medina como secretario general del movimiento justicialista y posteriormente, promovió el ingreso de la Juventud Peronista (JP) al Consejo Superior del Justicialismo, que se convirtió así en el principal soporte de Cámpora.

Lanusse renunció implícitamente a ser el candidato presidencial pero logró vetar la posible postulación del líder justicialista. Perón aceptó el condicionamiento. En noviembre de 1972 selló un acuerdo de convivencia democrática con el líder radical Ricardo Balbín y creó el Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli) con partidos menores como el conservadurismo popular, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Movimiento Socialista de Liberación y el Movimiento de Izquierda Cristiana. Se estableció que Héctor J Cámpora y el conservador Vicente Solano Lima serían los candidatos para la presidencia.

Los comicios se realizarían en el marco de la reforma electoral efectuada en 1972, que estipulaba la realización de una segunda vuelta o ballottage si ninguna fuerza superaba el 50% de los votos en la primera elección, entre otras reformas.

El proceso preelectoral fue corto pero las campañas electorales fueron intensas. El peronismo, de la mano de la Juventud Peronista, ocupó el centro de la escena protagonizando masivas movilizaciones. El 11 de marzo de 1973 se realizaron los comicios y la fórmula del Frejuli, encabezada por Cámpora, se impuso con casi el 50% de los votos, seguido por la fórmula radical encabezada por Balbín con el 21%. Con la excepción de Neuquén, donde se impuso el Movimiento Popular Neuquino para gobernador y, de la Capital Federal, donde en la segunda vuelta se impuso el candidato a senador Fernando de la Rúa, en el resto del país se

impuso el justicialismo. De la mano de Héctor J Cámpora, el peronismo retorna al poder.

### **El retorno del peronismo al poder**

El 25 de mayo de 1973 asume el nuevo gobierno, en medio de un clima de euforia y con una Plaza de Mayo colmada y repleta de consignas reivindicatorias de la patria socialista, ante la presencia del presidente de Chile, Salvador Allende y de Osvaldo Dorticós Torrado representando a Cuba. Ese clima se extendió durante todo el día hasta la noche. Hubo manifestaciones en torno a la cárcel de Villa Devoto, donde miles de militantes de izquierda forzaron la liberación de los presos políticos, que poco después serían amnistiados.

Sin embargo, la euforia del triunfo justicialista no alcanzaba para ocultar una realidad poco tranquilizadora. El movimiento peronista estaba cruzado por profundas diferencias que involucraban distintas tendencias, desde los proyectos orientados por los sectores más radicalizados que propugnaban la liberación social y nacional del país, hasta grupos de ultraderecha controlados por el secretario privado de Perón, José López Rega, un oscuro y siniestro personaje que comenzó a adquirir poder público desde el momento del triunfo electoral. También estaba el sector más poderoso del movimiento, controlado por la tradicional dirigencia sindical, que no había perdido poder y estaba dispuesta a recuperar la presencia pública dentro del movimiento peronista.

En el marco de una sociedad y una época poco afecta a los métodos democráticos, la complejidad mayor del panorama político radicaba en la absoluta incapacidad de estos sectores por establecer normas para una convivencia pacífica de resolución de los conflictos. De esta forma, el gobierno se convertía en una arena de lucha donde los diversos sectores resolvían sus enfrentamientos de manera violenta. Entonces, en un contexto de movilización general y efervescencia reivindicativa de amplios sectores de la sociedad, el gobierno de Cámpora estuvo signado no solo por la lucha hacia el interior del peronismo, sino también por un convulsionado clima social en el que se sucedían las tomas de fábricas y reparticiones públicas. El gobierno no podía controlar ninguno de los frentes.

El gobierno de Cámpora fue ambiguo y estuvo marcado por el Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional, cuyo objetivo no apuntaba a modificar las bases del sistema, como pretendían los sectores juveniles radicalizados que lo habían apoyado. El Programa determinaba una política económica intervencionista que había formulado un pacto social producto del acuerdo entre la CGT y la CGE. En el plano exterior, se planteó una estrategia rupturista basada en una mayor independencia con respecto a Estados Unidos y una apertura hacia el mundo socialista, especialmente Cuba, Vietnam y China.

Pero el problema central seguía siendo el campo de batalla justicialista. El enfrentamiento interno se agudizaba y los grupos de derecha iban inclinando el conflicto de su lado, especialmente después de que Perón dejó de darle su apoyo a los sectores más radicalizados. Rodolfo Galimberti debió renunciar al Consejo Superior del Justicialismo por haber impulsado públicamente la formación de milicias populares. Se iniciaba así una maniobra destinada a desplazar a la juventud peronista y a las formaciones especiales del rol protagónico que Perón mismo les había adjudicado.

Los sectores de derecha, encabezados por López Rega, Norma Kennedy y el coronel

Osinde, comenzaron a tener una fuerte y cada vez mayor injerencia en el justicialismo. Ellos controlaron el operativo de retorno del general Perón en junio de 1973. En esa concentración de más de 1 millón de personas, los movimientos de la Juventud Peronista, liderados por Juan Carlos Dante Gullo y los grupos más radicalizados, se vieron impedidos a acercarse al palco desde donde Perón le hablaría a la multitud. Ante la presión ejercida para ganar posiciones, fueron atacados con armas de fuego proveniente de los grupos paramilitares del coronel Osinde que controlaban la seguridad del acto. El enfrentamiento armado dejó más de una docena de muertos y cientos de heridos.

El avión que traía a Perón desvió su recorrido y aterrizó por razones de seguridad en Morón. Contra lo que esperaba la juventud, Perón acusó implícitamente a este sector y al gobierno de Cámpora de la responsabilidad por los incidentes. También abogó por el retorno a los valores doctrinarios tradicionales del justicialismo. La ofensiva contra el ala izquierda del movimiento se extendió hacia todos los frentes.

Los dirigentes gremiales, encabezados por José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, iniciaron una ofensiva tendiente a desplazar a Cámpora del gobierno. En julio de 1973, tras 49 días en el gobierno, Cámpora y Solano Lima renunciaban a sus cargos.

Ante la renuncia del presidente y su vice, le correspondía la sucesión al titular del Senado, que había sido enviado intencionalmente a una misión diplomática al exterior, quedando el camino libre para Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega.

El nuevo mandatario tenía dos objetivos: alejar del gobierno a los representantes de los sectores de izquierda y convocar a elecciones para acelerar la llegada de Perón a la Casa Rosada. Dejó cesantes a varios funcionarios de todas las líneas de gobierno y convocó a elecciones presidenciales para el 20 de julio. Se conformó la fórmula para la primera magistratura, integrada por el general Perón y su esposa María Estela Martínez. La candidatura de "Isabel" demostraba el poder adquirido por el entorno lopezreguista. Esta fórmula se impuso con el 61,8% de los votos contra el 24,4% de la fórmula radical.

Perón basó su estrategia política en la convivencia con los partidos políticos, en el pacto social y en el reencauzamiento del movimiento justicialista. Con el primero no se presentaron grandes problemas, los otros dos se convirtieron en las dos grandes cuestiones de su gobierno que no serían resueltas satisfactoriamente. El pacto social era desbordado pues no alcanzaba a contener los reclamos salariales y de mejores condiciones de trabajo, a pesar del evidente reforzamiento del poder sindical.

Con respecto a los problemas internos del justicialismo, Perón se propuso disciplinar a los sectores juveniles encolumnados en la "tendencia revolucionaria". Su actitud fue muy dura, en especial después del asesinato del secretario general de la CGT, Rucci, hecho reivindicado por Montoneros. Una semana después, el líder ratificó el rol del sindicalismo como la columna vertebral del movimiento, siendo un gesto simbólico de indudable importancia. A partir de allí, todos sus pasos se dirigieron a eliminar la base de poder de la "tendencia", desplazando del poder a sus simpatizantes, que incluían a algunos gobernadores. También criticó a los diputados de la JP y el 1º de mayo, en una masiva concentración en la Plaza de Mayo los calificó de "imberbes", los instó a disciplinarse o irse del movimiento, ante lo cual las columnas

de la Juventud Peronista abandonaron la Plaza de Mayo. Perón intentó frenar la escalada del ERP declarándolo ilegal y persiguiendo a los medios de prensa que publicaban sus comunicados o informaban de sus acciones.

La muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, agravó la crisis política en tanto desaparecía de escena la única figura capaz de contener y disciplinar las fuerzas internas en estado de guerra, aún a precio de favorecer a alguna de ellas. El caso de Montoneros es claro, pocos días después de la muerte del líder, desconocieron la autoridad de Isabel y pasaron a la clandestinidad para reasumir la lucha armada.

Isabel Martínez, cuyas dotes políticas eran insignificantes, asumió la presidencia con el aval de todo el espectro político parlamentario. Durante los primeros meses se fortaleció en el poder López Rega, quien influía directamente en la presidenta. Se desató una ofensiva donde una organización paramilitar denominada la Alianza Anticomunista Argentina la Triple A persiguió y asesinó a varias decenas de políticos, intelectuales, artistas, periodistas y sindicalistas, preanunciando, en cierta medida, las acciones que llevaría adelante la dictadura militar. Los sindicatos disidentes fueron intervenidos, hecho que si bien no logró acallar el malestar del conjunto de los trabajadores, golpeó duramente a los líderes más combativos.

Cuanto más débil y aislado se mostraba el gobierno, más autoritario se tornaba. Isabel comenzó a apoyarse cada vez más en las Fuerzas Armadas, otorgándoles mayores poderes. Su manifestación más clara fue la orden impartida para combatir la guerrilla, involucrando al Ejército en la lucha contra el ERP en Tucumán en el Operativo Independencia.

En medio de este clima político y social tan inestable, la mayoría de las entidades empresariales (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentina, Cámaras de Comercio y de la Construcción) conformaron una asamblea permanente que, mediante paros sectoriales desestabilizaron y debilitaron cada vez más al gobierno. En este contexto, la figura presidencial perdía aceleradamente el poco peso que le quedaba. La división del bloque parlamentario, donde una parte cuestionaba el autoritarismo y el verticalismo presidencial, terminó por debilitar su figura.

La guerrilla redobló su acción, aunque también manifestaba sus limitaciones de carácter militar. Los partidos políticos opositores buscaban destituir a la presidenta a partir de un juicio político pero el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas destituyeron a las autoridades legítimas y asumieron el poder.

### **La Economía**

Durante la década comprendida entre 1966 y 1976, el comportamiento de la economía mostró vaivenes, debido tanto a la diversidad de las políticas económicas aplicadas por los distintos gobiernos como a la influencia de la economía internacional.

La producción agropecuaria fue un claro ejemplo de esos avatares. La agricultura pasó por momentos difíciles durante fines de los 60s y comenzó un proceso de recuperación y expansión en el transcurso de la primera mitad de los 70s. Las dificultades se debieron más a las fuertes retenciones a las exportaciones aplicadas por el gobierno de Onganía para equilibrar las cuentas del Estado que a la producción total. No obstante se observa un aumento de la producción agrícola que se debió fundamentalmente a la mayor demanda

internacional, especialmente a la procedente del bloque de países socialistas que requerían granos y aceites.

Paralelamente se produjo un proceso de transformación cualitativa que involucró a las áreas productoras de la zona pampeana y a algunos bolsones regionales. El mejoramiento cualitativo se evidenció en la mecanización del agro pampeano con la generalización definitiva del uso de tractores, cosechadoras, silos y galpones de almacenamiento y también, un significativo mejoramiento del rendimiento del suelo a partir del uso generalizado de semillas híbridas, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. Este proceso generó un aumento de las tierras cultivadas en detrimento de las dedicadas a la cría de ganado.

Contrariamente a lo sucedido con la agricultura, la ganadería pasó por un período de estancamiento. El mercado requería cortes especiales, carnes cocidas y precocidas, y productos enlatados con nuevas aplicaciones tecnológicas. Las empresas productoras y comercializadoras de carnes para la exportación debían realizar importantes inversiones y en algunos casos demoraron esas transformaciones o se diversificaron a otras ramas.

La actividad industrial continuó el proceso iniciado hacia comienzos de los 60s y, durante estos años, creció a un ritmo lento pero persistente. Menos afectada por las crisis cíclicas, la producción manufacturera experimentó un impulso. Se desarrolló un evidente proceso de transformación y redimensionamiento de una parte de las empresas industriales que implicaron una racionalización de las formas de producción, determinantes del alto nivel de conflictos gremiales, la concentración en grandes plantas y la evidente desaparición de cientos de talleres medianos y pequeños.

Por otra parte, el crecimiento industrial estuvo ligado con el ensanchamiento del mercado interno, no solo por la mayor capacidad de consumo de los sectores medios sino también por la elevación del nivel de vida de los trabajadores.

De esta forma se reactivaron la construcción, la industria textil, la producción de alimentos y de bienes de consumo livianos así como la industria automotriz, que con la fabricación de vehículos pequeños vendidos en cuotas incorporó en esta área del consumo a un amplio segmento de la población. Sin embargo, el sector de mayor dinamismo y crecimiento se vinculaba al impulso de las exportaciones industriales: productos siderúrgicos, químicos, máquinas y herramientas, así como también los automotores que alcanzaron los mayores logros en este período. Esta expansión de las exportaciones industriales se basó, en su mayor parte, en la producción de industrias nuevas, concentradas y de alto nivel tecnológico.

La política económica de Onganía definió su orientación al nombrar a Krieger Vasena al frente del Ministerio de Economía. El nuevo ministro tenía excelentes contactos y relaciones con las empresas multinacionales y los grandes grupos oligopólicos. Su plan económico consistió en devaluar el peso un 40% y estableció un gravamen del 40% sobre las exportaciones agropecuarias con el objetivo de sanear las cuentas fiscales. Liberalizó el mercado de cambios, disminuyó los gravámenes para la importación y aplicó una serie de medidas tendientes al saneamiento del gasto público. La estabilización era uno de los principales objetivos. Pero, a diferencia de las políticas estabilizadoras anteriores, apuntaba a reducir la inflación tratando de evitar las lógicas secuelas de recesión y apelando a la promoción de la competencia, la eficiencia y la inversión de capitales extranjeros. En consecuencia, tras otorgar un aumento

salarial del 15%, se suspendieron las convenciones colectivas de trabajo y se congelaron los salarios al tiempo que las empresas más importantes se comprometieron a congelar los precios de sus productos, los combustibles y las tarifas de los servicios públicos.

El Estado cumplió un rol central en esta estrategia, no solo estableciendo pautas sino también interviniendo activamente a través de la inversión en grandes obras de infraestructura, como caminos, puentes o la construcción de la represa energética El Chocón - Cerros Colorados. Durante esos años la red vial pavimentada avanzó significativamente uniendo distintas zonas del país. El entramado de rutas nacionales conectaba ahora las diferentes regiones del país con la excepción de la Patagonia.

La política de estabilización mostró un éxito relativo. Hacia los primeros meses de 1969 el ramo de la construcción mostraba un espectacular aumento del 59% y, si bien la agricultura se había estancado, el sector industrial había experimentado un importante crecimiento, mayor en la siderurgia y en la química que en las industrias tradicionales. La inflación había caído de manera sensible a menos del 10% anual. El PBI creció en forma notable y más allá del desempleo provocado por la racionalización y los cambios en la industria, la desocupación no aumentó.

Sin embargo, el reparto de ese éxito fue desigual y los mayores beneficios recayeron en un pequeño sector representado por la gran burguesía vinculada al sector financiero, a la construcción y al segmento más concentrado de la industria. El grupo de los perdedores era amplio y variado, los trabajadores asalariados perjudicados por el congelamiento de sus sueldos, los obreros desplazados por la racionalización y eficiencia, los empresarios nacionales rezagados por el excesivo peso del capital transnacional, los sectores rurales perjudicados por las retenciones a las exportaciones. En esta desigualdad, podremos encontrar los estallidos sociales producidos.

Entre 1969 y 1973, la economía tuvo un rumbo errático, debido a ambigüedades y la falta de un rumbo fijo. Se intentó continuar la fijada por el gobierno saliente pero con mucho menos poder. El desequilibrio entre importaciones y exportaciones, las pérdidas de reservas monetarias, la aceleración de la tasa inflacionaria, así como el aumento de precios y salarios, fueron elementos decisivos para buscar alternativas viables, sin embargo, el intento por imponer una política más distribucionista fracasó rápidamente. La llegada de Lanusse al gobierno no alivió la situación, al contrario, convencido que no habría mejoras económicas si no se alcanzaba un acuerdo político entre los diferentes sectores, el rumbo económico se descontroló casi por completo: inflación incontenible, caída del salario real, fuga de divisas y desempleo, fueron algunas de las características salientes de su gestión.

Con la llegada del gobierno peronista, elegido democráticamente, se reordenó, al menos por un tiempo, la economía. Se aplicó una política con un fuerte sesgo intervencionista, en tanto el Estado controlaba el proceso de estabilización regulando precios, salarios y el otorgamiento de créditos. Se inspiró, en alguna medida, en estrategias aplicada en la década anterior que ponían el acento en el crecimiento del consumo interno y en el impulso a las exportaciones. El Estado realizó importantes inversiones en las obras sociales y aumentó el número de empleados públicos en las diversas empresas del Estado. Si bien se logró activar rápidamente la economía interna a partir del mayor consumo de los beneficiados, el déficit

estatal se acrecentó con celeridad.

Por otra parte, se incentivó en primer lugar las exportaciones de carácter no tradicional (industrial) con la activa participación del Estado, que favoreció con créditos y estímulos a las empresas implicadas en el proceso exportador pero también se puso énfasis en la exportación de productos agrícolas pues la apertura de nuevos mercados (Unión Soviética) y los buenos precios internacionales de los granos favorecían su desarrollo. El excepcional saldo favorable de la balanza comercial es una buena demostración del momento favorable de las exportaciones argentinas.

Los grandes lineamientos del plan se manifestaron en el Plan Trienal 1974-1977, allí se explicaban los propósitos dirigidos a trasladar el dinamismo económico desde los monopolios al sector privado nacional y al Estado. La columna vertebral del plan era la política de concertación sectorial contenida en el pacto social, donde la representación de los trabajadores, de los empresarios, y el Estado firmaron un Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social, donde había un conjunto de medidas destinadas a disciplinar y atenuar los conflictos entre capital y el trabajo, a la vez de contener la inflación. Para prevenir el déficit fiscal, el Estado decretó fuertes aumentos tarifarios de combustibles y los servicios públicos. Hacia 1974 comenzó a evidenciarse la crisis del plan, el ascenso del precio del petróleo dispuesto por la OPEP, incrementó los precios de importación, se cerró el Mercado Común Europeo a las carnes argentinas y empezó a repuntar la inflación, como consecuencia del aumento del consumo, a la vez que se hacía evidente la falta de inversión privada. La coyuntura internacional y ciertos desajustes internos mostraban la fragilidad del proceso económico.

Pero a estos problemas se sumarían rápidamente la presión tanto de los trabajadores para mejorar sus salarios como de los empresarios, que apuntaban a ampliar el margen de beneficios y la rentabilidad de sus empresas. Los trabajadores lograban acuerdos salariales con los empresarios y éstos comenzaban a violar el pacto recurriendo al mercado negro, a la remarcaación de precios y al desabastecimiento. El pacto social se desgastó rápidamente.

En 1975 asumía como ministro de Economía Celestino Rodrigo, hombre del entorno de López Rega, quien cambió drásticamente de rumbo devaluando la moneda un 100%, decretando tarifazos superiores a ese porcentual en los servicios públicos y eliminó los controles de precios sobre el sector privado. Este proceso, conocido como Rodrigazo, ocasionó una impresionante estampida de precios y salarios, una emisión monetaria desmedida, las corridas por el dólar y el sistema de indexación. La principal consecuencia de esta política económica fue la recesión generalizada, perceptible en el descontrol de los precios, la especulación cambiaria, la disminución del PBI y el deterioro del salario.

### **La Sociedad**

Según el Censo Nacional de 1970, Argentina tiene una población de poco más de 23 millones de habitantes y continuaba siendo un país escasamente poblado con una densidad que no alcanzaba a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de crecimiento anual de la población seguía descendiendo, siendo la más baja de la historia censal. Esta tendencia decreciente reconoce las mismas causas del período anterior, el casi completo agotamiento del



proceso inmigratorio ultramarino, acentuando el proceso de argentinización de la sociedad. El dato novedoso de este proceso inmigratorio se relaciona con el notable aumento de la proporción de migrantes de países limítrofes sobre el total de residentes extranjeros en el país, de todas formas, esta migración nunca alcanzó la magnitud de la migración ultramarina.

Una segunda causa de la tasa decreciente está vinculada al cada vez menor crecimiento vegetativo, consecuencia de la baja tasa de natalidad, cuyos índices descendieron. Esta baja se debía centralmente a la caída de la fecundidad y, por consecuencia, a la disminución del tamaño de las familias. Durante esta década continuó el proceso de envejecimiento de la población, donde los mayores de 65 años representaban ahora el 7% del total de habitantes. El índice de masculinidad bajó a 98,6% y, por primera vez en el siglo, estuvo por debajo del femenino, esto implicaba que en la población argentina comenzaban a ser mayoría las mujeres.

Hacia 1970, el proceso de urbanización se había intensificado de tal manera que el 79% de los habitantes vivía en 602 aglomeraciones urbanas. Por supuesto continuaba el proceso de despoblamiento rural, especialmente desde el Noroeste y del Noreste. La tendencia a la urbanización se venía prefigurando desde hacía varias décadas, así como la concentración poblacional en unos pocos grandes centros urbanos, como consecuencia del proceso de radicación de los sectores secundarios y terciarios, esto es industria, comercio y administración pública.

Se acentuó el sobredimensionamiento del Gran Buenos Aires, que siguió creciendo y su población se incrementó en un 35% en relación con 1960, siendo el principal foco de atracción migratoria, mientras en la Capital Federal prácticamente no aumentaba. Desde el punto de vista regional, las zonas metropolitanas y pampeanas seguían concentrando a la mayoría de la población, alcanzando el 73,5% del total de la población.

En el mundo del trabajo, se percibe el crecimiento de la clase media con respecto a la clase obrera. Ahora bien, dentro de la población económicamente activa de los sectores medios se produjo el aumento del sector asalariado y la disminución del autónomo. La clase media asalariada fue absorbida principalmente por la industria, 22%, administración, 21% y el comercio 20%. Entre los sectores medios autónomos disminuyeron los transportistas y pequeños industriales y crecieron los comerciantes. Por el contrario, en la clase obrera se ensanchó el cuentapropismo y disminuyeron los asalariados.

El papel desempeñado por el sindicalismo a partir de 1966 fue ambiguo. En un primer momento, asumieron una actitud de expectativa y negociación, la presencia de varios dirigentes sindicales en la asunción de Onganía fue una muestra, sin embargo, el gobierno endureció su política sindical interviniendo gremios o encarando modificaciones o reorganizaciones de las condiciones de trabajo. La CGT respondió lanzando un plan de lucha contra la política económica y social del gobierno, lo que llevo a este último endurecer aún más su postura. Sin embargo, dentro del movimiento obrero se comenzó a diferenciarse entre los sectores sindicales tradicionales y los combativos.

El Cordobazo no modificó en lo inmediato las relaciones de fuerza en el seno del movimiento obrero, pero el asesinato de Vandor fue aprovechado por el gobierno para aplicar el estado de sitio y descargar una fuerte represión sobre la CGT encarcelando a algunos

dirigentes. Las consecuencias del Cordobazo se irían vislumbrando con el desarrollo más sólido de una corriente combativa, cuyo fin no era solo el enfrentamiento con la patronal sino con las direcciones sindicales tradicionales vinculadas con el peronismo.

La llegada del peronismo al poder y la consecuente aplicación del pacto social no fueron suficientes para frenar los conflictos sindicales que, por el contrario, se multiplicaron a la luz de las fuertes expectativas puestas por la clase obrera en eventuales aumentos salariales. Impulsados por los sectores más radicalizados (clasistas y peronistas combativos), se llevaron a cabo cientos de ocupaciones fabriles que, además de reivindicaciones económicas, establecieron una lucha frontal contra la burocracia sindical. Estas luchas cruzaron todo el gobierno peronista.

La cultura estuvo durante estos años influida por la censura y la represión a manifestaciones juveniles, culturales, artísticas, etc.

No obstante, el movimiento cultural de esta década fue realmente significativo, tanto por el nivel de creatividad como por la relación de algunas de sus manifestaciones con el compromiso político y social. La creatividad y la ruptura con las fronteras estéticas fueron notables. Simultáneamente surgió un movimiento cultural que involucraba a la música, el cine, la plástica y la literatura, caracterizado por el fuerte compromiso con los movimientos políticos e ideológicos que se sucedían en el país y en el resto del mundo. La mayoría de las manifestaciones estaban marcadas por un activo antiimperialismo y manifestaban su repudio a las diversas intervenciones norteamericanas formales (Vietnam, República Dominicana) o informales (CIA, FMI, Banco Mundial).

Este proceso de compromiso con las manifestaciones artísticas se profundizó notablemente durante los primeros meses del gobierno peronista, cuando el lenguaje político y la denuncia social llegarían al cine comercial. La aparición de la Triple A y el agravamiento del clima de violencia y represión fueron restringiendo este movimiento cultural hasta su persecución total y desaparición con la llegada de la dictadura en 1976.

## **6- La dictadura militar, 1976 – 1983**

En 1976 se instauró en la Argentina un gobierno autoritario y dictatorial que no reconoce antecedentes en cuanto a la magnitud con que se llevó a cabo la violación a los derechos humanos. Desde 1930, una sucesión de golpes de Estado encabezados por militares, y con mayor o menor consenso de la sociedad civil, había cometido graves atropellos en perjuicio de los derechos de los individuos: desde la supresión de los derechos políticos hasta la violación sistemática de la integridad de las personas a través de la tortura o de las detenciones sin proceso judicial. El Estado fue abandonando sus atributos naturales de regulador de los conflictos de la sociedad para convertirse en un Estado terrorista.

El régimen dictatorial encabezado por el general Videla, con la consigna de combatir la subversión, cometió un verdadero genocidio que implicó la desaparición de miles de personas. Como quedó demostrado por varias investigaciones nacionales e internacionales, el genocidio fue una operación planificada y ejecutada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, bajo su plena responsabilidad y con la colaboración de sectores civiles de la sociedad.

### **La Política**

En el contexto del desgobierno de Isabel Perón, del descontrol de la violencia y de un fuerte vacío de la actividad política, el 24 de marzo de 1976 asumió el poder la Junta de comandantes en jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Los objetivos básicos planteaban generalidades sobre la restitución de los valores occidentales y cristianos, la reconstrucción de la Nación, la promoción del desarrollo económico y la erradicación de la subversión.

Se mantuvo vigente el estado de sitio, se crearon consejos de guerra y se reinstauró la pena de muerte. La actividad de los partidos políticos tradicionales fue suspendida y los partidos de izquierda fueron prohibidos. Se intervinieron la CGT, la CGE, los gobiernos provinciales y municipales. El Parlamento fue suspendido y reemplazado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), formada por un representante de cada una de las Fuerzas Armadas. Los jueces de la Corte Suprema de la Nación fueron cesanteados.

En su afán por clausurar la vida política y sindical, el gobierno congeló las cuentas bancarias de numerosos dirigentes políticos y gremiales a la vez que intervino los sindicatos más importantes como la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato de mecánicos, de telefónicos, la Asociación Obrera Textil, entre otros.

La persecución a los sectores identificados con la guerrilla o simplemente con las organizaciones de izquierda fue implacable y desde el primer momento hubo detenciones y desapariciones. Solo en algunos casos aparecían los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, estas situaciones no eran claramente visibles por la población, debido a la fuerte censura informativa impuesta por las autoridades, que prohibía explícitamente comentar o hacer referencia a temas relacionados con hechos subversivos. En el mismo sentido se prohibió la edición, circulación y venta de muchísimo material escrito (diarios, revistas, libros y folletos).

Un importante segmento de la población, particularmente los sectores medios, había

recibido con alivio el golpe de Estado pues suponían que las nuevas autoridades restaurarían el orden perdido durante la última etapa del gobierno peronista. Pocos pensaban, y menos aún se animaban a plantearlo públicamente, que la ruptura del orden institucional no resolvía el problema de la violencia y la corrupción generalizada.

Los grupos de tareas conformados por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Ejército, Armada, Aeronáutica, Gendarmería y Policía) multiplicaban su acción ilegal y paraestatal. Los secuestros se masificaron y las víctimas eran trasladadas a cualquiera de los más de 300 centros clandestinos de detención, donde eran cruelmente torturadas y generalmente ejecutadas.

La operación represiva comenzó a salir de la oscuridad hacia fines de 1976, al menos en el exterior, ante requisitorias periodísticas sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Amnesty International publicó un informe donde se criticaba al gobierno por el tratamiento a los detenidos y por la falta de respeto a los derechos humanos. El gobierno rechazó la crítica y comenzó a plantear públicamente la existencia de una campaña anti argentina.

La eficacia y la brutalidad de la represión ocultaban la magnitud de las desapariciones e impedían cualquier manifestación local al respecto. Sin embargo, el 30 de abril de 1977, un grupo de madres cuyos hijos habían desaparecido, se animaron a hacer pública su angustia y marcharon con pañuelos blancos en sus cabezas en torno a la Pirámide de la Plaza de Mayo, en reclamo por la vida de sus hijos. Nacían las Madres de Plaza de Mayo, convertidas desde ese momento en el centro de los reclamos por los desaparecidos en la Argentina.

En mayo de 1977 se comunicaba oficialmente el laudo arbitral británico referente al conflicto argentino - chileno en torno a las islas Picton, Lennox y Nueva en el canal de Beagle. El fallo estableció que las islas pertenecían a Chile, el gobierno argentino decidió tomarse el plazo legal de 9 meses para establecer su posición y el año siguiente declaró nula la decisión británica. Un mes más tarde se firmaba el acta de Puerto Montt, por el cual se comprometían a buscar los mecanismos de negociación adecuados para resolver el conflicto, las comisiones no llegaron a ningún acuerdo e inmediatamente se registraron movimientos de tropas en ambos países. La guerra parecía inminente. Sin embargo, los dos gobiernos aceptaron la mediación papal y se firmaba el Acuerdo de Montevideo, por el cual el papa Juan Pablo II se comprometía a buscar la solución del conflicto de manera pacífica. A fines de 1980, la mediación ratificó en parte el laudo británico, que no fue rechazado públicamente. La guerra de las Malvinas relegaría el tema a un segundo plano.

En mayo de 1978 la Junta Militar anunció que finalizaría el período de excepcionalidad y en consecuencia, el teniente general Videla abandona el cargo de Comandante en Jefe del Ejército. En junio el régimen vivió su momento de gloria a expensas de un acontecimiento deportivo, el Campeonato Mundial de Fútbol. El gobierno invirtió más de 500 millones de dólares para generar la infraestructura adecuada (construcción y remodelación de estadios, rutas, aeropuertos, modernización de las comunicaciones, etc.). Durante el mes que duró el acontecimiento, ganado por la Selección argentina, tuvo lugar impresionante movilización popular de apoyo al equipo nacional que, frente a la ausencia de cuestionamientos al gobierno, pudo aparecer como una manifestación de consenso popular al

mismo.

Durante 1979 comenzaron a evidenciarse públicamente los primeros síntomas de debilidad del gobierno en un contexto en el cual iban apareciendo las grietas al plan económico. Conflictos internos entre civiles y entre militares revelaban las tensiones existentes entre duros y moderados. Por otro lado, el gobierno se hallaba cada vez más presionado internacionalmente por el tema de derechos humanos, llegó al país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, instalada en Buenos Aires, recibió numerosos testimonios sobre diversas formas de violación de los derechos humanos. La labor se realizó bajo presión del gobierno y de algunos medios de difusión que intentaron aprovechar la movilización popular que festejaba el Campeonato Mundial Juvenil en Japón para oponerla a los visitantes. "Los argentinos somos derechos y humanos" era el eslogan de entonces, un año después, Adolfo Pérez Esquivel recibía el Premio Nobel de la Paz por la defensa de los derechos humanos.

Cuando comenzó a cambiar la coyuntura internacional debido a los triunfos conservadores de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos, el gobierno militar ingresaba en su declive. La endeblez del sistema financiero emergió con la liquidación del Banco de Intercambio Regional en 1980, situación que se extendería rápidamente a otras instituciones generando desconfianza de los ahorristas e inversionistas.

En octubre de ese año, en medio de profundos enfrentamientos entre las tres armas, se designaba futuro presidente al general Roberto Viola para el período comprendido entre marzo de 1981 a marzo de 1984. El nuevo presidente asumía en medio de una situación compleja, caracterizada por la falta de consenso y de poder entre sus camaradas de arma, y el lento pero evidente resurgimiento de la actividad política y sindical. Viola intentó llevar adelante una política menos flexible desde el punto de vista político y trató de acercar al gobierno a políticos conservadores e incluso, liberó un poco la presión sobre los medios de comunicación.

La economía era uno de sus puntos más débiles. Su ministro de Economía no pudo controlar la debacle económica dejada por su antecesor, caracterizada por quiebras de bancos y empresas, devaluación del peso y fuga de divisas. En un intento por frenar la caída del peso, se emitió un mensaje de advertencia pero el dólar aumentó un 130% y el gobierno no pudo frenar la corrida financiera.

La pérdida de poder del régimen era paralela al lento resurgimiento de la actividad política que vio nacer la Multipartidaria, integrada por los principales partidos políticos, a la vez que la CGT conducida por el dirigente Saúl Ubaldini le otorgaba un carácter combativo a la resucitada protesta gremial, decretando un paro general y huelgas con movilizaciones callejeras. Si bien estas manifestaciones no tuvieron un apoyo masivo, marcaron la reactivación del conflicto social. Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, el general Viola es desplazado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri para completar el período presidencial del saliente.

El nuevo presidente poseía un estilo tosco y soberbio. Con su famosa frase "las urnas están bien guardadas" evidenciaba su determinación de no poner plazos a la estadía militar en el poder. Es indudable que a Galtieri lo beneficiaba la coyuntura internacional. Había construido una sórdida amistad con el nuevo gobierno norteamericano de Reagan. Su paso por

los Estados Unidos antes de asumir la presidencia había dejado una excelente impresión entre los sectores más conservadores, sobre todo por la participación contrainsurgente de los militares argentinos en los conflictos centroamericanos. Los frutos fueron inmediatos pues el gobierno norteamericano dejó de lado la política de derechos humanos de Carter y destrabó el embargo de armas a nuestro país.

En lo económico, el proceso recesivo siguió su curso y la protesta social también. El 30 de marzo de 1982 la CGT organizó una manifestación contra la política gubernamental, que tuvo eco entre la población, no obstante la participación fue bastante espontánea. Ante la sorpresa, el gobierno recurrió a la única arma que tenía, la represión. Más allá de la relativa masividad del evento, ese día parecía haberse desencadenado el comienzo del fin de la dictadura, pero la aceleración del proceso se debió a un hecho de características totalmente diferentes.

Dos días después de la movilización popular, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en Puerto Stanley (rebautizado Puerto Argentino) y ante la escasa resistencia de la reducida guarnición británica compuesta por 49 hombres, ocuparon las Islas Malvinas. Tomado el archipiélago, se procedió a enviar mayores contingentes de soldados.

Las causas de esta trágica aventura militar se relacionan con la irresponsabilidad de los mandos militares y con su desesperación para continuar en el poder. El gobierno recurrió a esta alternativa, para alinear a las Fuerzas Armadas detrás de un objetivo de reparación histórica. A la vez, la maniobra permitiría encolumnar a una sociedad un tanto cansada de la experiencia militar en el gobierno pero sensible al irredentismo malvinense. En este último sentido no se equivocaron, la gran mayoría de la sociedad manifestó un entusiasta apoyo a la decisión. Así se demostró durante las grandes concentraciones populares en ocasión de la ocupación de las islas.

El 1º de mayo comenzó la guerra. La aviación argentina se enfrentó con cierta eficacia a la Armada inglesa que llegaba a las costas malvinenses el día 21 y desembarcaba. Las tropas argentinas, mal pertrechadas y alimentadas -y peor entrenadas- no podían oponer una resistencia seria a su enemigo. El 14 de junio las tropas argentinas se rendían incondicionalmente. En el medio quedaron los cientos de soldados muertos en combate y el cruel e innecesario hundimiento del crucero General Belgrano por parte de la Armada británica en aguas de zona de exclusión que provocó una gran cantidad de víctimas.

La opinión pública, que había participado del burdo triunfalismo manejado hasta último momento por los comunicados oficiales con la complicidad de los medios de comunicación masiva, cambió rápidamente y el 15 de junio, en una concentración convocada por Galtieri, repudió vivamente a quien había vivido hacía solo 40 días. Esta vez la convocatoria terminó con una dura represión policial. El 17, Galtieri renunció a la presidencia de la Nación. No llegó a los 6 meses de gobierno.

No caben dudas de que la derrota militar de Malvinas aceleró la caída de los militares aunque, debido tal vez a la extrema debilidad de las fuerzas políticas, no tanto como para forzar la entrega del gobierno inmediatamente. Las Fuerzas Armadas sintieron duramente el impacto de la derrota y apenas si pudieron articular el nombramiento del general Reinaldo Benito Bignone como presidente, sin el respaldo de la Armada y la Aeronáutica, que se

retiraron de la Junta Militar.

Así, el principal objetivo del nuevo gobierno era ganar tiempo para negociar su salida del poder de la mejor manera posible. Esta salida debía implicar un acuerdo con las fuerzas políticas en torno a evitar la investigación de hechos de corrupción así como la responsabilidad militar en la guerra contra la subversión. Pero, la derrota de Malvinas y la aguda crisis económica y social habían dejado al descubierto las grietas de la dictadura militar y el gobierno de Bignone tenía serios problemas para atender todos los frentes: un sistema financiero en quiebra, reaparición de la inflación, caída de los salarios reales, un sector militar duro o el informe de la Comisión Rattenbach, donde se establecía la responsabilidad de los mandos militares por la derrota.

Esta situación lo obligó a aflojar los mecanismos represivos y comenzaron a aparecer públicamente los reclamos sectoriales: las Madres de Plaza de Mayo aglutinaron a su alrededor a las organizaciones de derechos humanos y sus marchas de los jueves alrededor de la Pirámide se convirtieron en un reclamo ahora escuchado por todos. Las organizaciones vecinales se multiplicaron e hicieron oír sus reclamos relacionados con los altos impuestos, los alquileres o los precios de los artículos de primera necesidad; los sindicatos emergieron del congelamiento impuesto por los militares y reaparecieron los conflictos y las huelgas para lograr aumentos salariales y la recuperación y normalización de los gremios intervenidos.

Uno de los elementos más importante de este proceso fue el renacimiento democrático, el retorno de la política partidaria. La movilización adquirió, a diferencia de una década atrás, características absolutamente pacíficas en el objetivo de recuperar las instituciones y las prácticas democráticas. Así, se produjo un notable resurgimiento de los partidos políticos, especialmente el justicialismo y el radicalismo, debido, principalmente, a la participación masiva de los sectores juveniles, que fueron transformando las estructuras y convirtiéndose en canales de expresión de las demandas de la sociedad.

Finalmente, el gobierno de Bignone estableció la fecha de elecciones para el mes de octubre de 1983, al tiempo que trató de crear un marco legal para proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas ante posibles juicios por violaciones a los derechos humanos. En realidad, su intento apuntaba a promulgar una autoamnistía con el respaldo de los principales líderes políticos, que fracasó ante el rechazo de éstos y la fuerte presión de las distintas organizaciones de derechos humanos y de una sociedad movilizadada que no estaba dispuesta a aceptar la impunidad.

En la Unión Cívica Radical emergió como el nuevo referente Raúl Ricardo Alfonsín, líder de la corriente interna Movimiento de Renovación y Cambio, creada para competir con el liderazgo de Ricardo Balbín. Alfonsín había sido uno de los pocos dirigentes que, al menos en la última etapa de la dictadura, criticó con firmeza a los militares, se opuso a la guerra y se preocupó por los derechos humanos. Venció a Fernando De la Rúa en las internas partidarias y, apelando al Preámbulo de la Constitución Nacional, sedujo a amplios sectores de la sociedad con su discurso, alejado del viejo esquema radical, en pro de la profundización de la democracia, la restauración de la justicia y la modernización del Estado y la sociedad.

En el Partido Justicialista la transformación también fue importante en tanto su estructura partidaria debió prescindir del verticalismo al que lo había acostumbrado Perón.

Sin embargo, no hubo un proceso de democratización interna y los viejos dirigentes provinciales y sindicales se adueñaron de la conducción, dirección y el control del partido. Lorenzo Miguel, líder de las 62 Organizaciones, se convirtió en el virtual jefe del peronismo, que eligió a Italo Argentino Luder como candidato a presidente.

Fuera de estos dos partidos, ni la derecha ni la izquierda produjeron liderazgos destacables. La derecha formó la Unión de Centro Democrático, orientada por Álvaro Alsogaray, pero el fuerte compromiso de muchos de sus integrantes con la dictadura militar le restó peso en un momento en que la opinión pública manifestaba un sentimiento de fuerte repudio hacia los militares. Desde la izquierda, solo el Partido Intransigente liderado por Oscar Alende logró cierto peso aunque buena parte de los sectores medios a los que podía aglutinar fueron arrastrados por el fenómeno de Alfonsín.

Todo el año 1983 estuvo signado por la movilización política, desde las internas partidarias hasta las campañas electorales. Ésta fue un hecho inédito desde el punto de vista de la movilización de masas. Cientos de miles de manifestantes concurrían a las diversas demostraciones partidarias aunque la gran mayoría fueron convocados por el peronismo y el radicalismo, que polarizaron la elección de manera concluyente. La característica de las campañas de ambos partidos fue totalmente diferente. Alfonsín imponía su discurso enfatizando la democracia y la paz, el justicialismo se manejaba con un discurso poco actualizado y un eslogan "liberación o dependencia" que parecía anacrónico y vacío de contenido.

El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín, al frente de la Unión Cívica Radical, obtenía más de un 52% de los votos dando un triunfo histórico a la UCR ante el justicialismo que alcanzó el 40%, el resto de los partidos en su conjunto apenas alcanzó el 8% de los votos. Era la primera vez en casi 40 años que le ganaba una elección libre al peronismo. Una nueva etapa democrática se abría en la Argentina.

### **La Economía**

La política económica implementada por la dictadura militar fue factible gracias al régimen represivo que impedían la manifestación de disenso, y también al aval otorgado por los grandes capitales internacionales que, a la vez, brindaba el único punto de apoyo a un gobierno que carecía casi de respaldos políticos.

La política de achicamiento del Estado y especulación financiera, a la vez que buscó destruir la tradición del Estado intervencionista, impulsó un mercado de capitales a corto plazo y una absoluta libertad para el movimiento de divisas. Por lógica consecuencia se estructuró una tendencia a la especulación financiera, que generó grandes beneficios para el pequeño sector que participó en él. La conformación de este mercado financiero con una marcada dependencia del sector privado adquirió un poder determinante en las finanzas y la economía locales.

El nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, era un hombre de fluidos contactos con el poder económico local e internacional y, sin duda, esta circunstancia, sumada a la eliminación del disenso por parte de un gobierno autoritario, le otorgó una cuota importante de poder dentro del nuevo gobierno. La prueba palpable de su buena relación con



los centros financieros internacionales se corroboró apenas asumió, cuando el FMI le otorgó préstamos por 400 millones de dólares. De esta manera el gobierno pudo superar la disponibilidad monetaria y la caída en cesación de pagos, así como encontrar nuevos préstamos y renovar créditos concedidos por los acreedores. Simultáneamente se crearon dos tipos de cambios: uno dirigido a regular las operaciones financieras y otro a las transacciones comerciales. El momentáneo reordenamiento de las reservas y de la circulación monetaria le otorgó a la administración económica el respaldo de los grandes intereses financieros internacionales.

Uno de los objetivos prioritarios del plan económico era la disminución del déficit del sector público: para ello se congelaron los sueldos de los empleados públicos y se indexaron los ingresos impositivos para disminuir el desequilibrio presupuestario. A su vez, partidarios de las políticas recesivas apuntaron a la caída del salario real como factor de estabilidad. Consecuentemente se redujeron los salarios reales en forma destacable. Y si el poder adquisitivo de éstos cayó un 40% en relación con años anteriores, creció en cambio la acumulación empresarial y se reconstituyeron ampliamente los activos privados. Estas estrategias, sumadas a la liberación de precios, permitieron modificar los precios relativos, pero queda claro que la recesión perjudicó esencialmente a la producción y comercialización de los bienes de consumo.

En el contexto de un impresionante crecimiento de las operaciones bursátiles, se sancionó la ley que impulsó la reforma financiera. El objetivo perseguido por el equipo económico era, por un lado, brindar al Banco Central las herramientas para controlar la oferta y demanda de dinero, por otro, otorgar el poder a las entidades financieras para captar depósitos, dar créditos y fijar tasas de interés. La modificación del sistema financiero se completó mediante tres leyes: descentralización de los depósitos bancarios, de las entidades financieras y de la reforma financiera. En términos generales, se permitía la existencia de un mercado libre de dinero mediante el cual las tasas de interés estaban sujetas a la oferta y la demanda. Esta transformación económica del período estimuló el sistema financiero - especulativo.

Hacia mediados de 1977 comenzó a reactivarse la inflación a consecuencia de la incidencia de los costos financieros sobre el sector productivo y, a la vez, sobre los índices de precios. Simultáneamente se produjo un alza de las tasas de interés a raíz de la demanda de dinero de las empresas públicas debido a la caída de la liquidez del mercado. La consecuencia más inmediata fue que el aumento del precio del dinero provocó un efecto recesivo y un descenso de la actividad productiva, provocando desocupación en dichos sectores.

Por otra parte, la suba de las tasas de interés afectó directamente al sector de externo de la economía local, debido a que este proceso provocó la llegada de capitales extranjeros que buscaban beneficiarse por los incentivos brindados por el mercado local. Ingresaron más de 2300 millones de dólares que, combinados con el superávit de la balanza comercial, generaron una aparente notable expansión de la base monetaria.

Sin embargo, esta situación traía aparejados varios conflictos en el interior del bloque de poder. Uno de ellos involucraba al sector rural que vivía un momento excepcional no solo por una favorable coyuntura internacional (nuevos mercados) sino también por las

transformaciones estructurales (mecanización). La política de sobrevaluación del peso provocó una fuerte retracción de las ganancias de los exportadores, que pronto comenzaron a presionar al gobierno para que modificara la política cambiaria y que perdió la puja contra el sector financiero que se veía favorecido por el retraso cambiario.

Al mismo tiempo, se produjo un redimensionamiento y achicamiento industrial a partir de la elaboración de las pautas donde se permitió la reducción de la protección arancelaria a un sinnúmero de productos locales (cero en el caso de los bienes de capital) y la llegada masiva de las importaciones. Estas medidas afectaron la industria, que perdió la ya tradicional protección del Estado frente a la competencia de la producción industrial extranjera. El perjuicio alcanzó tanto a la industria de bienes durables como no durables. Esta política significó un duro percance para las empresas nacionales que no podían competir con importaciones de aranceles bajos y un tipo de cambio cada vez más retrasado. El mercado financiero obtenía otra victoria frente a la industria, lo que se evidenciaba con la caída del producto bruto. Fueron numerosas las plantas que cerraron o achicaron sus niveles de producción al tiempo que se llevó adelante una reestructuración del sector industrial que, a pesar del brusco descenso del índice de obreros ocupados, no supuso una mejora de la eficiencia.

Hacia fines de 1979, la economía comenzó a mostrar síntomas recesivos coincidentemente con la caída del índice de precios, un fuerte aumento de las tasas de interés y la duplicación de la deuda externa. Pero los síntomas se convirtieron en crisis hacia 1980, cuando se produjo el cierre de varios bancos, que habían crecido a la luz de las medidas financieras alentadas por el gobierno. La convicción generalizada sobre el retraso cambiario y la desconfianza despertada por el sistema financiero provocaron una fuerte demanda de divisas y una fuga de depósitos.

Hacia mediados de 1980, en el contexto del conflicto provocado por la sucesión presidencial, el equipo económico intentó resolver algunas de las consecuencias del retraso cambiario para los sectores industriales, modificando algunas variables, y a la vez, modificando pautas cambiarias y decidiendo una devaluación del 10% y otras devaluaciones programadas hasta 1981. Pero la política económica fue modificada por los sucesores y éste fue el momento en que se visualizó el derrumbe del plan económico, particularmente cuando debió abandonarse la paridad cambiaria.

El nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, debió asumir en medio de un rebote inflacionario, una generalizada fuga de divisas de los ahorristas, compra de divisas y disminución de reservas. La fuerte devaluación del peso resultó letal para empresarios endeudados en dólares, por eso el Estado nacionalizó la deuda privada a través de la acción del Director del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo y engrosó de manera notable la deuda de la Nación en su conjunto.

Es indudable que había ocurrido una gran mutación en la economía argentina: en principio, además de remarcar la importancia adquirida por la deuda externa que había pasado de 8 mil millones de dólares en 1975 a 35 mil millones en 1980 (46 mil millones en 1983), tiene sentido recalcar que de este proceso había salido beneficiado un reducido sector financiero a la luz de la extracción de los recursos de los asalariados y los productores en

general.

A la vez, se generó una marcada concentración económica que no obedeció, como en épocas anteriores, a las inversiones extranjeras en el mercado interno, sino a la concentración de empresarios o grupos familiares nacionales (Bulgheroni, Fortabat, Macri, Pérez Companc) o multinacionales (Bunge y Born, Techint). Esta concentración se presentó en alguna rama de actividad en donde se había producido la reestructuración de la producción (automotriz, petróleo), o en la combinación de actividades industriales, de servicios, comerciales y financieras (algunos de estos empresarios contaban con sus propios bancos).

Pero sin duda, uno de los datos clave para entender el éxito y el impresionante crecimiento de estas empresas fue su ventajosa relación con el Estado. Más concretamente, muchas de estas firmas se convirtieron en concesionarias de obras y prestadoras de servicios al Estado. Éste había efectuado una importante cantidad de obras públicas que abarcaba autopistas, centrales hidroeléctricas, estadios de fútbol y otras obras de infraestructura para el Campeonato Mundial de 1978. Estas obras fueron privatizadas y otorgadas a concesionarios privados en condiciones favorables para su explotación, tanto las condiciones establecidas (regímenes de promoción que permitían reducciones impositivas, avales para crédito barato, etc.) como los mecanismos de reajuste de acuerdo al ritmo de la inflación. Algunos empresarios hicieron fortunas impresionantes con inversión y riesgos mínimos de su parte.

La política económica de Martínez de Hoz, cuyo mejor ejemplo parece representarlo el achicamiento de la red ferroviaria, tendió y logró, a achicar el rol del Estado en la economía al otorgarle una función subsidiaria y dependiente del mercado. Para disminuir el rol del Estado, se utilizó todo el poder estatal y se impuso por la fuerza la política liberal. El plan era atacar el corazón mismo de una política intervencionista iniciada luego de la crisis de 1930. El plan económico llevó adelante una política de destrucción subterránea de las empresas públicas, descalificándolas por improductivas e ineficientes, congelando los sueldos, manteniendo bajas a las tarifas y empeorando la calidad de los servicios prestados.

### **La Sociedad**

En 1980, la población argentina alcanzaba casi los 28 millones de habitantes. La tasa de crecimiento fue levemente superior al período intercensal anterior. El repunte parece haberse debido a un mejoramiento de la tasa de natalidad como consecuencia de un leve crecimiento de la nupcialidad y de un leve descenso de la tasa de mortalidad. Sin embargo, la Argentina seguía siendo un país escasamente poblado. La inmigración ultramarina había cesado completamente aunque desde comienzos de los 70s había aumentado los migrantes provenientes de los países limítrofes.

Durante estos años continuó el envejecimiento de la población puesto que la franja etaria mayor a los 65 años alcanzó el 8,2% que se dio a expensas de la franja etaria intermedia (15 a 64 años). Al mismo tiempo, continuó la tendencia al descenso del índice de masculinidad. Tampoco se detuvo la ya secular tendencia al aumento de la urbanización, siendo ya el 83% del total. Consecuentemente se profundizó el despoblamiento rural, aunque a un ritmo menor. Respecto a la urbanización, se perciben algunos cambios: en principio, el Gran Buenos Aires creció a un ritmo inferior a la tasa de crecimiento nacional y descendió su capacidad de

absorción de población.

Pero tal vez el fenómeno más notable haya sido la urbanización acaecida en las mismas provincias tradicionalmente rurales a partir de un proceso de migración intraprovincial. Regionalmente, el crecimiento de la población siguió teniendo como centro al área pampeana y metropolitana aunque su tasa de crecimiento estaba por debajo de la tasa nacional.

En el mundo del trabajo, durante estos años se profundizó el crecimiento de la clase media, que pasó de representar el 41% en 1947 al 48% en 1980. Simultáneamente hubo un achicamiento de la clase obrera que, en el mismo período retrocedió del 59% al 52%. Entre los sectores medios aumentaba el porcentaje de asalariados como consecuencia del crecimiento del comercio y la actividad financiera aunque disminuían los empleados públicos por la política de achicamiento del Estado. En un fenómeno inverso, entre la clase obrera disminuían los asalariados y se incrementaba el número de trabajadores autónomos, había más electricistas, lavanderas, mecánicos y peluqueros, pero era especialmente en la industria de la construcción (albañiles, peones, pintores, plomeros) donde se notaba el crecimiento del cuentapropismo obrero.

Con respecto a la clase obrera industrial, se produjeron un marcado aumento de la concentración de trabajadores en plantas grandes y altamente tecnificadas, así como una mayor disgregación territorial visible en el crecimiento de la radicación industrial en provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Neuquén, al mismo tiempo que se acentuaba la desindustrialización de la Capital Federal. Este fenómeno contribuyó a atenuar las migraciones internas y hacia finales de los 70s se constata una disminución de los "recién llegados" en las áreas industriales del Gran Buenos Aires. En contraposición, aumentan los provincianos con varios años de residencia.

A pesar de los graves problemas de la economía, durante los años de la dictadura militar la tasa de desempleo no creció sustancialmente. Los motivos parecen relacionarse con el aumento del cuentapropismo, la expansión de la industria de la construcción, la emigración al exterior de personal calificado o el retorno al hogar de una parte de la mano de obra femenina. Sin embargo, las cifras globales de la tasa de desempleo esconden la caída del empleo industrial y las diferencias regionales.

Por otra parte, el descenso del salario real no tuvo precedentes. Si en 1974 el salario mínimo superaba un 18% a la canasta familiar, en 1978 solo alcanzaba a cubrir un 57% de la misma. Ya en 1976 había descendido un 40% en relación a 1974, principalmente a causa del Rodrigazo. En el mismo lapso, la participación de los asalariados en el ingreso nacional se redujo del 48% al 30%. De esta dramática caída del salario no fue ajena la política salarial del gobierno militar: la suspensión de los derechos laborales y de las negociaciones salariales, así como los aumentos automáticos, le otorgaba al Estado un poder omnímodo. Decidía unilateralmente los aumentos salariales de acuerdo con el incremento de la producción o de los niveles de productividad. Por otro lado, como los reajustes se fijaban porcentualmente, cayeron más pronunciadamente los salarios menores y, de éstos, los estatales más que los privados.

El menor poder adquisitivo de los salarios se vio agravado por el marcado deterioro del sistema previsional debido, centralmente, a que las obras sociales fueron quitadas del ámbito

de los sindicatos y a la eliminación de la contribución empresarial al financiamiento previsional. Coherente con esta concepción, el gobierno militar disminuyó el gasto social al tiempo que comenzó a transferir el área de salud al sector privado.

Es imposible establecer el desempeño de los sindicatos durante estos años sin analizar la política de la dictadura militar. Y esto es así pues el gobierno de facto se propuso modificar el rol de la clase obrera y de sus representaciones sindicales no tanto porque fueran una amenaza al sistema sino porque pretendía desarmar la relación Estado - Sindicatos en vigencia desde 1945. Esto era fundamental para poder encarar las transformaciones económicas previstas por el plan económico. El gobierno atacó no solo a los sectores más combativos del movimiento obrero sino también a la vieja estructura sindical, quebrando la tradicional forma de relación de estas estructuras con el Estado. Además, se desarticuló la estructura centralizada a nivel nacional del movimiento obrero.

Para llevar adelante la tarea de desarticulación sindical, el gobierno dispuso de una serie de medidas legales, sancionando leyes represivas que apuntaban a prohibir las actividades gremiales, suspender el derecho a huelga, eliminar el fuero sindical especial, reimplantar la ley de residencia y garantizar la seguridad industrial con penas y sanciones para cualquiera que realizara medidas de fuerza. Simultáneamente otras leyes derogaron reivindicaciones logradas anteriormente: suspensión del Estatuto del Docente, eliminación de cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo y anulación de una parte de las disposiciones de los contratos de trabajo. A la vez, se transfirieron las obras sociales sindicales al Estado y, de esta manera, se privó a los gremios de los aportes, que restaba no solo poder económico, sino desarticular el sistema de obras sociales en tanto red de unidad y solidaridad entre los trabajadores.

Otro aspecto relevante del proceso de destrucción sindical remite a las diversas formas de encarar la represión. En primer lugar se destaca la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la represión. En tanto el Ejército consideraba la lucha reivindicativa como una forma de guerrilla industrial, se enviaban comandos militares directamente a aquellos lugares de trabajo donde existía algún tipo de conflicto. Fue frecuente la detención de activistas y delegados en las mismas plantas de trabajo. Más habitual que la intervención militar directa fue la represión paramilitar con objeto de desarticular la vanguardia obrera que se había constituido durante los últimos años. La acción terrorista paraoficial afectó a la totalidad de las estructuras sindicales de base puesto que la mayoría de los desaparecidos eran delegados y miembros de las comisiones internas. También existió la represión empresarial, donde muchos empresarios colaboraron activamente con la represión denunciando directamente a los activistas y delegados de sus plantas o ajustando internamente los mecanismos de represión.

El campo de la cultura no fue menos afectado por la represión que los otros niveles de la sociedad. La prensa oral o escrita, férreamente sometida al control de la censura, la escuela o la universidad se convirtieron en ámbitos acrícos en donde la libertad de pensamiento fue combatida, el cine, el teatro, la literatura y la pintura fueron todos espacios estrictamente vigilados por los funcionarios de la dictadura militar. También fueron espacios simbólicos manipulados por el régimen. Sin embargo, no podían ocultar el impacto producido en el exterior por el exilio de cientos de hombres de la cultura y por la desaparición o muerte de

muchos de ellos.

Si bien recién en 1981 comenzaron a manifestarse abiertamente diversas expresiones contra la censura, ya a partir de 1978 la aparición de la revista Humor abrió una brecha interesante y curiosa. El medio dirigido por Andrés Cascioli criticó duramente al gobierno, hecho que motivó la reiterada censura, el secuestro de ediciones y hasta el cierre temporal. La revista alcanzó una enorme popularidad.

La respuesta de la gente de la cultura, los sectores juveniles en su mayoría, fue notable y el fenómeno cultural fue un espacio de libertad de expresión, un espacio crítico de la falta de toda moralidad en el proceso social y económico abierto en 1976.

## **7- El retorno de la democracia, 1983 – 1991**

### **Los problemas de la transición democrática**

El Dr. Raúl Alfonsín asumió el mando presidencial el 10 de diciembre de 1983. La fecha no fue casual: ese día, en el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el nuevo gobierno levantó como bandera. Al asumir esa fecha para asumir su cargo, el nuevo Presidente de la Nación quiso destacar que se proponía restablecer la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

La asunción de Alfonsín se produjo en un contexto internacional relativamente favorable al desarrollo de las democracias viables en Latinoamérica. Estados Unidos había comenzado a apoyar el desplazamiento de las Fuerzas Armadas de los gobiernos de países sudamericanos como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, en favor de movimientos políticos democráticos. El desprestigio de las dictaduras militares, sin embargo, era diferente en cada país, y diferentes circunstancias condicionaban cada tipo de transición a la democracia.

Alfonsín asumió en medio de un clima de optimismo y esperanzas por las consecuencias que traería la instauración de la vida democrática en la sociedad argentina. La democratización cultural fue un proceso que acompañó la renovación de los partidos políticos y todo tipo de movilizaciones populares, festivales musicales, manifestaciones teatrales y espectáculos cinematográficos. La eliminación de la censura en los medios de comunicación, generó un inusitado clima de libertad e ilusión, que parecía augurar una época de bonanza y esplendor y que, al mismo tiempo generaba malestar en ciertos sectores militares y en sectores de la Iglesia.

Además, el nuevo gobierno llegaba al poder menos como producto de un proceso de acuerdos entre políticos y militares para garantizar la transición a la democracia, que como consecuencia de la ominosa derrota en la guerra de Malvinas. Ese fue el hecho que puso en fuga a los militares y les quitó la posibilidad de negociar una retirada ordenada.

Por lo tanto, el frente político que llegaba al gobierno tampoco había logrado acuerdos sustanciales acerca de las formas de ejercer la gobernabilidad, los modos de encarar las consecuencias sociales de las violaciones a los derechos humanos y las pautas a seguir en relación a la situación económica que, entre otros graves problemas, como el empobrecimiento de sectores populares –obreros, empleados, pequeños comerciantes e industriales, muchos profesionales y técnicos- arrastraba una gran deuda externa.

#### **La Política**

Cuando Raúl Alfonsín se hizo cargo de la presidencia, la agenda de problemas graves por resolver era demasiado amplia. Pero al amparo del enorme apoyo popular, los primeros tiempos de su gobierno transitaron por carriles relativamente exitosos. Dos años después de

haber iniciado su gestión y en medio de los iniciales y benéficos efectos del Plan Austral, el oficialismo obtenía un amplio triunfo electoral que afianzó su mayoría en la Cámara de Diputados, aunque en la Cámara de Senadores tenía una representación minoritaria frente al Partido Justicialista.

Uno de los aspectos más efectivos y convincentes del nuevo gobierno fue su política exterior, que mostró, desde el comienzo, su voluntad pacifista y de relativa independencia de los centros de poder mundial. Su política diplomática fue coherente y racional. Los reclamos de soberanía por Malvinas frente a Gran Bretaña, por ejemplo, recibieron el apoyo de una parte de la comunidad internacional en las votaciones en las Naciones Unidas. Y sin lugar a dudas, muy notable en materia exterior fue lograr el acuerdo con Chile por el Canal de Beagle. El gobierno argentino mostró una enérgica decisión de acabar con ese viejo conflicto y contó con el apoyo del peronismo renovador. La propuesta obtuvo mayoría de votos y poco tiempo después, un acuerdo que fue denominado “Tratado de Paz y Amistad” era firmado por los dos países, lo cual sentó las bases para una paz definitiva con el país trasandino. La misma importancia tuvo el Acuerdo de Integración entre la Argentina y Brasil: un documento de carácter político que apuntaba principalmente a la cooperación económica entre ambos países. Se daban así, los primeros pasos hacia la formación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), al que poco tiempo después se sumarían Uruguay y Paraguay.

La voluntad del gobierno argentino de diferenciarse de la política norteamericana comenzó a ser evidente con el reclamo de una solución política al tema de la deuda externa y quedó ratificada con la política sobre Centroamérica. El pico de mayor tensión en la relaciones con EEUU se produjo durante el viaje de Alfonsín, en 1985. Allí se enfrentó a su par estadounidense Ronald Reagan, al defender el Principio de No Intervención en relación con la política norteamericana en Nicaragua y al oponerse a apoyarlos en dicha contienda. En represalia, Reagan negó autorización para declarar en el Juicio a las Juntas a un ex diplomático acreditado en el país, así como también asumió la negativa a considerar la solución política por la deuda.

Otras medidas diplomáticas del gobierno radical tuvieron orientaciones de esta índole, como por ejemplo la firma de una serie de convenios internacionales que fueron ratificados por leyes, como el Pacto de San José de Costa Rica del año 1969 que protege a los habitantes de los países firmantes en cuestiones de derechos y garantías, la Convención contra el Apartheid de 1973 y distintos acuerdos que aseguran el mismo trato a trabajadores y trabajadoras y condenan todo tipo de discriminación contra las mujeres.

Cuando asumió Alfonsín, muchos sindicatos estaban intervenidos. Era necesario normalizarlos, convocando a elecciones para renovar sus autoridades. Uno de los temas centrales de la campaña electoral de la Unión Cívica Radical fue la denuncia de una “alianza militar-sindical” que se proponía limitar al futuro gobierno constitucional. Alfonsín intentó eliminar al “poder sindical”, tratando de democratizar las organizaciones gremiales para desestabilizar su potencial desestabilizador y aprovechando el desprestigio de la dirigencia gremial, agravado por la derrota electoral del peronismo y por la división en la cúpula dirigente. Buscando atacar el aspecto corporativo y poco democrático de las estructuras



sindicales, el gobierno elaboró un proyecto de ley de Normalización Institucional de los Sindicatos que apuntaba a quitar la hegemonía absoluta de la llamada “burocracia sindical”.

El proyecto pretendía dotar de representación a las minorías gremiales a partir de instaurar el voto secreto, directo y obligatorio de los afiliados, eliminar la reelección y nominar al Estado como fiscal de los comicios gremiales. La iniciativa provocó una dura oposición del sindicalismo, que fue respaldada por el justicialismo. El proyecto de ley presentado no logró la sanción del Congreso de la Nación: fue aprobado por la Cámara de Diputados pero rechazado por el Senado, donde los radicales perdieron por un solo voto de diferencia, al fracasar las gestiones con los senadores del Movimiento Popular Neuquino.

Después del intento frustrado de democratización sindical, el gobierno radical siguió una política errática y debió soportar el acoso de la CGT. Fortalecida y reunificada, se enfrentó duramente al gobierno, llevando adelante trece paros generales. La sucesión de seis Ministros de Trabajo, cada uno de los cuales ensayó una política diferente muestra claramente la búsqueda infructuosa en este conflictivo terreno. Amenazas, paros, negociaciones frecuentemente ajenas a las necesidades de los trabajadores sirvieron para desgastar al gobierno radical y desalentar a los trabajadores. La significación de los paros y las movilizaciones es compleja: expresaron, por una parte, el descontento social; al mismo tiempo, la CGT aparecía como aliada con grupos empresarios y con la Iglesia, descontentos con el gobierno radical por otros motivos. A la vez, parte de la izquierda política apoyó con entusiasmo estas huelgas, en las que quiso ver algo distinto que la sola maniobra de la burocracia sindical.

El gobierno de Alfonsín tuvo, inicialmente, una política decidida a resolver tanto la cuestión militar como temas referidos a la Justicia. Tres días después de asumir, el 13 de diciembre de 1983, se derogó la Ley de Amnistía que había sido implementada por los militares al final del gobierno. También se aprobó la posibilidad de interponer recursos de amparo contra las condenas impuestas por los militares, se modificó el Código de Justicia Militar, se derogó la legislación de facto, estableciendo castigos para quienes atentaran contra la vida constitucional y contra la democracia e incrementando las penas para quienes aplicaran cualquier tipo de torturas. Algunos militares que habían tenido reconocida responsabilidad en el secuestro y la desaparición de personas fueron encarcelados inmediatamente, como Ramón Camps, ex jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires; Jaime Chamorro, ex director de la Escuela de Mecánica de la Armada y Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del II Cuerpo del Ejército.

También pocos días después de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmó el decreto 187, por el cual se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con los objetivos de reconocer centros clandestinos de detención, recabar información sobre modalidades y formas en que se procedió a secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas, recibir declaraciones testimoniales de personal en actividad o en retiro de las fuerzas armadas y de seguridad, revisar registros carcelarios y policiales e investigar delitos cometidos con los bienes de personas desaparecidas.

El problema militar y de los derechos humanos fue muy complejo e intrincado. Desde

el comienzo, el gobierno debió enfrentar el difícil problema del disciplinamiento a las fuerzas armadas en el marco de la nueva vida democrática. Los militares no estaban muy predispuestos para esa subordinación. En el acto de asunción del nuevo jefe del Ejército, asistieron los generales Videla, Viola y Bussi, en lo que se interpretó como un acto de fuerza y provocación a la clase política, al gobierno y la ciudadanía y generó un profundo malestar en la sociedad. Los responsables del “Proceso” conservaban gran parte de su poder y no reconocían sus responsabilidades: reivindicaban su triunfo en “la guerra contra la subversión” y, a lo más, sólo estaban dispuestos a reconocer los “excesos” propios de una “guerra sucia”.

Estas circunstancias debieron pesar en el ánimo del Presidente, que limitó el juicio y castigo a los máximos responsables del genocidio. Se decidió juzgar a las cúpulas, es decir a los Comandantes en Jefe que dieron las órdenes y a los que cometieron delitos aberrantes. De esta manera fueron enjuiciados los integrantes de las tres primeras Juntas Militares y los máximos dirigentes de ERP y Montoneros.

El gobierno mantenía una actitud ofensiva y a la vez de conciliación: simultáneamente que encaraba un juicio tan importante, liberaba a los subordinados apelando al principio de obediencia debida, tal como había propuesto en su plataforma electoral e instruía a los fiscales para que enviaran las causas a la justicia militar para cuyos efectos se había creado el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Dicha situación provocó conflictos con la justicia civil, que se vio desplazada por la justicia militar. Por un lado, impugnaba la doctrina de seguridad nacional pero, por otro, tratando de pagar los menores costos posibles, intentaba juzgar a los responsables máximos y que las fuerzas armadas se ocuparan ellas mismas de juzgar cuadros militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. Pero las Fuerzas Armadas no sólo no efectuaron ninguna autocrítica, sino que obstruyeron la labor de la Justicia y de la CONADEP.

En julio de ese mismo año, la CONADEP hace público un avance de su Informe de Investigación, el cual es emitido por televisión con el título Nunca Más. En septiembre, el organismo entregó al presidente Alfonsín un informe de 50 mil carillas que era categórico: allí se sostenía que "la dictadura había producido la más grande tragedia de nuestra historia para alcanzar la tenebrosa categoría de lesa humanidad" y habían sido "pisoteados los principios éticos de las más grandes religiones". El informe de la CONADEP refuta categóricamente la teoría de los excesos individuales y demuestra que los derechos humanos habían sido violados en forma orgánica y sistemática por el Estado entre 1976 y 1983.

A pesar de las críticas que las organizaciones de derechos humanos le hicieron al gobierno por los sobreseimientos y leves condenas, el Juicio a las Juntas Militares que habían gobernado el país fue un hecho extremadamente importante: aportó pruebas categóricas sobre el genocidio y dejó abierta la puerta para la realización de futuros juicios.

En 1985, en medio de fuertes y crecientes presiones militares, el gobierno promulga la Ley de “Punto Final”, que pone un límite temporal de dos meses a las citaciones de oficiales involucrados en violaciones de los derechos humanos, pasado el cual ya no se efectuarían más convocatorias. Varias cámaras federales (Tucumán, Córdoba, Bahía Blanca, Rosario, La Plata y Mendoza) postergaron la feria judicial de verano para atender las causas pendientes, donde quedaron procesados más de 300 oficiales. La ley provocó una fuerte reacción de la sociedad

civil, organizaciones de derechos humanos, partidos y grupos políticos, importantes personalidades de diversos ámbitos, etc.: se reclamaba “juicio y castigo a los culpables”. Por su parte, muchos oficiales militares se negaban a comparecer frente a la justicia civil alegando que estaban siendo juzgados políticamente.

En la Semana Santa de abril de 1987, el gobierno constitucional fue sacudido por un levantamiento militar que conmocionó a todo el país. Un grupo de oficiales de Campo de Mayo, encabezados por el Teniente Coronel Aldo Rico, se alzó en armas exigiendo el fin de las citaciones judiciales relacionadas con la violación de los derechos humanos. También reclamaban la reivindicación del Ejército, según ellos “injustamente condenado”. Aunque Alfonsín declaraba que no habría negociaciones con los sublevados y los políticos firmaban el Acta de Compromiso Democrático, por el cual se obligaban a defender a la democracia, el gobierno recurrió a una solución extrajudicial, ante el temor de más derramamiento de sangre. El oficialismo, sin saber aprovechar el respaldo unánime de la población civil, que se manifestaba espontáneamente en contra de los sucesos de Semana Santa, cedió a la presión militar y otorgó a los “carapintadas” lo que reclamaban. Lo que sería la Ley de Obediencia Debida, que exculpaba masivamente a los oficiales subordinados por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Si bien es cierto que con este gesto no se reivindicaban las acciones militares, el gobierno adquirió una imagen de debilidad al desandar el camino que había comenzado a transitar al comienzo del mandato de Alfonsín. Además, el problema militar estaba lejos de quedar resuelto. En enero de 1988, Aldo Rico huyó de su prisión y se sublevó nuevamente en un lejano regimiento del nordeste del país. En ese caso, la movilización civil fue mínima, aunque tampoco hubo ningún apoyo para los sublevados. A fin de año, una nueva sublevación encabezada por el coronel Seineldín reclamaba una amplia amnistía y la reivindicación del Ejército. En ese caso, los responsables fueron apresados.

La principal base política de Alfonsín fue obviamente su partido, la Unión Cívica Radical y, dentro de él, una línea juvenil que le otorgó una dinámica renovadora. Sobre esta base, Alfonsín transitó un sendero de aciertos y errores. Y si entre los primeros pueden destacarse su afán democratizador, la defensa por los derechos humanos, el anticorporativismo y la convivencia pacífica (externa e interna), entre los segundos pueden nombrarse las permanentes contradicciones que tendrán la política económica, militar y sindical y algunos fallidos proyectos como el traslado de la Capital a Viedma o una reforma constitucional que apuntaba a la reelección presidencial.

En su apoyo a la democracia, el comportamiento de la oposición también transitó aciertos y errores. El peronismo realizó al comienzo, bajo la hegemonía de sus dirigentes históricos, una oposición frontal al radicalismo. Pero la nueva derrota electoral de 1985, abrió el camino a los sectores renovadores liderados por Antonio Cafiero y José Manuel de la Sota, entre otros. Los renovadores intentaban convertir al justicialismo en un partido moderno y progresista. Este sector, jugó un papel importante apoyando al gobierno durante el alzamiento militar de Semana Santa pero cambió a partir del triunfo parlamentario nacional de 1987 y el triunfo en las internas de Menem sobre Cafiero, en 1988. Y los problemas económicos

generarán una importante pérdida de consenso al gobierno.

Durante aquellos primeros años de democracia, la centroizquierda estaba representada por el Partido Intransigente e interpelaba a los mismos sectores sociales que el radicalismo y el peronismo renovador. Pero no tenía un programa claramente definido y su caudal electoral se fue diluyendo. La centroderecha, liderada por Álvaro Alsogaray, aprovechó la dinámica conservadora a nivel mundial con un discurso antiestatista y privatizador, que fue apoyado por importantes medios de comunicación y fue creciendo a medida que se deterioraba la imagen de Alfonsín y de su gobierno.

Carlos Saúl Menem se convirtió en el candidato presidencial del justicialismo en 1989, liderando un conglomerado de dirigentes y corrientes internas muy heterogéneas dentro del peronismo. En sus discursos, apelaba al tono populista clásico del movimiento pero dirigido ahora más a los sectores pobres que a la clase obrera en su conjunto. En el contexto de un rápido deterioro del gobierno de Alfonsín, caracterizado por un notable aumento del costo de vida y el descontrol de la economía, ocurren, en mayo de 1989 las elecciones presidenciales, donde el Frente Justicialista Popular consigue una victoria contundente, imponiéndose en todas las provincias y obteniendo la mayoría absoluta en el Senado y casi la mayoría en Diputados. Apenas conocidos los resultados electorales, comenzó a plantearse la posibilidad del adelanto en la entrega del mando presidencial, que estaba prevista para el 10 de diciembre.

La situación económica se deterioraba día a día y el Ministro de Economía hablaba de “terrorismo económico”. El aumento descontrolado de precios desembocó en un proceso hiperinflacionario y hacia fines de mayo comenzaron los saqueos en Córdoba, Rosario, Gran Buenos Aires, Salta y en varios centros urbanos. Para contener los desbordes, el gobierno apeló al estado de sitio y a la represión cuyo saldo fue de 14 muertos, un centenar de heridos y decenas de detenidos, en cifras oficiales.

La situación del gobierno radical, a más de 6 meses de la entrega del mando, se tornó insostenible. El costo de vida había trepado enormemente. El presidente intentó un plan de emergencia que fue rechazado por quienes conformarían el nuevo gobierno. Y mientras los factores de poder económico ejercían presión, Menem optó por no respaldar a un muy debilitado Alfonsín, quien finalmente renunció a la Presidencia y adelantó la entrega del mando para julio de 1989. Cinco meses antes de lo previsto, Carlos Saúl Menem se hizo cargo de la presidencia de la Nación e inició su mandato en un clima de incertidumbre.

El rumbo seguido por la política económica de Menem se apartó totalmente de la tradición peronista (en especial de la del período 1946-1955). El Estado no desempeñó la función dirigista de la economía y reguladora de los conflictos sociales. El objetivo central no fue promover la industrialización orientada al consumo interno sino que fue dirigida principalmente a fomentar la exportación. El nuevo presidente encontró el apoyo de los principales grupos empresarios locales y de los organismos financieros internacionales, cuyas pautas de “ordenamiento económico” se cumplirían estrictamente.

## **La Economía**

Cuando asumió el gobierno de la Unión Cívica Radical, la situación económica presentaba algunos problemas, que se habían agravado durante la última dictadura militar: alta inflación; elevado déficit fiscal acompañado de una baja recaudación impositiva y la falta de crédito interno y externo; deuda externa creciente heredada también de la anterior dictadura militar, cuyos servicios consumían buena parte de los recursos del Estado. En fin, una economía estancada.

Durante el primer año de gobierno, el Ministro de Economía fue Bernardo Grinspum, que aplicó una fórmula similar a la usada en la presidencia de Illia, entre los años 1963 y 1966. Se trataba de la orientación económica que la UCR compartía con el peronismo de la primera época y que en este caso no tuvo efectos positivos.

La aplicación de las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) no ayudó, pues se produjo una nueva aceleración de la inflación, caída de los salarios, disminución de la inversión y recesión económica, que se profundizó con una nueva devaluación de la moneda. La situación fiscal tampoco mejoró, ya que aunque se redujo el gasto público, esto fue en parte diluido por los efectos de la inflación sobre la recaudación tributaria real. En los primeros meses de 1985, la situación económica se deterioró y el nivel de las tensiones sociales y políticas se agravó. La CGT abandonó el diálogo con el gobierno.

A principios de 1985 ocupó el Ministerio de Economía Juan Sourrouille, quien el 15 de abril anunció la aplicación de un nuevo plan económico, al que calificó de “economía de guerra”: es decir, que exigiría grandes sacrificios a la población. Era el llamado “Plan Austral”, que de acuerdo a la versión oficial se proponía la estabilización de la economía para crear condiciones que permitieran proyectar transformaciones más profundas de crecimiento.

Con ese propósito se tomaron un conjunto de medidas antiinflacionarias, se cambió la moneda y el tradicional “Peso” fue reemplazado por el “Austral”; se congelaron los sueldos; se trató de mejorar la recaudación fiscal –es decir, el cobro de los impuestos- y se produjo una drástica reducción de los gastos del Estado. El gobierno se comprometió a no emitir moneda para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas. Se incrementaron los impuestos al comercio exterior y se definió una reforma impositiva que fue enviada al Parlamento. Además, se realizaron acuerdos con el FMI y el Club de París, buscando aliviar la presión de los acreedores externos.

Aunque algunos sectores, como los sindicatos, rechazaron el Plan Austral, la reacción de la población fue expectante y tuvo cierto grado de confianza, de modo que el congelamiento de los precios fue respetado en líneas generales y al principio se registró una baja de la tasa de inflación y una acelerada recuperación de los niveles de actividad industrial -cuya producción estaba destinada hacia el mercado interno- y que era impulsada, en parte, por la mejora en el poder adquisitivo del salario.

El impacto del Plan Austral se sintió no solo en el flanco económico. En el aspecto político favoreció la consolidación del sector alfonsinista y permitió salir airoso de la prueba electoral de 1985. Sin embargo a fines de ese mismo año retornó la inflación, se renovaron los reclamos de aumentos salariales y crecieron las dificultades en el sector externo, debido, principalmente al fuerte peso de la deuda externa.

El nuevo programa además preveía una segunda parte, que incluía privatizaciones de empresas públicas y medidas de apertura económica. Esa parte no se aplicó totalmente durante el gobierno de Alfonsín debido a las resistencias de la oposición, especialmente las del Partido Justicialista, y a las propias vacilaciones del oficialismo ante un programa que no era acorde con la tradición estatista y nacionalista de muchos de los dirigentes de la Unión Cívica Radical. Además, la cúpula del radicalismo sabía que la aplicación del nuevo programa tenía un costo político que no se decidió a pagar. Finalmente, el “giro realista” (como muchos llamaron al “plan austral”) fue decididamente implementado por el gobierno siguiente, el de Carlos Saúl Menem.

El año 1987 fue decisivo para el gobierno de Alfonsín. Mientras la situación económica empeoraba, aumentó considerablemente la presión de los militares y del movimiento sindical. Entre julio y octubre de 1987, el gobierno lanzó un nuevo plan económico, creando un nuevo impuesto con el objetivo de equilibrar el déficit fiscal. Una parte importante de ese déficit era producido por las empresas estatales ferroviarias, aéreas y de servicios como teléfonos, luz y agua; por los servicios sociales, por el peso de los pagos al exterior y por las altas subvenciones que recibía una parte del sector empresarial.

La situación era crítica y había que ensayar diferentes medidas para resolverla, por ejemplo, comenzaron a proponerse proyectos de privatización: en 1988, se propuso la privatización parcial de algunas empresas del Estado, como ENTEL o YPF. El argumento privatizador se centraba en la incapacidad de las empresas estatales para obtener las inversiones necesarias.

En agosto de 1988 el gobierno lanzó un nuevo plan económico –el “Plan Primavera”– que procuraba una vez más detener la inflación, que era cada vez más elevada. Preveía el congelamiento de precios, salarios y tarifas más el recorte de los gastos estatales. Contrariamente a lo esperado por el gobierno, se generó un fuerte proceso especulativo que erosionó desde el comienzo las expectativas generadas y tampoco dio buenos resultados.

Hacia fines de 1988 la situación económica se fue agravando cada vez más hasta que en febrero de 1989, una corrida especulativa provocó una nueva devaluación del Austral que provocó la pérdida de los ahorros de millares de personas. Inmediatamente se desencadenó un proceso hiperinflacionario que repercutió gravemente sobre precios y salarios y provocó la escasez de artículos de primera necesidad. La consecuencia más dramática de esta situación fue la ola de saqueos a supermercados y negocios de comestibles. La gente se aglomeraba en los supermercados tratando de obtener los artículos de uso cotidiano, cuyo precio variaba constantemente.

Los últimos meses de 1988 y la primera parte de 1989 transcurrieron en un clima económico, político y social tenso y enrarecido. Como vimos, el gobierno radical no tenía capacidad para controlar la economía ni margen para maniobrar políticamente. A fines de mayo, la hiperinflación siguió provocando episodios dramáticos, que mostraban la desesperación de los sectores de menores recursos en las zonas más pobres del país.

El 8 de julio, el gobierno radical pasaba anticipadamente el mando a los justicialistas, que dos meses antes habían obtenido un triunfo rotundo en las elecciones generales. Este

traspaso del mando de un presidente constitucional a otro era lo más novedoso ya que no ocurría desde 1932 (cincuenta y siete años atrás).

Carlos Menem había triunfado con un discurso que se oponía claramente a las medidas de restricción al gasto, a las privatizaciones de empresas estatales. Pero tanto “el salarizado” como “la revolución productiva”, dos de las principales consignas que había repetido el candidato ganador durante la campaña, fueron quedando en el olvido. Al poco tiempo de asumir, comenzó a proponer el fin del intervencionismo estatal, la privatización de las empresas públicas, el ajuste fiscal, la condena al capitalismo protegido y la apertura de la economía.

La presidencia de Menem representó un cambio sustancial respecto a la tradicional política social y económica del peronismo. Un aspecto central de la política de estos años fue el achicamiento del Estado por medio de la privatización de todas sus empresas, la paralización de la obra pública y drásticos recortes presupuestarios. Fue un modo de lograr recursos, al que se agregaron el aumento de la presión impositiva y el aporte de capitales externos.

A partir de abril de 1991 se hace cargo del Ministerio de Economía Domingo Cavallo, quien llevó a cabo políticas de apertura y desregulación de la economía: se liberalizaron los precios, se eliminaron las restricciones a las importaciones, se suprimió la promoción industrial, se quitaron las regulaciones al mercado financiero, se redujeron las operaciones de la banca estatal y avanzó la privada y se flexibilizó la legislación laboral. También se estableció la paridad Peso-Dólar, por medio de la Ley de Convertibilidad.

Las orientaciones neoliberales del gobierno contaron con el apoyo de grandes grupos empresarios locales, quienes se vincularon con los capitales transnacionales y establecieron alianzas económicas para obtener la adjudicación de las empresas estatales privatizadas. Así ocurrió en el sector del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las telecomunicaciones, entre otros sectores. La transnacionalización de las principales actividades económicas tuvo consecuencias negativas para el país: por un lado, las filiales de empresas extranjeras remitieron sus utilidades al exterior, efectuando pocas reinversiones; por otra parte, las empresas transnacionales persiguieron sus propios intereses y fueron ajenas a una perspectiva que tuviera en cuenta los intereses de la Nación.

## **La Sociedad**

La normalización institucional significó el establecimiento de un clima de libertad, imprescindible para la vida artística y cultural. Muchos intelectuales y científicos exiliados retornaron al país, jerarquizando las universidades y el sistema científico del Estado. Miles de argentinos pudieron expresarse con tranquilidad.

En el plano educativo, se buscó generar consenso para realizar modificaciones y adecuar el sistema educativo a los nuevos tiempos. El ingreso irrestricto a las universidades nacionales abrió la puerta a que cientos de miles de hombres y mujeres sean los primeros alumnos universitarios de sus familias. Con el nuevo gobierno democrático, se revitalizaron las condiciones de la producción académica y se produjo el regreso de numerosos científicos e intelectuales que se habían marchado al exilio a raíz de las persecuciones de las últimas dictaduras militares o las condiciones laborales sumamente precarias y las mejores

oportunidades brindadas en el exterior. Otro hecho importante en este plano, fue la realización del Congreso Pedagógico, cuyas recomendaciones sentaron las bases para la reforma de la Ley de Educación, que se daría posteriormente.

En el terreno legislativo se concretaron reformas que habían estado largamente postergadas. Después de muchas décadas de ser reclamada, en 1987 se aprobó la Ley de Divorcio Vincular, que establecía la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial y contraer nuevas nupcias. La cuestión del divorcio provocó el rechazo de la Iglesia y de buena parte de la sociedad civil, que consideraba al matrimonio como una unión indisoluble. También se estableció la patria potestad compartida por ambos cónyuges, concluyendo con la exclusividad paterna.

En los medios masivos de comunicación, particularmente en el cine y la televisión, se aflojaron los controles de la censura, lo que permitió el tratamiento de temas antes vedados. Los argentinos pudieron ver muchas películas nacionales y extranjeras, cuya exhibición había estado prohibida. También se difundieron piezas teatrales y literarias que habían sido censuradas por la dictadura militar.

Hubo espectáculos y recitales en los espacios públicos, que eran recuperados por la población y festejados con música, bailes, recitales y todo tipo de manifestaciones culturales.

En el mundo del trabajo, entre los años 1983 y 1984 se produjo un descenso de la desocupación, que se ubicó entre un 3,9 y un 4,4%. La cifra se elevó en 1985 al 6,3% para mantenerse en ese nivel hasta 1989, cuando en medio de una crisis hiperinflacionaria se elevó a un 8,1%. Los índices se redujeron entre 1990 y 1992 al 6%, sin embargo, a partir de 1993, los índices de desocupación comenzaron a tornarse preocupantes y se agravarían debido a la segmentación y la flexibilización laboral, llegando al 18% en 1995.

La población argentina en 1990 alcanzaba los 32.615.528 habitantes. La tasa de crecimiento desde el censo anterior fue el 14,7 por mil, siendo sensiblemente inferior al crecimiento del período censal 70-80, debido en parte al declive de la tasa de natalidad. No hubo aportes sustanciales de la inmigración ultramarina, que ya había cesado en el período anterior. El porcentaje de extranjeros radicados en el país era de 5%, siendo la mitad de ese porcentaje quienes venían de países limítrofes, fundamentalmente de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile.

El envejecimiento de la población siguió aumentado y la esperanza de vida al nacer en el período 1985-1990 era de 71 años, aunque muy diferente entre hombres (67,6) y mujeres (74,6). El índice de masculinidad siguió con la tendencia decreciente y se ubicó en el orden de 95,6 hombres por cada 100 mujeres. En el mismo sentido, la tasa de natalidad bajó hasta el 21,8 por mil habitantes y la tasa de mortalidad se mantuvo en torno al 8,5 por mil.

El analfabetismo se redujo de un 5,8% al 3,7% durante la década del 80. El proceso de urbanización se acentuó y, en 1990, 88,4 de cada 100 habitantes del territorio nacional vivían en centros urbanos. Consecuentemente continuó también la urbanización de casi todas las provincias, aunque con características particulares y diferentes de períodos anteriores.



